

# 3

## La fractura social se ensancha: intensificación de los procesos de exclusión en España durante 7 años

### COORDINADOR

Miguel Laparra Navarro

### AUTORES

M.ª Jesús Álvarez

Sagrario Anaut Bravo

Javier Arza Porras

Patricia Azcona Sáenz

Paola Damonti

Ángel García García

Enrique Gómez González

Rubén Lasheras Ruiz

Lucía Martínez Virto

Begoña Pérez Eransus

Antonio Ramírez del Río

Raúl Ruiz Villafranca

Manuel Trujillo Carmona

Nerea Zugasti Mutilva

# 3

## La fractura social se ensancha: intensificación de los procesos de exclusión en España durante 7 años

<b>3.1. Introducción</b>	153
<b>3.2. Una perspectiva de conjunto de las tendencias en exclusión social en España</b>	154
<b>3.3. El desempleo expande la exclusión social, pero la ocupación precaria también hace que aumente</b>	194
<b>3.4. Algunos síntomas de agotamiento del recurso tradicional a la solidaridad familiar</b>	212
<b>3.5. La erosión del efecto amortiguador de las políticas sociales en España</b>	223
<b>3.6. Conclusiones</b>	240
<b>3.7. Bibliografía</b>	244
<b>3.8. Otras tablas</b>	248

## Capítulo 3

# La fractura social se ensancha: intensificación de los procesos de exclusión en España durante 7 años

### 3.1. Introducción

En el VI Informe FOESSA se introdujo como novedad metodológica un análisis de la exclusión social a partir de un índice sintético de exclusión social (ISES), construido con una batería de 35 indicadores. Esta propuesta era coherente con la concepción estructural, multidimensional, procesual y dinámica de la exclusión social. Se basaba en la constatación de situaciones fácticas, constatables empíricamente, que suponían cada una de ellas suficiente gravedad como para poner en cuestión la plena participación social de las personas afectadas. Entendíamos que la acumulación de estas diversas situaciones de dificultad era la que situaba a determinados grupos de la sociedad en posiciones de exclusión del espacio social. Con estos 35 indicadores trataban de cubrirse las diversas dimensiones tanto del *eje económico* (como falta de participación en la producción, d1, y en la distribución de producto social, d2) como del *eje político de la ciudadanía* (como falta de participación política, d3, y de acceso efectivo a los derechos sociales: a la educación, d4, la vivienda, d5, y la salud, d6) y del *eje de los lazos sociales* (que se manifiesta en determinadas formas de relaciones conflictivas, d7, y en aislamiento social, d8). Este esquema de análisis se aplicó a la Encuesta sobre Integración

y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA (EINSFOESSA) de 2007.

A partir de este análisis se mostraba, ya antes de la crisis, una sociedad muy marcada por la precariedad, en la que amplios sectores de la población, más de la mitad, se veían afectados en distinta medida por alguno de estos problemas. En el extremo de este grupo podía verse una bolsa reducida, uno de cada veinte hogares, pero muy afectada por intensos procesos de exclusión social. Es importante recordar ahora que la pobreza y la exclusión social no son cosa de la crisis.

Con este mismo planteamiento, se trató de ofrecer una aproximación a los primeros efectos que la crisis estaba teniendo en el espacio social de la exclusión con la segunda edición de esta misma Encuesta FOESSA en 2009-2010 (EINSFOESSA, 2009), con un planteamiento, además, de encuesta panel, dirigida a los mismos hogares que la encuesta anterior (se logró en la mitad de los casos).

Pudo mostrarse cómo, ya en una fase temprana de la crisis, y antes de la introducción de medidas de austeridad en los presupuestos públicos, los procesos de exclusión social se estaban intensificando y

cómo muchos hogares se habían visto sobrepasados por la crisis, con una combinación de pérdida del empleo, reducción de ingresos, acumulación de deudas e incapacidad para cubrir las necesidades más básicas.

A partir de la nueva Encuesta FOESSA 2013<sup>(1)</sup> (EINSFOESSA13) tenemos la oportunidad ahora de ver cómo se han intensificado estos procesos de exclusión social por efecto de la combinación del empeoramiento del mercado de trabajo y de las medidas de recorte de las políticas sociales. En esta edición se ha abandonado el objetivo de localizar los mismos hogares que en las ediciones anteriores, pero se ha ampliado notablemente la muestra, mejorando así la capacidad de análisis y de precisión en las estimaciones. Con estas tres encuestas, el propósito de este capítulo es dar cuenta adecuadamente de las transformaciones que la sociedad española está experimentando en cuanto a su nivel de integración y de cohesión social en el periodo de estos

seis últimos años, valorar cuanto está aumentando el espacio de la exclusión social y ver qué grupos sociales se están viendo más afectados.

Para hacer este trabajo de análisis comparativo de las tres encuestas se han rehecho y revisado el conjunto de los indicadores en las tres ediciones para garantizar que la comparación se hacía sobre unas mismas bases metodológicas, eliminado en algún año algún indicador que no se consideraba fiable.

Utilizamos en este análisis el sistema de ponderación de los indicadores inicial, correspondiente a 2007. Esto nos permite valorar la importancia de cada problema en la misma medida para todo el periodo y tomando como referencia un contexto que era de mayor estabilidad y con menores convulsiones en la situación de los hogares.

Fruto de las correcciones realizadas en las encuestas anteriores y de la homogeneización en el sistema de agregación de los indicadores, los resultados presentan ligeras variaciones respecto de los que se habían aportado las ediciones anteriores. Más allá de la precisión del dato, hemos valorado que lo importante era dar cuenta de la tendencia y garantizar que la comparación se hacía de la mejor manera posible.

---

(1) Para ampliar esta información consultar Trujillo Carmo (2014). Documento de trabajo 3.10. y Laparra Navarro y García García (2014). Documento de trabajo 3.11. para el VII Informe FOESSA. Accesibles en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.

## 3.2. Una perspectiva de conjunto de las tendencias en exclusión social en España

### 3.2.1. La fractura social se ensancha un 45% en España

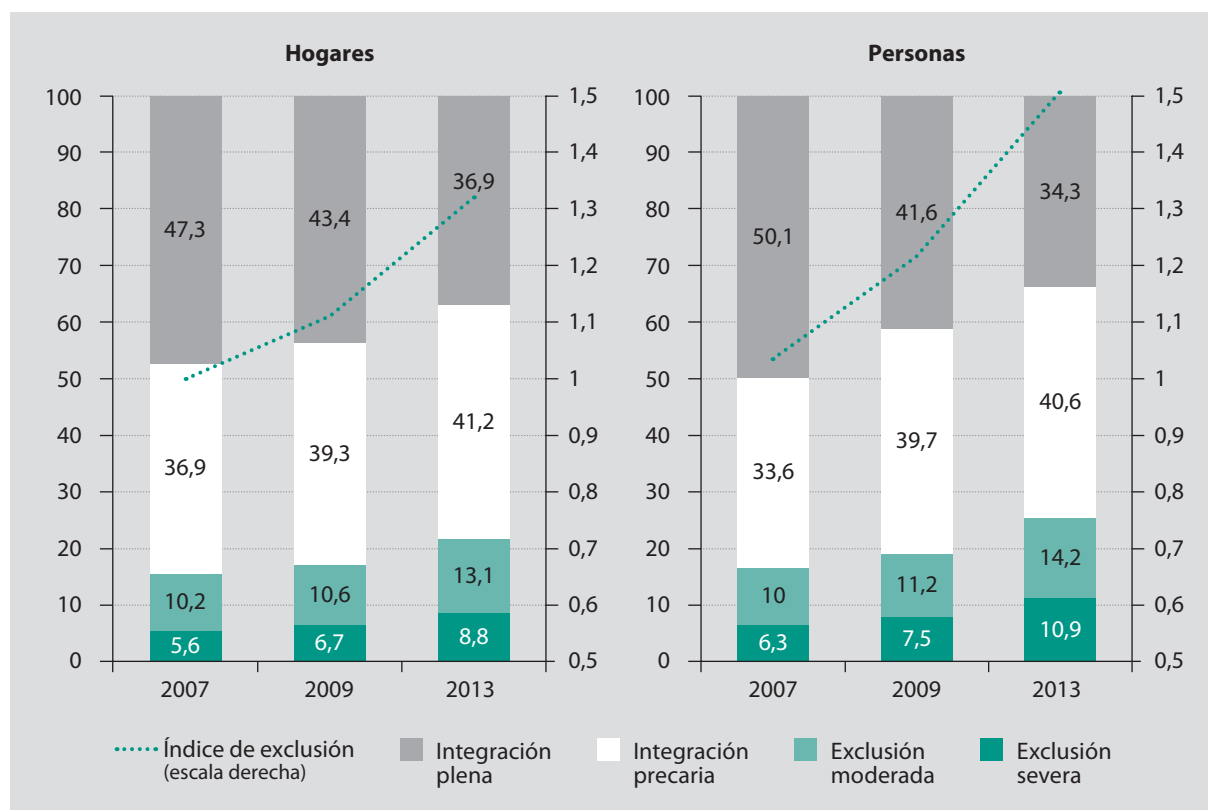
El empeoramiento de la situación social en España se extiende a amplios sectores de la población. Ahora ya solo una de cada tres personas en España se encuentra libre de los 35 problemas que se han identificado en este análisis, 16,5 pun-

tos menos que en 2007. Este núcleo central de la sociedad española, que llamamos *integración plena*, es ya una estricta minoría. Por el contrario todos los espacios, desde la *integración precaria* o la *exclusión moderada* hasta la *exclusión más severa* han aumentado significativamente<sup>(2)</sup>.

---

(2) *Integración plena*: hogares que no se ven afectados por ninguno de los 35 indicadores (ises = 0).

**GRÁFICO 3.1. Evolución de los niveles de integración social en la población española, 2007-2013**



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

Tomando como unidad de análisis el hogar se establece un Índice Sintético de Exclusión Social (ISES) igual a 1,00 en 2007 (esto es así por el modelo de agregación utilizado). Aplicado en los años siguientes, con los mismos criterios, este ISES nos informa de si la cohesión social se está deteriorando en su conjunto (el ISES crece por encima de 1) o si se está produciendo una reducción de los procesos de exclusión social (el

ISES baja por debajo de 1). Ya para 2009-2010, el ISES aumentaba a 1,11 y llegaba a 1,32 en 2013. Esto supone por tanto un empeoramiento de un 32% respecto del momento inicial para el conjunto de los hogares españoles.

En total, el espacio social de la exclusión social, que suponía en torno a un 15,8% de los hogares en 2007, había aumentado casi 2 puntos en la primera etapa de la crisis, pero esa expansión se intensificaba notablemente después hasta, el 21,9% de los hogares en 2013.

En términos de población y no de hogares, este empeoramiento se manifiesta todavía con más claridad, al ser los hogares de mayor tamaño los que más afectados se han visto. El total de per-

*Integración precaria:* hogares que presentan alguno de los 35 problemas señalados, pero con una incidencia similar a la media de la población española ( $0 < ises < 2$ ).

*Exclusión compensada o moderada:* La incidencia es doble que la media de la población española sin llegar a ser severa ( $2 < ises < 4$ ).

*Exclusión severa:* La incidencia es cuádruple que la media ( $ises > 4$ ).

sonas afectadas por situaciones de exclusión ha pasado del 16,3% al 25,1%, siendo en los últimos cuatro años cuando se ha producido el mayor deterioro (un aumento de 6,5 puntos del espacio social de la exclusión). El ISES del conjunto de la población pasa del 1,03 en el año 2007 al 1,21 en 2009 y al 1,50 en 2013. *Las grietas de la cohesión social son ahora más anchas en España: la fractura social se ha ensanchado un 45% en este periodo.*

En la tabla siguiente puede verse el resultado de aplicar estos indicadores al conjunto de la población española, que también ha crecido en este periodo en términos absolutos. Un total de 11,7 millones de personas (3,8 millones de hogares) están afectadas en España por distintos procesos de exclusión social, lo que supone 4,4 millones más que en 2007, un 60,6% más (1,2 millones de hogares más, un crecimiento del 48%).

Más preocupante todavía resulta la evolución de la exclusión más severa tanto por la intensidad

y acumulación de problemas que implica, como por el aumento cuantitativo que ha experimentado: 5 millones de personas se encuentran ya afectadas por situaciones de exclusión severa, un 82,6% más que en 2007. Este millón y medio de hogares requerirían una atención de urgencia desde los distintos dispositivos públicos de protección social.

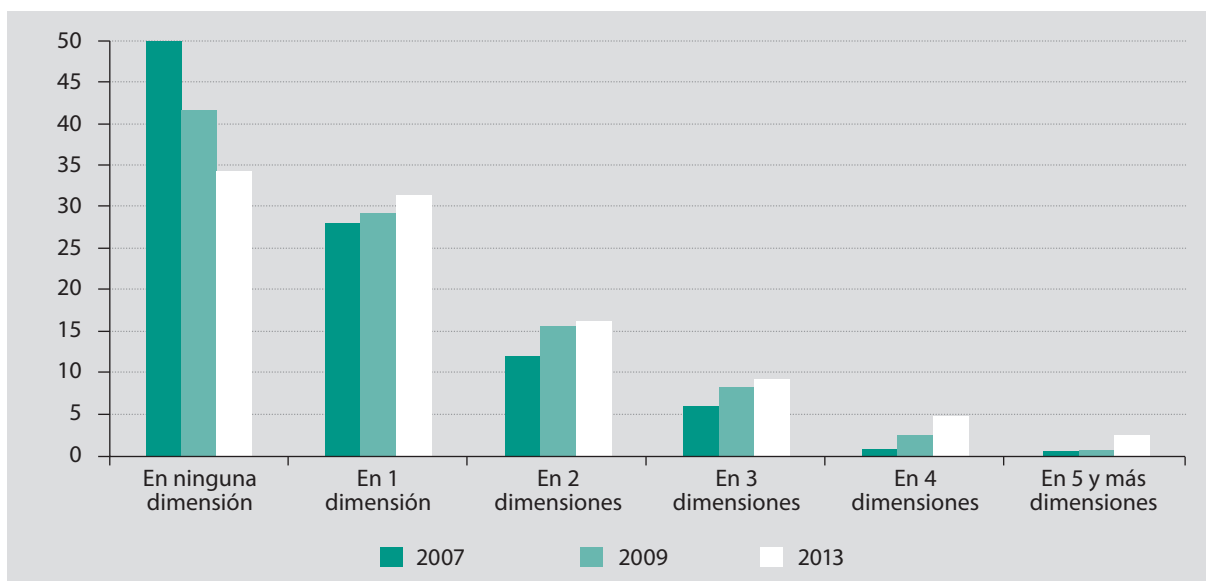
En el gráfico 3.2. puede verse cómo ha crecido significativamente la acumulación de problemas en distintas dimensiones de entre las analizadas aquí (empleo, consumo, participación política, educación, salud, vivienda, conflicto social y aislamiento social). No solo se ha producido una extensión de todas estas problemáticas, sino que además estas cada vez se acumulan más en los hogares afectados. Por este motivo, las políticas de inclusión que se diseñen en el futuro deberán ser más complejas, más multidimensionales y más integrales si quieren ser efectivas.

**TABLA 3.1. Estimación de la población y del número de hogares en situaciones de exclusión social, 2007-2013**

	Población			Hogares		
	Mediados 2007	Finales 2009	Mediados 2013	Mediados 2007	Finales 2009	Mediados 2013
<b>Total exclusión social</b>						
Total (miles)	44.874	45.983	46.425	16.329	17.121	17.441
Proporción excluidos (%)	16,3	18,7	25,1	15,8	17,2	21,9
Estimación excluidos (miles)	7.314	8.599	11.746	2.580	2.945	3.820
Crecimiento respecto de 2007 (%)	—	17,6	60,6	—	14,1	48,0
	Población			Hogares		
	Mediados 2007	Finales 2009	Mediados 2013	Mediados 2007	Finales 2009	Mediados 2013
<b>Exclusión social severa</b>						
Total (miles)	44.874	45.983	46.610	16.329	17.121	17.441
Proporción excluidos (%)	6,2	7,5	10,9	5,6	6,7	8,9
Estimación excluidos (miles)	2.782	3.449	5.080	914	1.147	1.552
Crecimiento respecto de 2007 (%)	—	24,0	82,6	—	25,5	69,8

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

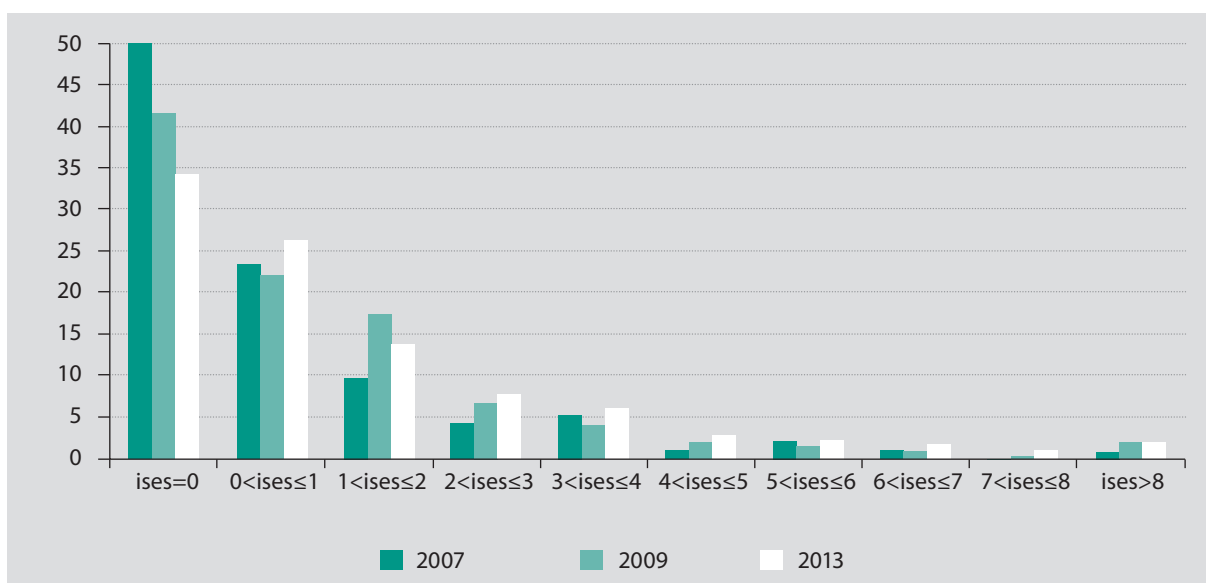
**GRÁFICO 3.2. Distribución porcentual de la población española según la presencia de problemas de exclusión social en diversas dimensiones**



*Nota:* Las dimensiones analizadas son ocho: empleo, consumo, participación política, educación, salud, vivienda, conflicto social y aislamiento social.  
*Fuente:* EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

Utilizando el índice sintético de exclusión social podemos ver este empeoramiento general en todos los espacios: la integración es cada vez menos plena y más precaria, mientras que el espacio social de la exclusión crece tanto en sus niveles más moderados como en los más severos.

**GRÁFICO 3.3. Distribución porcentual de la población española en intervalos del Índice Sintético de Exclusión Social (ISES)**



*Fuente:* EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

### 3.2.2. Qué es lo que ha ido mal

No cabe duda de que son los ámbitos del empleo (y su incidencia en los ingresos), de la vivienda y de la salud los que más han aportado al aumento de la fractura social. Podría pensarse que en esto influye el número de indicadores de cada una de las dimensiones y la forma en la que se han definido. Sin embargo, la evolución temporal no deja lugar a dudas: la incidencia de los problemas de exclusión del empleo se multiplican por 2,5 y los de salud se duplican. Los problemas de vivienda, que partían de un nivel relativamente elevado, se incrementan un 36%.

En los sectores excluidos, el ámbito de la participación política presenta también un amplio déficit y, en los sectores de la exclusión severa, las privaciones más básicas afectan al 50%.

Es de destacar que, en su conjunto, para el total de la población, los problemas de relaciones sociales y familiares no han experimentado un deterioro e incluso el aislamiento social se ha reducido. Parece claro que una parte de la población ha reaccionado a las dificultades económicas re-

forzando los lazos y los apoyos con las personas más cercanas.

#### 3.2.2.1. Los problemas del eje económico

En el ámbito del empleo lo más relevante es sin duda la reducción de su presencia en los hogares, bien sea en relación con la persona sustentadora principal, bien para el conjunto del hogar. La falta de alternativas formativas para estas personas hace que los hogares con desempleados que no reciben ninguna formación sea ahora cuatro veces mayor que en 2007.

En sentido contrario es destacable que el empleo de exclusión (aquel que se da en condiciones de precariedad extrema o de forma irregular) no ha aumentado tanto o incluso se ha reducido: la detección de casos en los que el sustentador principal tiene un empleo irregular (sin cobertura de la Seguridad Social) es un punto menor que en 2007. La crisis ha llegado también al sector informal de la economía que se ha resentido por la falta de demanda: lo que en otros periodos de dificultad y elevado desempleo fue una alternativa para la subsistencia de muchas familias en esta ocasión no es una salida viable.

**TABLA 3.2. Población afectada por cada una de las dimensiones de la exclusión social para el el total de la población, para la población excluida y para la exclusión social severa (%)**

Dimensiones de la exclusión	Total población			Población excluida			Población en exclusión severa		
	2007	2009	2013	2007	2009	2013	2007	2009	2013
Exclusión del empleo	16,9	29,7	41,5	45,3	71,0	77,1	39,3	84,5	84,7
Exclusión del consumo	s.d.	s.d.	7,3	s.d.	s.d.	28,9	s.d.	s.d.	52,3
Exclusión política	12,2	21,1	13,9	22,2	51,7	32,2	29,2	46,5	38,8
Exclusión de la educación	10,4	11,0	8,6	19,9	30,0	20,2	23,7	33,7	27,2
Exclusión de la vivienda	21,5	22,6	29,2	55,1	54,2	61,7	66,2	61,5	84,8
Exclusión de la salud	9,4	10,5	19,8	34,2	31,5	46,0	37,0	42,2	60,3
Conflicto social	5,0	6,1	6,2	28,9	19,5	17,9	37,2	24,9	23,2
Aislamiento social	4,4	2,5	2,7	13,4	5,4	5,3	19,8	7,0	7,2

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.



La pobreza severa se ha duplicado: los hogares situados bajo el estricto umbral del 30% de la mediana equivalente en el periodo analizado (umbral estable), era del 3,5% en 2007; no creció apenas en los primeros años de la crisis, pero ha llegado al 7,3% en 2013. Nótese que la utilización de un umbral estable para el periodo analizado, bastante justificado en un periodo de fuertes transformaciones para ver el empobrecimiento real de la población, aporta una perspectiva muy distinta de la que se desprende de las cifras oficiales que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE) utilizando un umbral distinto para cada año (descendente en el periodo analizado).

Y se ha empobrecido el conjunto de la población del espacio social de la exclusión: el 54% de los hogares excluidos se encuentran bajo el umbral de pobreza (14 puntos más que en 2007) y el 23,8% en situación de pobreza severa (+4,7 puntos). Se ve así disminuido el margen de maniobra económica para afrontar el déficit que estos hogares también presentan en otras dimensiones de la vida social.

La privación de los bienes más básicos para los hogares se mantiene reducida todavía, pero seguramente se irá viendo afectada conforme se vayan prolongando las situaciones de carencia de ingresos.

**TABLA 3.3. Indicadores de exclusión social en el eje económico (participación en la producción y en el producto)**

N.º	Indicadores	Hogares			Personas		
		2007	2009	2013	2007	2009	2013
1	Hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un año o más	1,0	5,1	7,5	1,1	6,0	9,2
2	Hogares cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: vendedor a domicilio, venta ambulante apoyo, venta ambulante marginal, empleadas hogar no cualificadas, peones agrícolas eventuales temporeros, recogedores de cartón, reparto propaganda, mendicidad	2,9	2,4	3,2	3,1	2,7	3,7
3	Hogares cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: que no tiene cobertura de la seguridad social (empleo irregular)	4,1	1,9	2,9	3,5	2,5	3,2
4	Hogares sin ocupados, ni pensionistas contributivos, ni de baja, ni con prestaciones contributivas por desempleo del INEM	4,9	—	7,8	4,7	—	7,6
5	Hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año	6,9	21,0	27,6	8,7	27,1	36,0
6	Hogares con todos los activos en paro	2,2	10,6	10,9	2,3	11,6	12,3
7	Pobreza extrema: ingresos inferiores al 30% de la renta familiar mediana equivalente. Umbral estable en euros constantes como media de los 3 años (2.891 € en 2007, 3.014 € en 2009 y 3.273 € en 2013)	2,8	2,9	5,3	3,5	3,3	7,3
8	Hogares que no cuentan con algún bien considerado básico por más del 95% de la sociedad (agua corriente, agua caliente, electricidad, evacuación de aguas residuales, baño completo, cocina, lavadora, frigorífico) y que no pueden permitírselo	—	—	1,7	—	—	1,6

### 3.2.2.2. La erosión de la ciudadanía política y social

El proceso de ampliación de la Unión Europea, las naturalizaciones de población extranjera, el aumento de convenios de reciprocidad en reconocimiento del derecho al voto y la reversión de los flujos migratorios han hecho que ahora, una menor proporción de la población que vive en España esté privada de los más básicos derechos políticos. Sin embargo, la creciente desconfianza

de la ciudadanía en general respecto de la política genera un mayor proceso de alienación en los sectores más vulnerables, que pierden el interés por participar en la cosa pública, bien a través de las elecciones, bien a través de las entidades ciudadanas: este proceso de alienación política fue mayor en los primeros años de la crisis pero, a pesar de una cierta repolitización, que podría explicarse como reacción a los efectos de la crisis y los recortes sociales, aún tiene una incidencia doble que en 2007.

**TABLA 3.4. Indicadores de exclusión social en el eje político de la ciudadanía política y social**

N.º	Indicadores	Hogares			Personas		
		2007	2009	2013	2007	2009	2013
9	Derecho de elegir a tus representantes políticos y a ser elegido: hogares con alguna persona de 18 o más años, de nacionalidad extracomunitaria (sin convenio de reciprocidad)	9,1	9,8	5,0	8,4	11,2	6,1
10	Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de decisiones colectivas: no participan en las elecciones por falta de interés y no son miembros de ninguna entidad ciudadana	4,8	12,2	8,4	4,2	12,5	8,5
11	Hogares con menores de 3 a 15 años no escolarizados	1,3	0,9	0,9	2,0	1,4	1,6
12	Hogares en los que nadie de 16 a 64 años tiene estudios: de 16 a 44, sin completar EGB, ESO o graduado escolar; de 45 a 64, menos de 5 años en la escuela (en 2009 y 2013 se incrementan los años transcurridos desde 2007 a cada tramo correspondiente)	5,0	6,2	2,9	5,5	7,1	3,3
13	Hogares con alguna persona de 65 o más que no sabe leer y escribir o no han ido a la escuela	6,2	5,5	4,7	5,4	4,7	4,1
14	Infravivienda: chabola, bajera, barracón, prefabricado o similar	1,4	0,4	0,7	1,6	0,5	0,8
15	Deficiencias graves en la construcción, ruina, etc.	1,3	1,3	1,6	1,4	1,3	1,8
16	Humedades, suciedad y olores	7,4	8,1	9,6	7,6	8,4	10,2
17	Hacinamiento grave (<15 m <sup>2</sup> persona)	4,8	3,7	3,3	6,9	7,6	7,0
18	Tenencia en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente)	3,8	1,0	1,5	2,7	1,1	1,6
19	Entorno muy degradado	0,6	0,6	2,4	0,5	0,8	2,7
20	Barreras arquitectónicas con discapacitados físicos en el hogar	2,7	3,3	5,7	2,6	3,1	5,5

N.º	Indicadores	Hogares			Personas		
		2007	2009	2013	2007	2009	2013
21	Gastos excesivos de la vivienda (ingresos - gastos viv. < umbral pobreza extrema con umbral estable)	4,5	7,6	11,1	5,0	7,8	14,1
22	Alguien sin cobertura sanitaria	0,7	0,0	0,5	0,6	0,0	0,3
23	Han pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la están pasado ahora	2,7	1,7	3,9	2,0	2,5	4,5
24	Todos los adultos con minusvalía, enfermedad crónica o problemas graves de salud que les generan limitaciones para las actividades de la vida diaria	2,4	3,3	2,6	1,1	1,9	1,2
25	Hogares con personas dependientes (que necesitan ayuda o cuidados de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria) y que no la reciben	0,9	0,7	1,2	0,8	0,7	1,1
26	Hogares con enfermos, que no han usado los servicios sanitarios en un año	0,6	0,1	0,9	0,7	0,1	1,0
27	Hogares que han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos	5,6	5,8	13,3	5,4	7,0	15,8

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

La exclusión de la educación no ha experimentado variaciones sustanciales en este periodo preferentemente porque los efectos de las transformaciones en este campo se ven a más largo plazo. Incluso las variaciones que muestran algunos indicadores podrían explicarse más por cuestiones metodológicas y clasificatorias que por cambios reales.

Curiosamente, la burbuja inmobiliaria y la enorme expansión del parque de viviendas, anterior al periodo que aquí analizamos, no impidió que una proporción importante de hogares, uno de cada cinco, afrontara algún problema grave en este ámbito en 2007. Es evidente que esa expansión inmobiliaria respondía más a una motivación económico-especulativa que a una necesidad social.

Y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con lo que supone de reducción de la especulación y aumento de la oferta de viviendas, y con ello de reducción de su precio, tanto en

compra como en alquiler, tampoco ha traído consigo ninguna mejora en este ámbito, sino todo lo contrario, un significativo empeoramiento.

Incluso aunque pueda observarse una cierta reducción de los hogares en infraviviendas, en situaciones de hacinamiento o con tenencia en precario, la degradación del entorno y el aumento de hogares con barreras arquitectónicas (y personas con discapacidad) parece haber aumentado. Sin embargo, el proceso más preocupante es el incremento de los hogares que, para mantener su vivienda, deben hacer un esfuerzo económico tan importante que les sitúa en situaciones de pobreza severa una vez descontados los gastos de vivienda: en términos de población afectada, casi se ha triplicado y alcanzado ya al 14,1% de la población.

Aunque los efectos de la exclusión social sobre la salud son acumulativos y se ven sobre todo en el largo plazo, después de estos años de cri-

sis puede observarse ya un empeoramiento muy notable en cuanto a la garantía de los derechos sociales en este ámbito. Y eso a pesar de que los recortes en las prestaciones sanitarias se han aplicado muy recientemente, en los dos últimos años. Las situaciones de falta de cobertura sanitaria, que prácticamente habían desaparecido, vuelven ahora a reaparecer, y la experiencia de haber pasado hambre ha aumentado significativamente. Pero sin duda aquí también son las crecientes dificultades económicas de los hogares, unidas a la incidencia del copago farmacéutico, lo que ha hecho que los hogares que han dejado de comprar medicinas, seguir dietas o tratamientos por problemas económicos sean ahora casi el triple en términos de población, alcanzando al 15,5%.

### 3.2.2.3. Se mantiene la calidad de las relaciones sociales

No se desprende de los indicadores utilizados que el empeoramiento general de la cohesión social en España, claramente manifiesto en los ejes económico y político, se haya traducido también en un empeoramiento de las relaciones entre la ciudadanía: la valoración que se hace de las relaciones internas en la familia no ha empeorado, sino todo lo contrario (se reduce a la mitad los que las califican como malas); y lo mismo pasa con las relaciones vecinales. Las situaciones de aislamiento personal (personas que no cuentan con apoyo para situaciones de enfermedad o de dificultad) también experimentan una reducción.

**TABLA 3.5. Indicadores de exclusión social en el eje de las relaciones sociales (conflicto social y aislamiento social)**

N.º	Indicadores	Hogares			Personas		
		2007	2009	2013	2007	2009	2013
28	Alguien en el hogar ha recibido o recibe malos tratos físicos o psicológicos en los últimos 10 años	—	2,0	2,5	—	2,1	2,7
29	Hogares con relaciones muy malas, malas o más bien malas	1,4	0,7	0,7	1,5	0,7	0,8
30	Hogares con personas que tienen o han tenido en los 10 últimos años problemas con el alcohol, con otras drogas o con el juego	—	3,9	2,4	—	3,7	2,6
31	Alguien ha sido o está a punto de ser madre adolescente sin pareja	2,1	0,9	0,6	2,0	1,2	1,0
32	Hogares con personas que tienen o han tenido en los 10 últimos años problemas con la justicia (antecedentes penales)	2,6	1,1	0,8	2,5	1,2	1,0
33	Personas sin relaciones en el hogar y que no cuentan con ningún apoyo para situaciones de enfermedad o de dificultad	6,4	5,6	5,4	2,8	2,2	2,0
34	Hogares con malas o muy malas relaciones con los vecinos	1,7	0,6	0,6	1,6	0,4	0,5
35	Hogares con personas en instituciones: hospitales y pisos psiquiátricos, centros de drogodependencias, de menores, penitenciarios, para transeúntes o mujeres	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

Sí se registra un aumento significativo en los malos tratos declarados en el hogar respecto a los datos comparables de 2009, aunque esto merece un análisis específico, que se desarrolla en un Documento de trabajo independiente.

Los problemas que de una forma u otra tienen que ver con los hábitos y comportamientos de la población siguen la misma tónica de reducción: problemas declarados con la justicia, problemas de dependencias y adicciones.

Todo ello nos apunta al mantenimiento, a pesar de las fuertes dificultades, de un gran recurso de capital social en la sociedad española, un recurso que es de vital importancia preservar.

Incluso el espacio social de la exclusión, al estar más condicionado cada vez por la dimensión económica, está cada vez menos marcado por este tipo de problemas que tienen que ver con los comportamientos y las relaciones interpersonales. El crecimiento del espacio social de la exclusión, con hogares que provienen de situaciones más «normalizadas» implica una cierta normalización y una menor presencia relativa de sectores marginales. Lo reciente de estos procesos de caídas, en los últimos cuatro años principalmente, hace que las relaciones sociales y las referencias normativas de la población afectada por problemas económicos todavía no se haya visto muy perjudicada.

Es importante por ello montar urgentemente los mecanismos de respuesta a estas situaciones, de forma que puedan construirse itinerarios de reincorporación social de muchos de estos sectores afectados por la crisis, antes de que el paso del tiempo y la acumulación de dificultades vayan erosionando progresivamente este importante recurso de la sociedad española: su capital social y su calidad humana.

### 3.2.3. La incidencia de la exclusión social en distintos sectores de la sociedad: ¿es cierto que la crisis nos afecta a todos?<sup>(3)</sup>

Señalábamos, al analizar el primer impacto de la crisis, que se estaba alterando sustancialmente la geografía del espacio social de la exclusión y que los distintos grupos sociales se estaban viendo afectados de forma muy diferente unos de otros, dentro de este esquema de empeoramiento general. Más allá de la idea de que «la crisis nos afecta a todos», veíamos desde el análisis del primer impacto que podía hablarse claramente de ganadores y perdedores en todo este proceso (Laparra y Pérez, 2011).

Casi cuatro años después, este diagnóstico sigue siendo válido y las diferencias se han extremado en ciertos casos:

#### 3.2.3.1. Se reducen las diferencias por sexo<sup>(4)</sup>

Tomando como referencia el conjunto de la población, la incidencia de la exclusión social es igual en hombres y en mujeres. Pero no es óbice para que sea de interés introducir aquí la perspectiva de género.

La introducción de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza y exclusión es el resul-

<sup>(3)</sup> Esta sección recoge los principales resultados del análisis realizado en Ruiz Villafranca, Ramírez del Río y Gómez González (2014). Documento de trabajo 3.9. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.

<sup>(4)</sup> Esta sección recoge los principales resultados del análisis realizado en Damonti (2014). Documento de trabajo 3.1. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.

tado de un largo proceso que empezó hace tres décadas, cuando por primera vez fue elaborado el concepto de «feminización de la pobreza» (Scott, 1984). Treinta años después, sin embargo, consideramos más adecuado utilizar la noción de análisis de género de la exclusión social (Pérez Eransus y Laparra, 2007), concepto que hace referencia tanto a una sobrerrepresentación de las mujeres en el espacio de la exclusión (Subirats, 2004) como (sobre todo) a la existencia de itinerarios de exclusión diferenciados en función del género (Pérez Eransus y Laparra, 2007).

Ante todo resulta interesante observar que, a nivel individual, las diferencias en función del sexo han ido reduciéndose entre 2007 y 2013: si hace ocho años, de hecho, había una diferencia de más de 5 puntos en el porcentaje de hombres y mujeres en situación de plena integración (51,4% frente a 46,1%), en 2013 los datos se nivelan hacia abajo para todos y todas (solo el 34,2% de los hombres y 34,4% de las mujeres están ya plenamente integrados). Lo mismo sucede en el caso de las personas en situación de integración precaria (donde la diferencia de casi 3 puntos existente en 2007 desaparece en 2013) y de exclusión moderada (donde una diferencia de más de dos puntos en 2007 se reduce a 0,4 en 2013). Diferente es el caso de la exclusión severa, donde no ha habido diferencias significativas en función del sexo en el periodo analizado. Estos datos indican que, en los años transcurridos desde la encuesta de 2007, la situación social ha empeorado para todo el mundo, tanto hombres como mujeres, pero que, comparativamente, ha impactado más en la población masculina.

Por otra parte, como el análisis del nivel de integración se realiza para el conjunto del hogar, y al individuo se le atribuyen las características de su hogar, las diferencias existentes en función del sexo dentro de los hogares pueden quedar ocultas. Por ello, resulta de interés la comparación entre hogares cuyo sustentador principal es un hombre o una mujer.

Entre 2007 y 2013, el porcentaje de hogares encabezados por una mujer crece 6,7 puntos porcentuales (desde el 26,5% hasta el 33,2%). Avanzamos la hipótesis de que este aumento está relacionado con una crisis económica que ha impactado con más fuerza en sectores masculinizados, convirtiendo así el sueldo de la mujer, antes secundario, en el sueldo principal del hogar. Esta sustitución, por otra parte, no consigue evitar un empeoramiento de las condiciones generales del hogar, ya que, como han señalado numerosos autores y autoras, sigue existiendo una brecha de género en el mercado laboral, que se concreta en salarios inferiores y mayor incidencia del empleo precario para las mujeres (Subirats, 2004; UGT Navarra, 2014).

Los hogares encabezados por una mujer siguen estando más afectados por la exclusión social (2,8 puntos porcentuales más y un ISES casi 2 décimas mayor que los encabezados por varones). Y, aunque las diferencias en cuanto a la incidencia se van reduciendo entre ambos tipos de hogares, como producto del aumento en el conjunto de la sociedad de los hogares cuyo sustentador principal es una mujer, aumenta también este tipo de hogares en el espacio social de la exclusión, suponiendo ya el 36,1%. La incidencia de la exclusión entre 2007 y 2013 aumenta para todos los hogares, pero aumenta de manera más significativa para los hogares encabezados por hombres (donde se observa un incremento del 26,4%, frente al 17,3% de los hogares encabezados por mujeres).

En cualquier caso, en la medida en la que la exclusión social se hace más intensa, las diferencias entre ambos tipos de hogares se van reduciendo y la proporción de hogares en exclusión severa es prácticamente la misma para los hogares encabezados por un varón y por una mujer.

El hecho de que la situación empeore más intensamente para los hogares encabezados por

hombres, sin embargo, no puede esconder que los hogares encabezados por mujeres enfrentan un riesgo de vivir procesos de exclusión considerablemente más elevado. La proporción de hogares en integración precaria era un 12,9% más elevada y la de hogares en exclusión moderada un 16,9% mayor. En el caso de la exclusión severa, sin embargo, no se evidencian diferencias significativas en función del sexo. Viendo en su conjunto estos procesos, los hogares encabezados por mujeres presentan un Índice Sintético de Exclusión Social igual a 1,39, mientras que para los hogares encabezados por hombres es 1,29, es decir, una diferencia del 7,2%.

Si consideramos de forma separada las diferentes dimensiones de la exclusión, podemos comprobar que los hogares encabezados por mujeres presentan un riesgo mucho más elevado de experimentar exclusión relacional, tanto desde el punto de vista del conflicto social (la experimenta el 8,3% de los hogares encabezados por mujeres frente al 4,2% de los encabezados por hombres) como en el caso del aislamiento social (9,7% frente a 4,1%), prácticamente el doble en ambos casos. También se evidencia un riesgo significativamente más elevado para los hogares

encabezados por mujeres de exclusión del consumo (6,9% frente a 5,4%), de la educación (9,4% frente a 7,6%), de la salud (20,9% frente a 17,0%) y de la vivienda (28,3% frente a 24,1%). En lo referente a la exclusión política y del empleo, por otra parte, las diferencias son más reducidas entre hombres y mujeres.

Pero esta tendencia a la igualación entre hombres y mujeres parece intensificarse en el caso de ciertos grupos de edad y lugar de origen. En los hogares de origen extranjero<sup>(5)</sup>, al igual que para el conjunto de los hogares, ha aumentado el porcentaje de casos donde el sueldo principal es aportado por una mujer, pasando del 23,6% en 2007 al 32,6% en 2013. En relación con los procesos de exclusión, cabe destacar que aquí, a diferencia que para el conjunto de los hogares, entre 2007 y 2013 la situación no ha cambiado solo cuantitativamente sino también cualitativamente. Es decir que, mientras que en 2007 las diferencias en función del sexo eran extremadamente intensas (los hogares encabezados por mujeres tenían un riesgo más que doble de vivir procesos de exclusión), en 2013 las diferencias se habían invertido y eran 4,4 puntos menores para los hogares encabezados por una mujer. Por

**TABLA 3.6. Distribución de los hogares en el espacio de la integración a la exclusión, en función del sexo de la persona sustentadora principal, 2007, 2009 y 2013**

	2007		2009		2013	
	Varón	Mujer	Varón	Mujer	Varón	Mujer
Integración	49,7	40,4	45,9	36,6	39,8	31,2
Integración precaria	35,2	41,9	38,9	40,6	39,2	45,0
Exclusión moderada	9,5	12,1	9,4	13,8	12,3	14,8
Exclusión severa	5,6	5,5	5,9	9,0	8,8	9,0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de las EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

(5) Se consideran aquí solo las personas originarias de países no miembros de la Unión Europea o de países de reciente incorporación (es decir, todos aquellos que no corresponden con la Europa 12).

**TABLA 3.7. Porcentaje de hogares con algún miembro de origen extranjero en situación de integración y exclusión en función del sexo de la persona que más ingresos aporta al hogar, 2007 y 2013**

	2007		2013	
	Varón	Mujer	Varón	Mujer
Integración	82,9	61,2	51,8	56,2
Exclusión	17,1	38,8	48,2	43,8
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de las EINSFOESSA 2007 y 2013.

**TABLA 3.8. Porcentaje de hogares con sustentador/a principal joven en situación de integración y exclusión en función del sexo de la persona que más ingresos aporta al hogar, 2007 y 2013**

	2007		2009		2013	
	Varón	Mujer	Varón	Mujer	Varón	Mujer
Integración	92,2	84,2	74,4	81,9	67,9	71,5
Exclusión	7,8	15,8	25,6	18,1	32,1	28,5
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de las EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

otra parte, no podemos olvidar que esta reducción de las desigualdades de género se ha obtenido al precio de un empeoramiento general e intenso de la situación de los hogares con algún miembro de origen extranjero.

Si focalizamos la atención en los hogares en los que la persona que aporta más ingresos al hogar tiene menos de 30 años (que corresponden al 9,5% del total en 2007, al 5,4% en 2009 y al 6,6% en 2013), la fotografía que obtenemos es muy interesante: si en 2007 las diferencias entre hogares encabezados por hombres y por mujeres eran tan significativas que estos últimos tenían el doble de probabilidades de vivir procesos de exclusión, en 2013 la situación se invierte, y son los hogares encabezados por hombres los que viven mayores dificultades. Se trata de un cambio muy significativo y es importante resaltarlo, sin embargo aquí también cabe destacar que la reducción de las desigualdades de género se ha

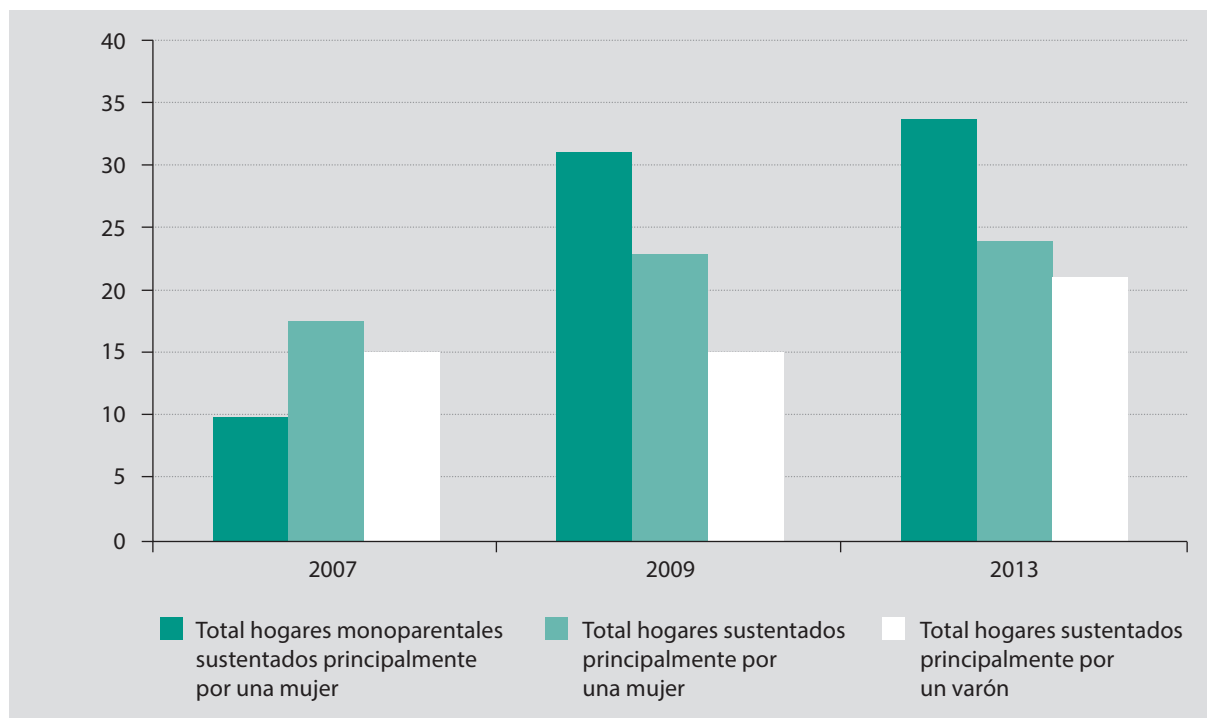
obtenido a precio de un empeoramiento de la situación general. Además, el hecho de que los hogares encabezados por mujeres estén mejor posicionados no indica que se haya logrado la igualdad de género, ya que incluso entre los hogares con sustentador/a principal joven, en la mayoría de los casos (63,1%) la persona que aporta más ingresos es un hombre.

### **Hogares con algún núcleo monoparental**

Es importante destacar que, si en el conjunto de los hogares españoles solo una pequeña minoría recibe su sustento principal de una mujer, en el caso de los hogares donde hay algún núcleo monoparental, la situación se invierte, mostrando que la monoparentalidad es todavía una cuestión mayoritariamente femenina. En segundo lugar, si limitamos el análisis a los hogares con algún núcleo monoparental en los que la sustentadora



**GRÁFICO 3.4. Porcentaje de hogares en situación de exclusión en función de la composición del hogar y del sexo de la persona que aporta más ingresos, 2007, 2009 y 2013**



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

principal es una mujer<sup>(6)</sup>, observamos que estos aumentan en los años considerados, pasando del 7,3% del total en 2007 al 10,2% en 2013.

Mientras que en 2007 la presencia de núcleos monoparentales en el hogar no representaba un factor de exclusión, la situación cambia radicalmente en 2009 y 2013: en este marco temporal, de hecho, el porcentaje de hogares con algún núcleo monoparental en situación de exclusión más que triplica, pasando del 9,6% en 2007 al 31,1% en 2009 y al 33,6% en 2013. Si bien es verdad que, en tales fechas, todos los tipos de hogar ven empeorar su situación, hay que destacar que en ningún

caso el empeoramiento es tan intenso como en el caso de los hogares aquí considerados.

### **Las diferencias dentro del hogar**

Un análisis de la exclusión social con perspectiva de género, por otra parte, no puede obviar el estudio de las desigualdades internas en el hogar, y en particular las diferencias relacionadas con la división sexual del trabajo y la asignación a las mujeres de las tareas de cuidado. En relación con esto, se puede observar que, en los tres años considerados, un porcentaje significativamente más elevado de mujeres declara que no podría trabajar a causa de responsabilidades familiares o razones personales (el 30,8% de las mujeres frente a al 7,4% de los hombres en 2007; el 17,8%

<sup>(6)</sup> En los encabezados por hombres (28,9% del total de hogares monoparentales en 2007 y 28,1% en 2009) no había muestra suficiente para incluirlos.

frente al 2,3% en 2009, y el 1,1% frente al 0,6 en 2013). Estos datos, sin embargo, no indican solamente que las mujeres son las que en mayor proporción se ven excluidas del mercado de trabajo por tareas de cuidado, sino que muestran que, en los últimos siete años, el porcentaje de mujeres que no estarían dispuestas a incorporarse al mercado de trabajo por las razones señaladas ha descendido vertiginosamente (1 de cada 3 en 2007 y 1 de cada 90 en 2013). Estas cifras reflejan un cambio muy significativo en los patrones de conducta como consecuencia de la crisis. Sin embargo, no está claro qué efecto tendrá esto a largo plazo en la evolución en los roles de género en el hogar. Sin descartar una cierta influencia en ciertos sectores, es probable que la aportación monetaria de las mujeres al hogar en muchos casos haya pasado de considerarse un «complemento estructural» a un «sustituto coyuntural» y que la situación sea reversible en el futuro.

En resumen, podemos afirmar que, a nivel general, aunque las diferencias por sexo se han reducido entre 2007 y 2013, el riesgo de vivir procesos de exclusión se sigue manteniendo más elevado en el caso de hogares encabezados por mujeres. Entre los hogares con algún miembro de origen extranjero o con sustentador/a principal joven, al contrario, la situación se ha invertido, y en la actualidad son los hogares encabezados por hombres los que tienen más riesgo de exclusión. Tanto la general reducción de las diferencias por sexo como la inversión registrada en dos casos específicos, sin embargo, se han obtenido a precio de un general empeoramiento de la situación de los hogares, se trata de una nivelación hacia abajo.

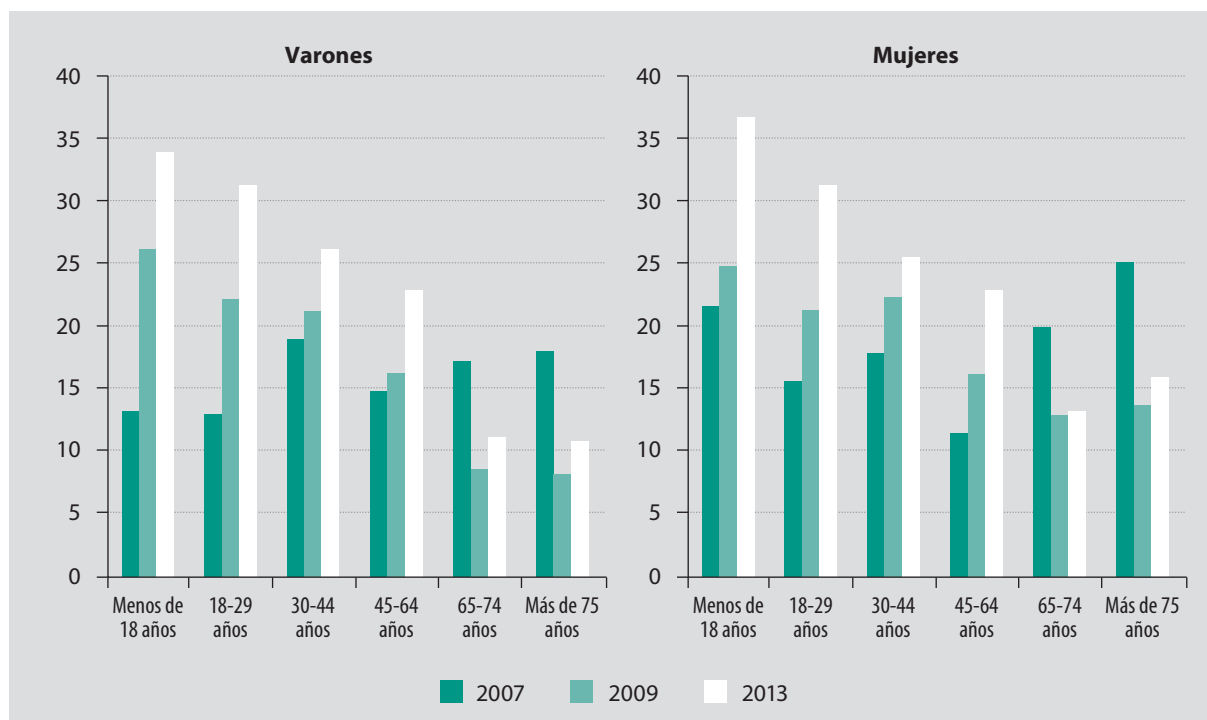
### 3.2.3.2. Y se multiplican las diferencias por la edad

Las diferencias son mucho más claras según la edad: la crisis ha afectado mucho más a los jóvenes. El 44% de las personas excluidas tiene

menos de 29 años. Esto puede verse también en una peor evolución de los hogares más jóvenes: aquellos encabezados por menores de 29 años se ven afectados en un 30,8% en situación de exclusión social, el triple que en 2007, y la evolución todavía ha sido peor en cuanto al aumento de las situaciones de exclusión más severas, que suponen un 13% de estos hogares más jóvenes. Pero también se ven muy afectados los que tienen entre 30 y 44 años (27,8% de incidencia de la exclusión y 13% de exclusión severa). Los hogares en los que hay niños o jóvenes, que responden en buena medida al mismo perfil están también especialmente afectados (32,3% y 30,5% respectivamente de incidencia de la exclusión). Como resultado de todo ello, 4 de cada 10 hogares excluidos están encabezados por personas menores de 44 años. Por el contrario, los hogares cuyo sustentador principal es una persona anciana o en los que hay algún anciano se han visto menos afectados por los procesos de exclusión (un 12,7%). Su presencia en el espacio social de la exclusión se ha reducido prácticamente a la mitad. La estabilidad de los ingresos y la progresiva jubilación de generaciones con buenas carreras de cotización (más largas y de salarios comparativamente más altos) y con dos pensiones en el hogar explican posiblemente este proceso.

Especial alarma debería causar la situación de los menores, con una tasa de exclusión del 35%, en más de la mitad de esos casos en situaciones de exclusión severa: el 18,2% del total. La exclusión social en la infancia se está convirtiendo en un problema de primer orden que condicionará el itinerario vital de estos menores en el futuro y que puede convertirse en un mecanismo perverso de reproducción ampliada de la exclusión social. La exclusión social en la infancia se traduce en términos de privaciones en alimentación, vestido, calefacción y probablemente, en el medio-largo plazo, en problemas de salud, deterioro del rendimiento educativo y por ello dificultades para la integración social.

**GRÁFICO 3.5. Incidencia de la exclusión social en la población española, según grupos de edad y sexo, 2007, 2009 y 2013**



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

Las diferencias por sexo parecen ser algo más significativas en algunos grupos de edad, con mayor incidencia de la exclusión social en 2013, tanto en las niñas como, sobre todo, en las ancianas, aunque el empeoramiento relativo ha sido superior en los varones menores de 30 años.

### 3.2.3.3. Multiplicación generalizada de la vulnerabilidad entre el colectivo juvenil(7)

Sin duda, la lectura intergeneracional del impacto de la crisis permite observar una mayor inci-

dencia en los hogares más jóvenes de los procesos de destrucción y precarización del empleo, así como del fuerte coste de acceso a la vivienda en la primera década del siglo.

Sin embargo, más allá de los procesos de exclusión originados en la esfera económica, la intensidad de la exclusión en la población joven también evidencia la desigual protección del Estado de bienestar en España en términos generacionales. El gasto social orientado en su mayoría a la protección de la jubilación y la enfermedad está permitiendo la amortiguación de los procesos de exclusión y pobreza asociados al envejecimiento. Por el contrario, las fuertes limitaciones de la protección de desempleo y el subdesarrollo de las políticas familiares en España explican la rápida extensión de los procesos de exclusión y pobreza entre la población más joven.

(7) Esta sección recoge los principales resultados del análisis realizado en Lasheras Ruiz y Pérez Eransus (2014). Documento de trabajo 3.2. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.

Uno de los aspectos más destacados que acentúa la vulnerabilidad del colectivo que nos ocupa es, como podrá comprobarse, el abandono del sistema educativo y el fracaso en la inserción laboral, principales elementos de desarrollo en el ámbito personal y colectivo.

La trayectoria de los últimos años muestra con claridad el descenso del porcentaje de jóvenes que declaran haberse encontrado trabajando la semana anterior a la realización del cuestionario (14 puntos porcentuales menos en el grupo de 16 a 24 años y 20 puntos menos en el de 25 a 34). En los mismos términos, es igualmente espectacular el incremento del número de jóvenes que buscan empleo (del 6,5% en 2007 al 33,3% en 2013).

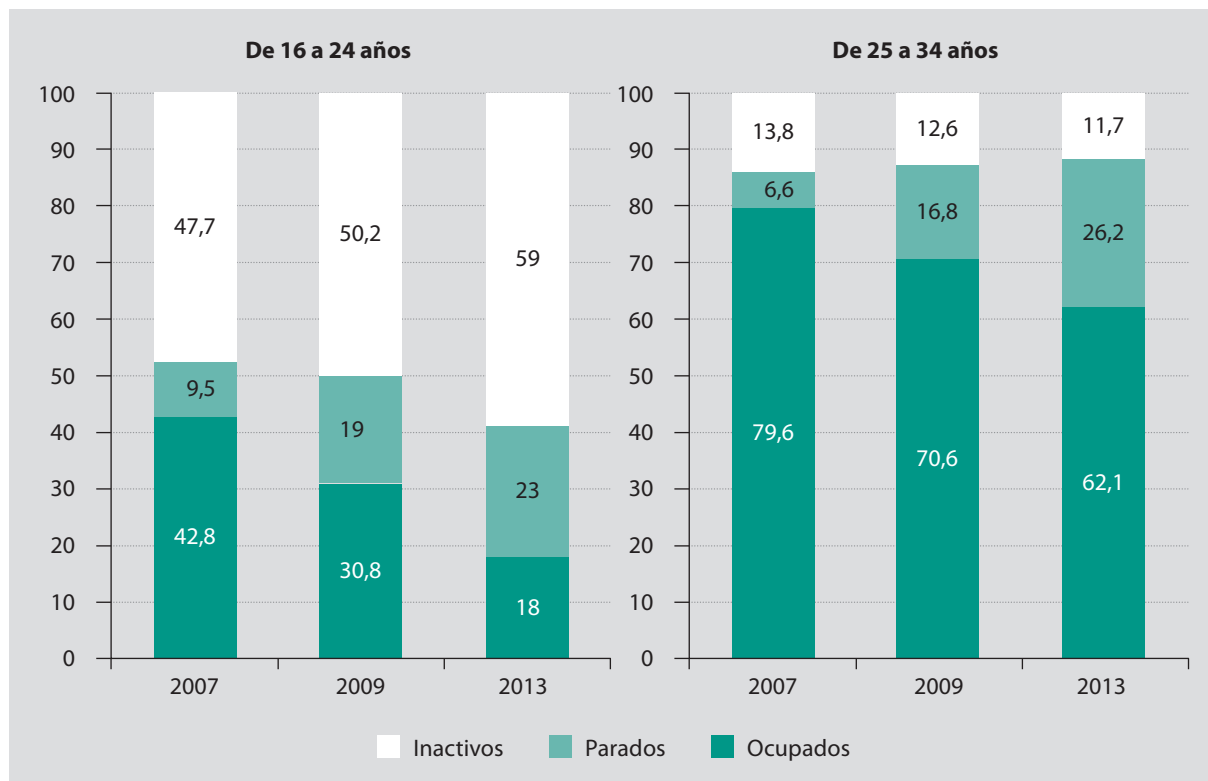
El gráfico ilustra nítidamente la concentración inicial de la destrucción del empleo en el colectivo

juvenil durante todo el periodo, pero más intensamente en la primera fase de la crisis. Esta fase inicial de destrucción de empleo se concentra en aquellos grupos más precarios, en los que la población extranjera y las personas más jóvenes se encontraban claramente sobrerrepresentadas.

Esta pérdida de empleo en los jóvenes ha tenido un impacto considerable en la intensificación de los procesos de precariedad y de exclusión social de sus familias.

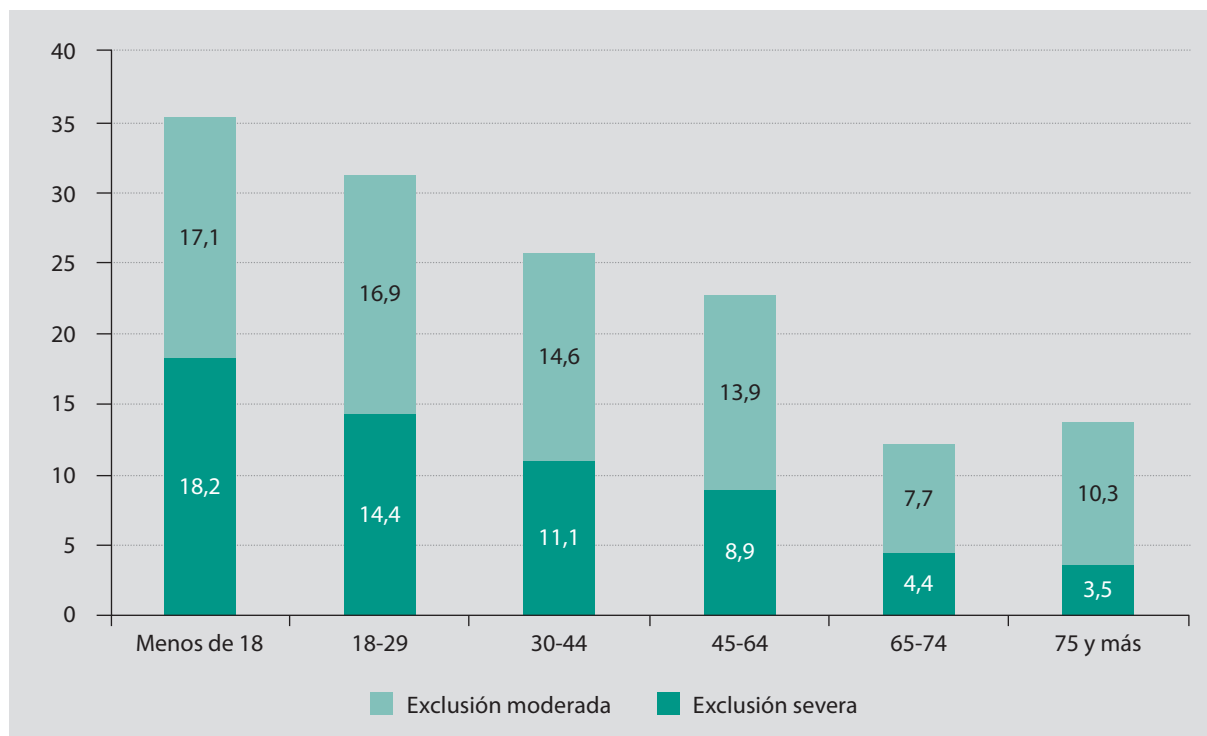
Igualmente grave resulta el 30% de probabilidad de exclusión para los jóvenes entre 18 y 29 años y el 25% para los que tienen entre 30 y 45 años. En estos hogares la falta ingresos está suponiendo un nítido empeoramiento de sus condiciones de vida o el bloqueo de procesos de autonomía ya iniciados o todavía por iniciar. En esta dirección,

**GRÁFICO 3.6. Actividad de los jóvenes en España, 2007, 2009 y 2013**



Fuente: EPA 2.º trimestre (INE) 2007, 2009 y 2013.

**GRÁFICO 3.7. Probabilidad de exclusión social de la población por franjas de edad, 2013**



Fuente: EINSFOESSA 2013.

atendiendo al carácter dinámico y procesual de los fenómenos que nos ocupan, la situación actual de estos hogares jóvenes con o sin menores puede condicionar su itinerario futuro de exclusión social.

La probabilidad de vivir situaciones de exclusión social es claramente menor para la población mayor de 65 años cuando la protección de las prestaciones de jubilación garantiza la desvinculación de los procesos de exclusión generados por el mercado laboral. La tenencia de la vivienda en propiedad con los principales gastos pagados como fórmula mayoritaria en este grupo de edad constituye también un importante amortiguador frente a los procesos de exclusión iniciados por la población con gastos importantes por vivienda (tanto para el alquiler como, sobre todo, para la hipoteca).

Este perfil tan fuertemente rejuvenecido de la exclusión social en España representa un cambio sustancial respecto a los procesos de desigualdad presentes antes de la actual crisis económica y, por tanto, evidencian su causalidad. Desde 2007 las personas menores de 30 años han triplicado su presencia en la exclusión social constituyendo ahora un 44% del total de personas excluidas. Un 66% tiene menos de 45 años.

La pérdida de empleo, mayoritariamente temporal antes de la crisis, se ha transformado en situaciones de desempleo continuado en la actualidad. Sin embargo, la elevada tasa de desempleo juvenil (55% para los menores de 25 años en 2013) no se traduce automáticamente en exclusión social para buena parte de la juventud debido al efecto amortiguador de sus familias. En ellas, los

miembros de más edad aportan ingresos de trabajo o pensiones al hogar y mantienen la integración e incluso invierten en la cualificación de los y las jóvenes en situación de desempleo. Por este motivo son el grupo de personas jóvenes recién emancipadas y aquellas que pertenecen a familias con escasa capacidad protectora las que presentan mayor riesgo de exclusión social.

### **Hogares de jóvenes recién emancipados**

El colectivo joven que ha podido emanciparse del hogar paterno y/o materno es relativamente reducido pero además presenta un elevado grado de vulnerabilidad.

La incidencia de exclusión social para los hogares de jóvenes emancipados (hogares cuya persona principal es menor de 30 años) es de un 30%. A pesar de que parte de la exclusión de estos ho-

gares se explica por la situación de desempleo (más del 50% lo está), es cierto que la creciente precarización del empleo tampoco supone una garantía para superar de la exclusión. Los datos son contundentes: un 35,5% de las personas jóvenes que se encuentran en situación de exclusión social trabaja y, sin embargo, eso no le permite salir de la exclusión. Además, en un 44% de los casos, los gastos excesivos de la vivienda les mantienen en una situación de pobreza severa.

Atendiendo a los datos suministrados en la tabla 3.9, el efecto de la protección social en estos hogares es muy escaso y tan solo consigue reducir la pobreza relativa en un 23,3% y un 16%. El carácter contributivo y la limitación temporal de las prestaciones de desempleo, así como la escasa cobertura de las rentas mínimas y otras prestaciones familiares, explican este exiguo impacto. Sin embargo, en los hogares en los que la persona principal es mayor de 45 años las prestaciones de desempleo

**TABLA 3.9. Tasa de pobreza relativa (-60% renta) antes y después de prestaciones según edad de la persona sustentadora principal del hogar, 2013**

	<b>Pobreza con prestaciones</b>	<b>Pobreza sin prestaciones</b>	<b>Porcentaje de reducción</b>
Menos de 30	27,5	35,9	23,3
30-44	25,8	30,8	16,2
45-64	23,3	36,9	36,8
Más de 65	16,4	71,5	77,06

Fuente: EINSFOESSA 2013.

**TABLA 3.10. Tasa de pobreza severa (-30% renta) antes y después de prestaciones según edad de la persona sustentadora principal del hogar, 2013**

	<b>Pobreza con prestaciones</b>	<b>Pobreza sin prestaciones</b>	<b>Porcentaje de reducción</b>
Menos de 30	10,4	17,5	40,5
30-44	7,6	13,7	44,5
45-64	6,4	19,8	67,6
Más de 65	1,5	60,5	97,5

Fuente: EINSFOESSA 2013.

y las pensiones consiguen reducir en más de un 36% la tasa de pobreza relativa. Esta reducción es de casi un 80% en la población mayor de 65 años.

Los datos presentados en la tabla 3.10 muestran que el efecto de las prestaciones en la reducción de la pobreza severa en las personas mayores es casi completo y muy elevado para los hogares con la persona principal entre 45 y 64 años. Sin embargo, es nítido que sigue siendo escaso el efecto de las prestaciones en la reducción de la pobreza para los hogares más jóvenes.

Como puede comprobarse, la ausencia de prestaciones dirigidas a los hogares en situación de mayor necesidad contribuye a mantener prácticamente intacta la fractura social causada por los procesos de exclusión originados en el mercado laboral y la burbuja inmobiliaria española. Es decir, permite la extensión de una nueva fractura social (y, por tanto, una nueva amenaza a la cohesión social) desde la perspectiva generacional.

### Jóvenes que viven en hogares excluidos

Además de los hogares recién emancipados, los jóvenes que viven en hogares excluidos representan otra cara dramática de la exclusión social caracterizada por las privaciones actuales pero también, como era adelantado, por la influencia en su desarro-

llo futuro. Se constata ya en este grupo de jóvenes una clara distancia respecto a otros jóvenes que viven en situaciones de integración en términos de rendimiento educativo e inserción laboral.

Casi un 26% de las personas jóvenes entre 16 y 24 años de familias excluidas no ha alcanzado el graduado escolar o la ESO y el 47,2% tiene solo esa cualificación. La diferencia de personas que alcanzan niveles de educación superior, formación profesional y universitaria entre ambos tipos de población joven muestra una clara fractura en el acceso a la educación. El paso de los años no corrige esta situación, sino que la acrecienta, ya que los sectores integrados continúan durante más años sus estudios.

Esta dualización social de los jóvenes también se observa en su inserción laboral, como puede verse en la tabla 3.12. El desempleo tiene una incidencia doble en los jóvenes de familias excluidas (45% en el grupo de 16 a 24, lo que supondría una tasa de desempleo del 74% aproximadamente). La proporción de desempleados aún es mayor en el siguiente grupo de edad (25 a 34) al incorporarse al mercado de trabajo todos los jóvenes excluidos que estaban estudiando y, aunque la tasa de desempleo desciende porque algunos logran acceder a un puesto de trabajo, las diferencias con los jóvenes de familias integradas se amplían todavía más.

**TABLA 3.11. Nivel de estudios de la población en los jóvenes en función de la situación de exclusión/integración de su hogar, 2013**

	De 16 a 24 años		De 25 a 34 años	
	Jóvenes en familias integradas	Jóvenes en familias excluidas	Jóvenes en familias integradas	Jóvenes en familias excluidas
Sin estudios obligatorios	13,0	<b>25,9</b>	5,4	<b>17,8</b>
Secundaria obligatoria	38,9	<b>47,2</b>	27,5	<b>45,8</b>
FP, bachiller	<b>40,8</b>	23,5	<b>42,1</b>	28,6
Universitarios	<b>7,3</b>	3,4	<b>25,1</b>	7,8

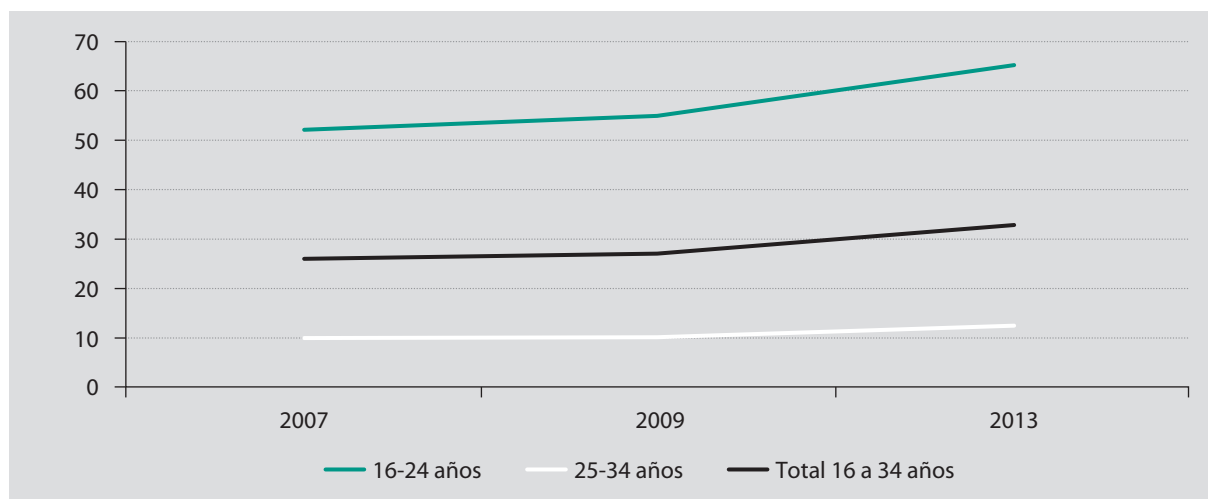
Fuente: EINSFOESSA 2013.

**TABLA 3.12. Situación laboral de la población entre 18 y 25 años en función de la situación de exclusión/integración de su hogar, 2013**

	De 16 a 24 años		De 25 a 34 años	
	Jóvenes en familias integradas	Jóvenes en familias excluidas	Jóvenes en familias integradas	Jóvenes en familias excluidas
Trabajando	<b>20,8</b>	15,9	<b>64,3</b>	33,1
Buscando empleo	22,7	<b>45,0</b>	23,5	<b>53,5</b>
Estudiante	<b>50,5</b>	31,6	<b>5,6</b>	2,6
Labores del hogar	2,2	2,5	4,4	6,6
Otras	3,8	5,0	2,1	4,1
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Tasa de desempleo	52,2	73,9	26,8	61,8

Fuente: EINSFOESSA 2013.

**GRÁFICO 3.8. Jóvenes que están estudiando**



Fuente: EPA, 2.º trimestre (INE) 2007, 2009 y 2013.

El menor porcentaje de jóvenes que sigue estudiando en las familias excluidas es doblemente preocupante si se considera la tendencia general del colectivo juvenil al mantenimiento en el espacio formativo.

La tendencia general a la permanencia en el sistema educativo no parece haber compensado las crecientes dificultades de inserción laboral a lo largo de este periodo, a pesar de que el au-

mento ha sido muy notable, de 13 puntos, especialmente en el grupo de 16 a 24 años. Este aumento es mucho menos significativo por encima de esa edad.

Tanto las dificultades de acceso al mercado laboral como el crecimiento de las exigencias formativas en este deberían provocar, en primer lugar, el mantenimiento en el espacio formativo o, en segundo término, el retorno al mismo. Esta úl-



tima realidad se produce, por ejemplo, tras una situación de desempleo sobrevenida. Por tanto, el ámbito formativo se convierte en una especie de «sala de espera» ante las dificultades de inserción laboral. La edad media declarada de abandono de estudios para el grupo de 16 a 24 que ya no continúa estudiando se sitúa en 17,2 años, 9 meses más de estudio que antes de la crisis.

**Un grupo especialmente vulnerable con repercusiones en el futuro: jóvenes desocupados fuera del sistema educativo**

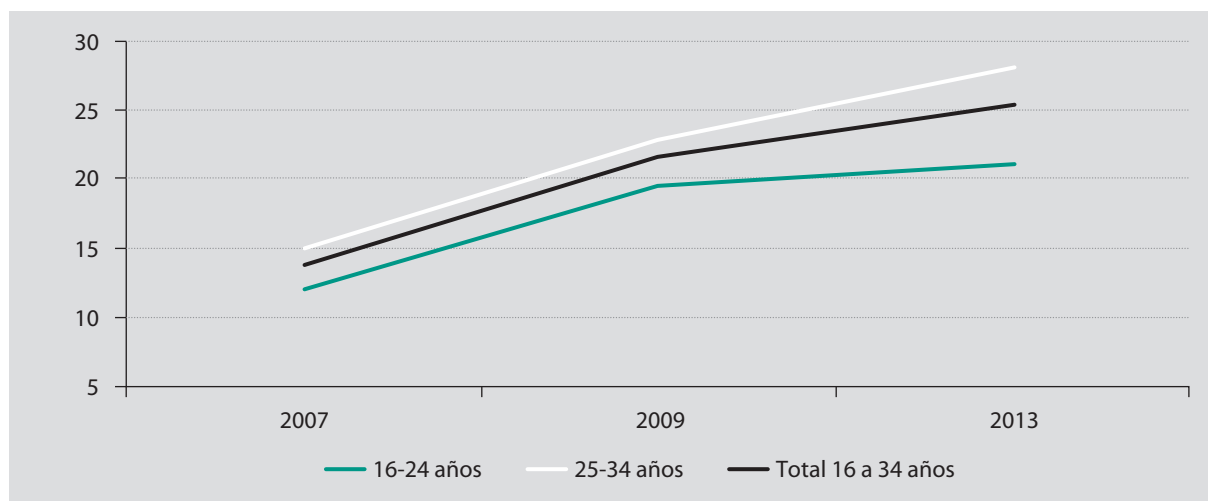
Entre el colectivo joven, el que concentra el mayor nivel de vulnerabilidad es precisamente el que conjuga ambas de las rupturas señaladas previamente: la desvinculación del espacio formativo y la exclusión del espacio laboral. Renunciando a la condición estigmatizadora de la noción «nini» (ni estudia ni trabaja), resulta especialmente alarmante el porcentaje de personas jóvenes que se encuentran en esta situación.

Como puede comprobarse en el siguiente gráfico, un 25,4% de los y las jóvenes entre 16 y

34 no se encontraban estudiando en el curso académico 2012-2013 y tampoco tenían un empleo, lo que supondría 2,6 millones de personas, de los que 857.000 tendrían entre 16 y 24 años. Nuevamente puede comprobarse el fuerte impacto en el periodo inicial de crisis y el crecimiento posterior más paulatino, pero continuado. La identificación de estas situaciones en los jóvenes es significativamente mayor que en la EPA.

La renuncia a la conceptualización «nini» nace precisamente de las evidencias que aporta la encuesta. Aunque en sí mismo el término no presupone ninguna (des)motivación específica para los jóvenes, algunos autores han advertido sobre su potencial estigmatizador y culpabilizador para con quienes no son sino las víctimas de la crisis de empleo. En primer término, entre ese grupo de personas jóvenes que no estudian y no trabajan, el 80,3% declaran que se encuentran desempleados, es decir, buscando activamente empleo. Además, el 98% de los que están desempleados manifiesta que podría incorporarse al empleo inmediatamente.

**GRÁFICO 3.9. Jóvenes que señalan no estar estudiando ni trabajando**



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

Se trata de personas medianamente formadas, aunque en el grupo más joven, de 16 a 24 años, hay una proporción mayor de personas que no han acabado los estudios obligatorios. Cabe pensar que en parte se corregirá, al menos parcialmente, con el paso del tiempo, pero no sabemos si estos jóvenes tendrán las mismas opciones de hacerlo en el futuro que las que tuvieron las cohortes anteriores.

La incidencia de la exclusión social (49,4%) y de la pobreza (49,1%) es muy notable en este grupo de jóvenes que no estudia ni trabaja y supera más de la mitad en los grupos más jóvenes.

Y la presencia de minorías étnicas es también significativa, aunque sigue siendo minoritaria (3

de cada 10). Más de uno de cada 10 jóvenes de 16 a 26 años que no estudia ni trabaja es gitano (una proporción que multiplica su peso demográfico).

Atendiendo a todos los indicadores, sin duda es el grupo más joven el que se encuentra en peores condiciones.

Por último, se comprueba el incremento de aquellas personas que declaran no haber trabajado nunca, que alcanza ya al 26,3%. Este hecho es central dado que el sistema de protección español es eminentemente contributivo y la carencia de una experiencia laboral no solo es un inconveniente para buscar un empleo sino que también limita las posibilidades de acceder a la protección social. Y es un aspecto muy a tener en cuenta en

**TABLA 3.13. Principales características de los jóvenes que no estudian y no trabajan, 2013**

		Total 16 a 34 años	16 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años
Sexo	Varón	47,7	46,0	49,4	48,1
	Mujer	52,3	54,0	50,6	51,9
Estudios	Sin estudios obligatorios	18,0	20,1	18,8	14,3
	Secundaria obligatoria	47,0	50,1	45,7	44,0
	FP, bachiller	28,7	27,7	28,2	30,6
	Universitarios	6,3	2,1	7,3	11,1
Ocupación	Desempleo	80,3	81,5	81,3	77,4
	Labores del hogar	11,2	7,4	11,8	15,6
	Otras	8,6	11,1	6,9	7,0
Pobreza	Tasa de riesgo de pobreza	49,1	56,5	45,6	43,8
	Pobreza severa	17,2	21,8	15,3	13,6
Nivel de integración social	Integrado	8,1	6,3	8,9	9,7
	Integración precaria	42,5	43,2	40,5	43,7
	Exclusión moderada	22,5	22,9	22,5	22,1
	Exclusión severa	26,9	27,6	28,1	24,5
Grupo étnico	Españoles y UE15	70,8	67,9	69,5	76,2
	Gitanos españoles	8,3	11,8	6,8	4,9
	Extranjeros	20,9	20,2	23,7	18,9
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: EINSFOESSA 2013

el diseño de las políticas activas orientadas a este grupo de población, a las que habrá que ofrecer la oportunidad de una experiencia laboral que el mercado de trabajo hasta ahora les ha negado.

#### **3.2.3.4. La educación, clave en la prevención de la exclusión social**

El acceso a un nivel educativo alto es una buena medida preventiva de la exclusión. Las diferencias más destacadas entre unos tipos de hogares y otros se dan justo sobre la base del nivel de estudios del sustentador principal (4 veces más proporción de excluidos en las personas analfabetas que en las universitarias). Todos los grupos que no consiguen un nivel educativo superior a la secundaria obligatoria tienen tasas de exclusión significativamente superiores a la media y suponen dos tercios del espacio social de la exclusión. Parece que el discurso que viene desacreditando el valor de la educación en nuestra sociedad y habla de sobreformación de las personas (como si les sobrase una parte de la educación recibida) no se corresponde con ninguna evidencia empírica desde la perspectiva de la exclusión social. Los hogares encabezados por una persona con estudios universitarios suponen tan solo el 7% del total de los afectados por la exclusión social. La incidencia en estos hogares se reduce a la mitad respecto del conjunto.

Si atendemos al conjunto de la población la conclusión es la misma, viendo más claramente todavía las diferencias incluso, como puede apreciarse en el gráfico de la página siguiente: las diferencias se multiplican por más de cuatro entre las personas más formadas y las menos formadas en cuanto a la incidencia de la exclusión social. Además de la referencia al conjunto de la población, pueden verse las diferencias por sexo. Hemos resaltado también el grupo de edad de 30-44, una edad en la que ya se ha completado la educación formal, habitualmente, en la que se forman y se desarrollan los hogares y todavía con muchos años de

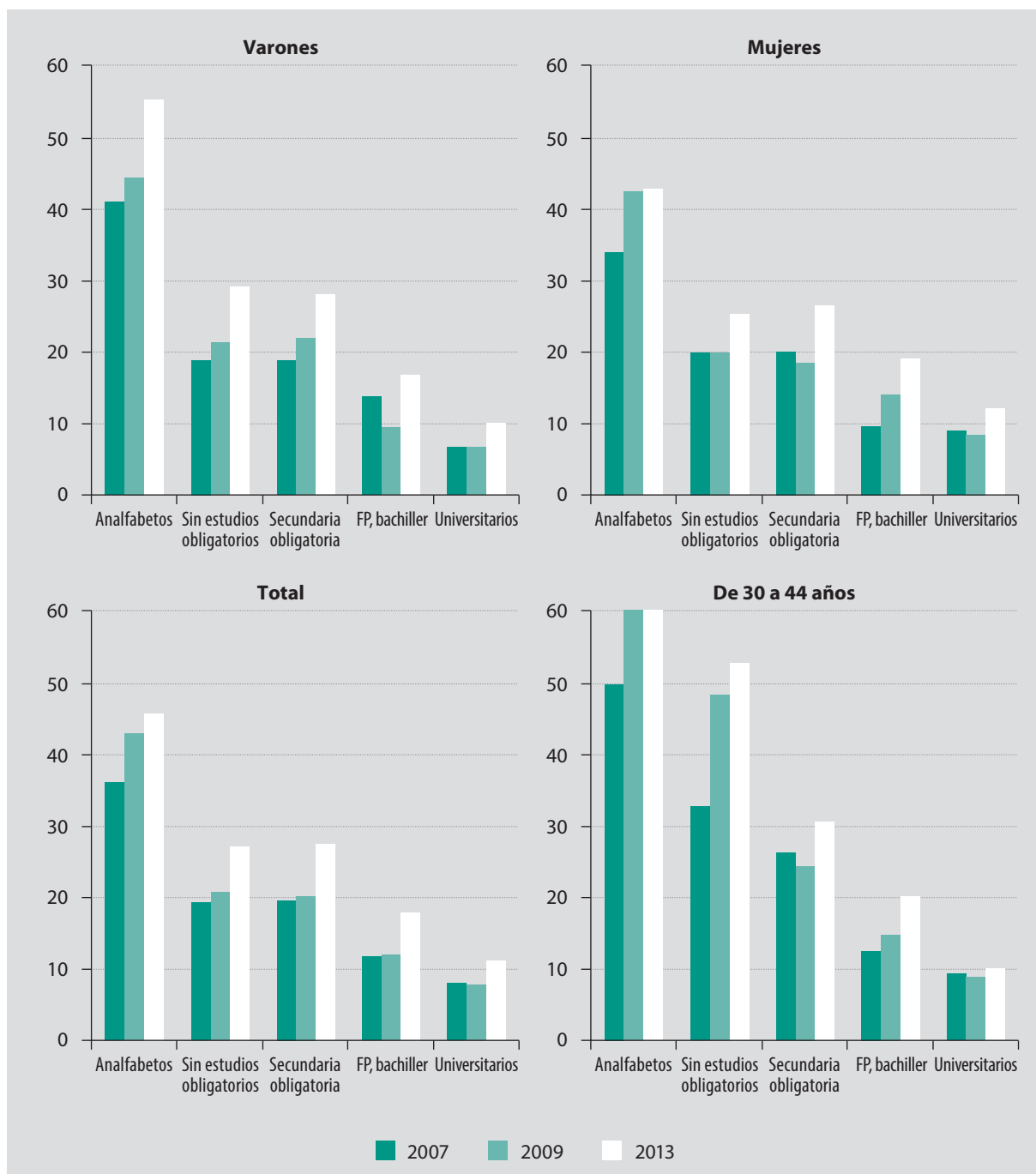
actividad potencial por delante. Una información más detallada puede observarse en el anexo.

La falta de un nivel educativo postobligatorio se convierte cada vez más en un hándicap para una participación plena en nuestra sociedad y esto se ha intensificado con la crisis. La idea de que el paro afecta a todos y que estudiar no garantiza a nadie un puesto de trabajo parece ser una verdad a medias (que a veces es la peor mentira). Más bien al contrario, los procesos de exclusión social se han extendido con la crisis preferentemente entre los que no alcanzaban ese nivel postobligatorio de formación reglada. Esa exigencia es significativamente mayor en el caso de los varones y se intensifica mucho más para las generaciones más jóvenes, en pleno potencial productivo (véase, por ejemplo el grupo de 30 a 44 años).

Si nos fijamos en las situaciones de exclusión más severa, las diferencias todavía se agrandan más: solo el 3,5% de las personas con estudios universitarios están en esa situación, 3 veces menos que en el conjunto de la población y casi 8 veces menos que las personas analfabetas.

Otra llamada de atención importante requiere el empeoramiento del contexto social y familiar en el que viven los estudiantes en nuestro país, una vez superada la edad de escolarización obligatoria (y también antes, como hemos visto por los resultados de la exclusión social en la infancia). Este empeoramiento ha ido en la línea de lo experimentado por el conjunto de la sociedad, pero ha sido mucho más intenso, pasando de una tasa de exclusión del 9,5% en 2007 al 22,5% en 2013. No parece que ese sea el contexto más adecuado para mejorar los indicadores educativos a nivel nacional, habitualmente mal posicionados, tanto respecto del abandono prematuro de los estudios como de los resultados de aprendizaje. Ambas cuestiones pueden empeorar todavía más si los estudiantes se ven cada vez más afectados por los problemas y las tensiones que implican los procesos de exclusión que hemos analizado.

**GRÁFICO 3.10. Incidencia de la exclusión social según el nivel de estudios de la población española en distintos grupos de sexo y edad, 2007, 2009 y 2013**



*Nota:* La tasa de exclusión de los analfabetos de 30 a 44 años supera ampliamente el 60% (ver anexo). Vista además la escasa dimensión de ese grupo, hemos preferido mantener la escala para facilitar la comparación visual.

*Fuente:* EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

### 3.2.3.5. La situación de las personas con discapacidad es más estable<sup>(8)</sup>

Se ha avanzado mucho en las últimas décadas, según Huete García (2013), en materia de sensibilización y concienciación de la sociedad sobre la realidad de la discapacidad. Sin embargo, los datos de la Encuesta Social Europea, que él maneja, muestran la persistencia de la situación de invisibilización de la población con discapacidad y la consiguiente experiencia de la discriminación. Asimismo, se han dado pasos en materia legislativa centrada en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social<sup>(9)</sup>. La realidad, por su parte, se muestra menos complaciente con las actuaciones adoptadas, ya que no se perciben avances significativos en cuanto a la reducción de la situación de exclusión de las personas y los hogares con algún miembro con discapacidad.

Según la encuesta EDAD (2008), el 8,5% de la población en España son personas con algún

tipo de discapacidad. Se trata de un porcentaje prácticamente idéntico al recogido en la encuesta FOESSA del año 2009 (8,2%), aunque algo superior al reflejado en la encuesta del año 2013 (7,3%). Es decir, se apunta una cierta estabilidad en la representación de las personas con discapacidad en el conjunto de la sociedad.

En cuanto a la edad media de las personas con discapacidad, en la encuesta EDAD (2008) se situaba en los 64,3 años. Los datos de las tres encuestas FOESSA (2007, 2009 y 2013) se refieren también a una elevada edad de esta población. Por ejemplo, en las encuestas de los años 2007 y 2009 se situaba en torno al 50% el porcentaje de personas con discapacidad mayores de 65 años, aunque en el año 2013 se observa una disminución hasta el 40%. En relación con el sexo de las personas con discapacidad, las encuestas FOESSA reflejan una proporción muy equilibrada entre hombres y mujeres, aunque otros estudios suelen referirse a la mayor presencia de mujeres en esta población (encuesta EDAD, 2008; Marbán, 2012).

**TABLA 3.14. Distribución porcentual de variables demográficas de las personas con discapacidad, 2007, 2009 y 2013**

	2007	2009	2013
Personas con discapacidad respecto al total de la población	6,4	8,2	7,3
Hombres con discapacidad	46,0	48,0	49,0
Mujeres con discapacidad	54,0	52,0	51,0
Personas con discapacidad mayores de 65 años	49,2	50,2	40,5

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

- <sup>(8)</sup> Esta sección recoge los principales resultados del análisis realizado en Anaut Bravo, Arza Porras y Álvarez (2014). Documento de trabajo 3.3. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.
- <sup>(9)</sup> Destacamos: Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Otros datos a tener en cuenta son el nivel de estudios y de ocupación. Según la encuesta FOESSA del año 2013, la mitad de las personas con discapacidad tenían un nivel de estudios inferior al graduado escolar/ESO, si bien el 20% alcanzaba un nivel postobligatorio. Son resultados que insisten en el recurrente menor nivel de estudios de estas personas y en el perfil de personas de más edad.

Las personas con discapacidad mantienen niveles muy bajos de empleo, el 12% en 2013, en tanto más de la mitad percibe algún tipo de pensión. La importante representación de personas mayores de 65 años entre quienes afirman tener una discapacidad explica, en gran medida, este porcentaje.

La distribución de los datos de ocupación en los cuatro ámbitos, que van desde la integración hasta la exclusión severa, informa que los mayores porcentajes de personas trabajando o con pensiones se encuentran entre las personas integradas, mientras que entre las personas en situación de exclusión severa la realidad es la contraria. No obstante, conviene destacar que el 5% de las personas con discapacidad que trabajaban en el año 2013 se encontraban en una situación de exclusión severa, porcentaje que ascendía hasta el 8% cuando se percibía algún tipo de pensión.

Finalmente, y respecto a los hogares en los que reside alguna persona con discapacidad, el porcentaje se ha incrementado en 3,4 puntos desde el año 2007, pasando del 14,1% hasta el 17,6% en 2013<sup>(10)</sup>. Se trata de hogares mononucleares en su práctica totalidad, en los que residen dos o más personas, aunque también se detecta un relevante porcentaje

de personas con discapacidad que viven solas (en torno al 16% en todas las encuestas FOESSA). Asimismo, se observa el mantenimiento de la tendencia hacia los hogares polinucleares, estrategia que habla del reagrupamiento de algunos núcleos familiares para compartir sus recursos: 1,8% en 2007, 7,1% en 2009 y 6,5% en 2013.

### **La incidencia de la pobreza**

En nuestro anterior trabajo sobre el primer impacto de la crisis sobre los hogares con algún miembro con discapacidad se constató el fuerte impacto de la misma sobre el empleo y sobre la incidencia de la pobreza, tanto en los hogares como en cada persona (Anaut-Bravo, Álvarez *et al.*, 2010: 233-236). El trabajo de Marbán Gallego (2012: 264) concluye, a partir de los datos de la EDAD-2008, que «la tasa de pobreza de las personas con discapacidad es casi el doble que la del resto de la población» como efecto de la «estructura demográfica» de este colectivo: envejecimiento y feminización. Por tanto, el ingreso «dominante en los hogares con personas con discapacidad procede de pensiones contributivas» (75%, frente al 39% de promedio en el resto de hogares).

En el mismo sentido que los dos estudios anteriores se expresa el último Informe de Cruz Roja sobre vulnerabilidad social. En él, se reitera el importante peso del ámbito económico en esta situación. Asimismo, destaca la progresiva visibilidad de un mapa cada vez más homogéneo en la identificación de los, anteriormente, diversos perfiles de vulnerabilidad en los que adquirirían relevancia los problemas de salud, la desestructuración familiar, las adicciones, el aislamiento social, entre otros (Malgesini, 2013: 3).

La última Encuesta FOESSA (2013) incorpora algunos matices a lo expuesto. Como se recoge

(10) Ambos porcentajes se sitúan por debajo del registrado en la encuesta EDAD (2008): 20%.

en la siguiente gráfica, la crisis económico-financiera ha seguido agravando de forma intensiva los niveles de pobreza de las personas sin discapacidad, en tanto se han estabilizado los de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, la situación de las personas con discapacidad con y sin certificado de discapacidad ha tendido a igualarse. Para entender estas dos tendencias se ha de recordar que, entre 2009 y 2013, se han mantenido, con recortes, algunas políticas de protección social como las ligadas a la estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad (2008-2012) o a la LAPAD (Ley 39/2006). Dos datos a tener presente son la representación de las personas en situación de dependencia reconocida entre quienes dicen tener discapacidad (40,6%) y el incremento de los certificados de discapacidad entre las personas con discapacidad de la muestra. En 2007 suponía el 60%, en 2009 el 50,5% y en 2013 el 71%. Por tanto, todo apunta a que ciertos mecanismos y prestaciones de protección como los reconocimientos de dependencia y/o discapacidad amortiguan, que no reducen, la intensi-

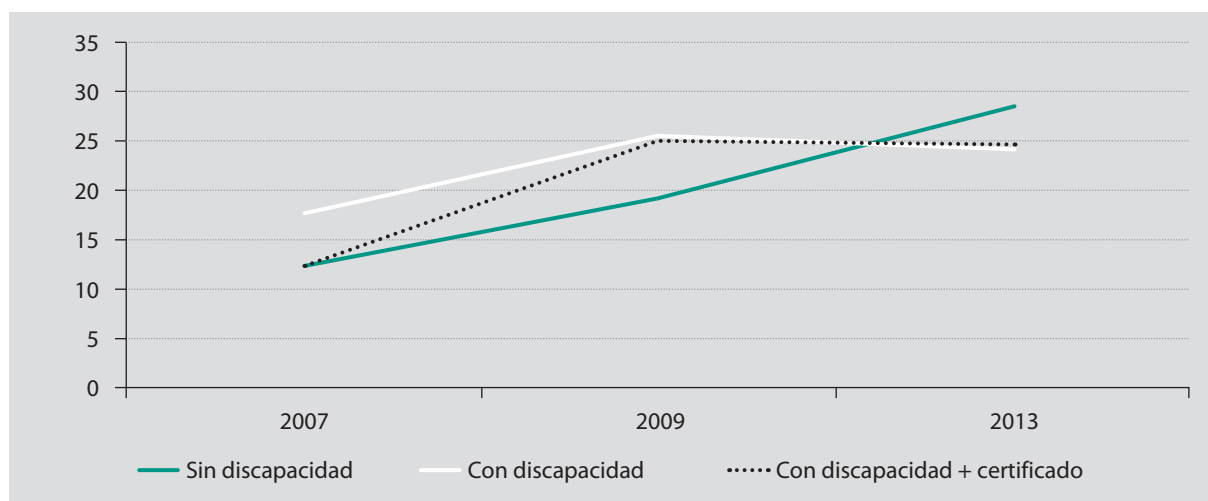
dad del creciente impacto de la situación de crisis actual.

En suma, las personas con discapacidad siguen manteniendo altos niveles de pobreza, sobre todo moderada, si bien no ha empeorado tanto su situación como la de quienes no tienen discapacidad.

### La incidencia de la exclusión social

En el periodo analizado de las tres encuestas FOESSA se ha producido un retroceso en la integración social de las personas con discapacidad. Entre 2007 y 2009, ese empeoramiento había supuesto un aumento de las situaciones de integración precaria y una reducción de las de exclusión social. Entre 2009 y 2013 el empeoramiento se produce hacia la exclusión (moderada y severa). Estas tendencias se ven modificadas en los casos en los que se cuenta con un certificado de discapacidad, ya que los cambios se centran en la precarización de la integración.

**GRÁFICO 3.11. Tasa de pobreza relativa de las personas sin discapacidad, con discapacidad y de estas con certificado de discapacidad, 2007, 2009 y 2013**



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

**TABLA 3.15. Distribución proporcional de personas con discapacidad y hogares con algún miembro con discapacidad en los espacios de la integración a la exclusión social, 2007, 2009 y 2013**

	2007		2009		2013	
	Personas	Hogares	Personas	Hogares	Personas	Hogares
Integrado	31,6	32,5	29,7	32,1	27,9	29,5
Integración precaria	35,3	38,2	43,1	43,1	43,1	42,5
Exclusión moderada	23,2	20,2	17,7	15,8	18,1	17,6
Exclusión severa	9,9	9,2	9,6	9,0	10,9	10,4
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

Si centramos el análisis en la evolución de los hogares, podemos observar que el empeoramiento no es tan acusado como en el caso de la población general. Así, entre el año 2007 y el 2013 incluso se ha producido una ligera reducción (1,4 puntos) en el porcentaje de familias de este tipo situadas en el ámbito de la exclusión (moderada y severa), mientras que en la población general se incrementó en 6,1 puntos durante el mismo periodo. No obstante, y aunque la distancia se ha reducido desde el año 2007, en el año 2013 la incidencia de la exclusión en este tipo de hogares sigue siendo superior en 6 puntos a la detectada en la población general.

Si analizamos la evolución en los cuatro ámbitos que van desde la integración a la exclusión severa, podemos observar que, desde el año 2007, se aprecia una reducción en los ámbitos de integración y exclusión moderada, mientras que se incrementa la integración precaria y la exclusión severa. Especialmente preocupante en 2013 es la intensificación de los problemas de exclusión: la exclusión severa se ha incrementado en 1,2 puntos, lo que supone algo más de uno de cada diez hogares con algún miembro con discapacidad. No obstante, también debe ser tomado en consideración el aumento de las situaciones de vulnerabilidad (integración precaria) en algo más de 4 puntos.

Por tanto, aun siendo más estable la situación de las personas con discapacidad y de los hogares en los que reside alguna persona con discapacidad, podemos observar que la tendencia es hacia la reducción de la integración, al mismo tiempo que se incrementan las situaciones de exclusión severa y de integración vulnerable. A ello se suma que la protección que podía dar el hogar para evitar situaciones de exclusión (entre 2007 y 2009), parece reducirse en 2013 al pasar del 24,8%, en 2009, hasta el 28% de los hogares en exclusión moderada y severa.

### 3.2.3.6. Retroceso en la integración de las personas inmigrantes(11)

En el periodo previo a la crisis, se fue construyendo un modelo migratorio con un fuerte componente laboral. Inmigración y mercado de trabajo han ido de la mano en el contexto español, que hacía sustentar también en el mercado de trabajo su principal pilar para la integración social. La llegada de la crisis y su desarrollo han evidenciado muchos de los problemas que se habían resuelto

(11) Esta sección recoge los principales resultados del análisis realizado en Zugasti Mutilva y Azcona Sáenz (2014). Documento de trabajo 3.4. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.



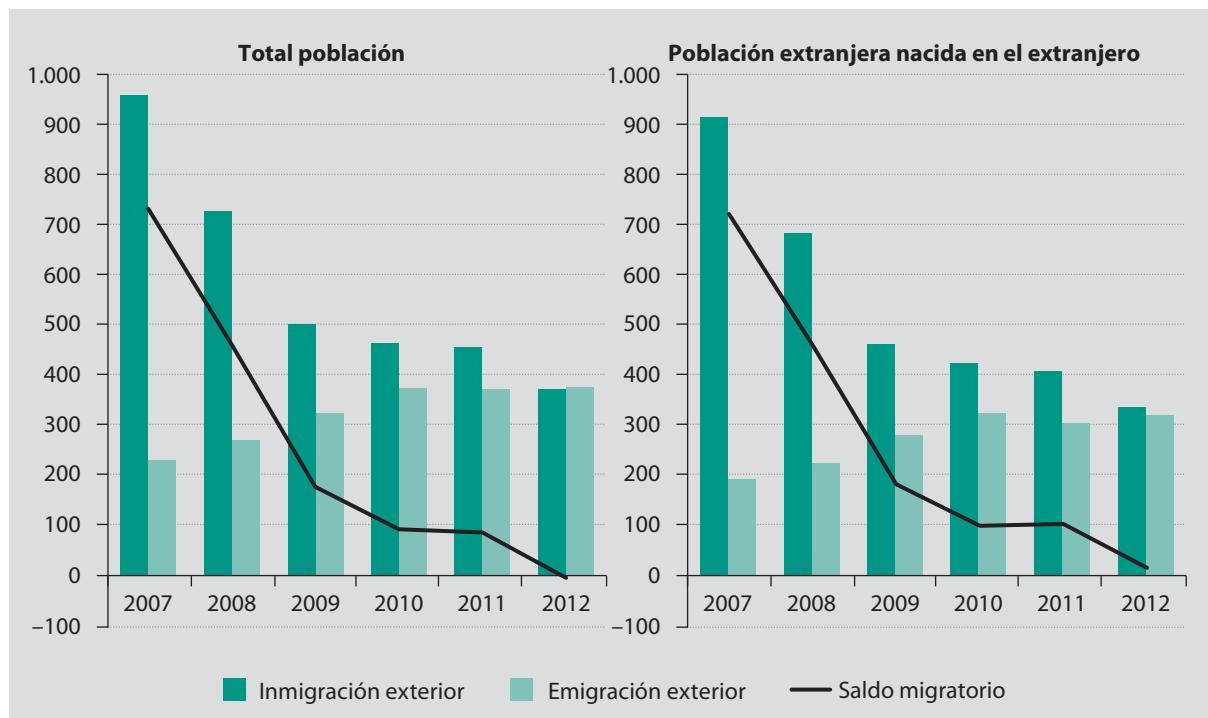
de manera deficiente, poniendo de relevancia las limitaciones del modelo. Los avances en términos de integración a los que hemos asistido son innegables pero también la fragilidad de la situación de un colectivo amplio de población extranjera. Las altas tasas de desempleo entre el colectivo extranjero (12,37 en el 4.º trimestre de 2007 según la EPA), que se encontraban ya en el periodo precrisis avanzan ahora a un ritmo vertiginoso (36,6% en el 4.º trimestre de 2013 según la EPA, más de 12 puntos superior a la de las personas de nacionalidad española).

El nuevo contexto ha producido también un cambio en relación con los flujos que se están recibiendo. Si, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2007, el volumen de las corrientes migratorias que tenían por destino el

Estado español (958.266) era elevado en comparación con las de salida (227.065), con un saldo exterior total innegablemente positivo (731.201), en el 2012, las altas residenciales exteriores son (370.515) inferiores a las bajas (377.049), concluyendo con el primer saldo exterior negativo (-6.534) del periodo 2007-2012.

Al dirigir la mirada exclusivamente al colectivo extranjero, los datos presentan una ligera diferencia, ya que si, para el año 2007, las inmigraciones exteriores de extranjeros procedentes y nacidos en el extranjero (915.583) casi quintuplicaban a las emigraciones (193.164), en el pasado año 2012, las bajas (320.657) casi equiparan a las altas residenciales (336.110), pero el saldo seguía manteniendo valores positivos todavía (15.453).

**GRÁFICO 3.12. Inmigración y emigración exterior para el total de la población y para la población extranjera nacida en el extranjero. Periodo 2007-2012 (miles)**



Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de variaciones residenciales exteriores (INE).

En relación al *stock* de población extracomunitaria, según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2013, 5.118.112 personas extranjeras siguen formando parte de la sociedad española. De las mismas, la mayoría detenta nacionalidad marroquí y procede de Latinoamérica (Ecuador y Colombia, fundamentalmente). A pesar de la disminución del flujo, el *stock* sigue reflejando las tendencias migratorias de las últimas décadas.

**Claves en la evolución de las dinámicas de la exclusión en la población extranjera**

Las crisis económica, laboral y social que se ha vivido en el contexto del Estado en los últimos años ha descargado con especial fuerza en la población extranjera. La distribución del impacto de la crisis no ha sido homogénea. Claro ejemplo de ello es el avance de las dinámicas de exclusión en el colectivo extranjero.

Se ha producido una fuerte ampliación del espacio social de la exclusión entre la población extranjera, tanto en las situaciones más severas como en las más moderadas. El 24,4% de las personas de nacionalidad extranjera se encuentran en situación de exclusión severa, 13,2 puntos más que en 2007. Asimismo, la proporción de población extranjera en situaciones de exclusión

moderada ha aumentado en 18,7 puntos. Se ha producido, pues, un aumento de las diferencias con la población española: si en 2007 había una diferencial de 5,4 en la proporción de población que se encontraba en situaciones de exclusión severa, en 2013, este diferencial se cifra en los 14,8 puntos.

En el contexto de un ensanchamiento generalizado del espacio social de la exclusión, la incidencia en el colectivo extranjero resulta muy preocupante. La crisis y sus consecuencias están poniendo en cuestión los avances en términos de integración conseguidos en los años anteriores.

Los datos muestran un empeoramiento de la situación de la población extranjera en las esferas económica y de la ciudadanía social. Entre 2007 y 2013 ha aumentado la proporción de hogares extranjeros que se encuentran en situaciones de exclusión de empleo, del consumo, de la educación, de la vivienda y de la salud.

La evolución es especialmente preocupante en la dimensión del empleo. En 2013, el 59,3% de los hogares con al menos un extranjero se había visto afectado por el desempleo, 30,7 puntos más que en el año 2007 y 27,6 puntos por encima de los hogares españoles. La crisis del empleo ha

**TABLA 3.16. Distribución de la población de nacionalidad española o UE15 y de la población extracomunitaria y de la ampliación en función de las tipologías de exclusión**

		Integrado	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa
2007	Española o UE15	53,5	30,6	10,1	5,8
	Extranjera	16,0	63,1	9,7	11,2
2009	Española o UE15	46,1	37,9	9,5	6,5
	Extranjera	1,2	56,2	26,3	16,4
2013	Española o UE15	36,9	40,7	12,8	9,6
	Extranjera	7,5	39,7	28,3	24,4

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

afectado en mayor medida a la población extranjera que se encontraba sobrerrepresentada en los puestos vulnerables a la destrucción de empleo, en puestos precarios. Además, un mayor riesgo de desempleo unido a otros condicionantes de vulnerabilidad han hecho que la población extranjera se haya visto obligada a rebajar su nivel de aceptación de las condiciones del empleo y su exposición también a los empleos más precarios.

La propia condición de extranjero lleva implícita una exclusión en términos políticos. Los ciudadanos de países con convenio y las personas de la UE27 pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales siempre y cuando figuren inscritos en el Censo Electoral de Extranjeros Residentes en España. Sin embargo, ningún extranjero tiene derecho a ser elegido ni a partici-

par en las elecciones en los niveles autonómico y estatal. En 2013, el 59,1% de los hogares con al menos un extranjero se encontraban excluidos de la vida política española, lo que, siendo un porcentaje abultado, no deja de suponer una mejora relativa notable respecto a momentos anteriores debido a la propia evolución del proceso migratorio y al asentamiento de la población extranjera.

Por otro lado, con el avance de la crisis registramos una reducción del conflicto social y del aislamiento social entre los hogares extranjeros. En 2013, el 8,2% de dichos hogares experimentan situaciones vinculadas con el conflicto social y el 4,8% se encuentran en situaciones de aislamiento social. Estas son cifras que se hallan por debajo a las registradas entre los hogares españoles (5,3% y 6,1%, respectivamente), lo que nos con-

**TABLA 3.17. Incidencia de las diferentes dimensiones de la exclusión en los hogares según la nacionalidad**

	2007		2009		2013	
	Todos españoles o UE15	Al menos un extranjero	Todos españoles o UE15	Al menos un extranjero	Todos españoles o UE15	Al menos un extranjero
Exclusión del empleo	14,2	28,6	20,3	51,2	31,7	59,3
Exclusión del consumo	2,2	3,6	2,0	4,6	5,2	12,8
Exclusión política	4,6	80,8	10,6	93,6	8,0	59,1
Exclusión educativa	11,2	5,6	11,1	11,5	8,3	7,1
Exclusión de la vivienda	18,4	34,9	17,4	37,4	23,2	48,5
Exclusión en la salud	10,7	18,9	9,9	14,6	17,1	30,6
Conflicto social	4,5	9,4	5,5	10,0	5,3	8,2
Aislamiento social	7,6	9,0	6,3	3,3	6,1	4,8

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

duce a un modelo migratorio que permitió una rápida reagrupación familiar y una (re)construcción de los lazos sociales a partir de las propias redes migratorias y familiares.

**La persistencia de la discriminación étnica y/o racial**

La notable disminución de los tránsitos migratorios que tenían por destino España no significa que la tarea al respecto de la gestión de las migraciones y los procesos de integración social haya finalizado. La población inmigrante que lleva asentándose en la sociedad española, con una intensidad especial, desde finales de la década de los noventa hasta aproximadamente el año 2009, requiere, para su plena inclusión, no solo de una mirada unidimensional centrada en la integración laboral sino de políticas de lucha contra la discriminación y fomento de la integración.

La necesidad de tales políticas viene avalada por el hecho de que, tras dos décadas de convivencia con personas de otros países y culturas, el 15,3% de la población nacional considera «más bien negativo que en el entorno en el que vive haya diversidad de etnias, razas o religiones», y, el 50,2%, no tiene una opinión formada al respecto («le es indiferente»). Esta actitud de rechazo hacia la diversidad étnica y cultural es significativamente menor en el caso de la población extracomunitaria ya que tan solo el 4,7% de este colectivo la sostiene. Lo mismo sucede al respec-

to de la actitud de indiferencia ya que tal desinterés es manifestado por el 26,7%.

La baja valoración de la diversidad étnica y cultural tiene su representación en los porcentajes de discriminación percibida, donde el 40,1% de quienes integran el colectivo extracomunitario confiesan haberse sentido discriminados frente al 9,1% del nacional.

La existencia de un escenario discriminador, sostenido a través de actitudes discursivas que esconden intereses sociales determinados, lleva implícita la reproducción de las desigualdades estructurales. La discriminación étnica y/o racial requiere, sin embargo, de la construcción previa de una serie de fronteras simbólicas que operan bajo una lógica simplista de separación de grupos en función de diferencias definidas como excluyentes. Así, la manifestación más extrema de la discriminación lleva a procesos de exclusión social y a la legitimación de las diferencias sociales. La complejidad de todos estos procesos de autopercepción y de legitimación hacen que la discriminación percibida no se corresponda necesariamente con la real.

La categorización como instrumento de subordinación no se sustenta únicamente sobre categorías étnicas sino que existe una diversidad categórica acorde con los grupos oprimidos históricamente. De esta suerte, se produce un tipo de discriminación interseccional que requiere indagar acerca del género, la edad, la discapacidad y la condición económica y de cómo estas variables se retroalimentan.

**TABLA 3.18. Opinión de la población española y extracomunitaria sobre la idoneidad de que en el entorno en el que vive haya diversidad de etnias, razas o religiones, 2013**

	Más bien positivo	Indiferente	Más bien negativo
Población española o UE15	34,5	50,2	15,3
Población extracomunitaria o EU12	68,6	26,7	4,7

Fuente: EINSFOESSA 2013.

Con todas estas consideraciones, sorprende advertir que el porcentaje de hombres extracomunitarios que se ha sentido discriminado (40,6%) es superior al de mujeres. Debido a que se parte de la premisa de la existencia de desigualdad de género a nivel estructural, una explicación al respecto sería que los hombres ocupan un mayor número de puestos laborales dentro de la esfera pública, que es donde se materializa el ejercicio discriminador, pero también porque el impacto de la crisis en el empleo ha sido mayor en los hombres. En lo referido a la edad, se encuentran unos resultados similares ya que la mayor parte de las personas que se han sentido discriminadas comprenden una edad de entre 30 y 44 años, edad laboral. Por su parte, se descubre que el 30% de la población extracomunitaria que tiene algún tipo de discapacidad se ha sentido discriminada frente al 11,4% de la nacional. La relevancia de la condición económica se aprecia en el hecho de que el 46% de la población extracomunitaria que vive situaciones de pobreza severa se ha sentido discriminada frente al 7,4% de la nacional. Estas diferencias hacen resaltar el peso de la variable étnica como fuente de explicación.

Todo ello hace pensar en el amplio camino que la sociedad española tiene que recorrer si de verdad quiere construir un modelo de convivencia intercultural y avanzar hacia un nuevo escenario integrador que precisamente no encuentre en la actual coyuntura económica la justificación necesaria para perpetuar las desigualdades existentes.

### **3.2.3.7. Se intensifican los procesos de exclusión social en la comunidad gitana(12)**

La comunidad gitana española es probablemente la segunda en Europa por tamaño, pero a día

de hoy todavía desconocemos incluso su dimensión aproximada (Laparra 2008, 2011). Las cifras manejadas por las instituciones oscilan entre las 725.000 y las 750.000 personas. Sin embargo, los datos de las Encuestas FOESSA (2008, 2010 y 2013) son más elevados y presentan una amplia variabilidad interanual (la población gitana se podría estimar a partir de esta fuente en un amplio intervalo que iría desde los 800.000 hasta cerca de 1,5 millones de personas, según las distintas ediciones de la encuesta). Tal variabilidad se relaciona con la heteroidentificación de la pertenencia a minoría étnica(13) y refleja la necesidad de nuevas estimaciones y la combinación de mecanismos de autoidentificación y heteroidentificación. Es necesario tener presente que la heteroidentificación puede intensificar la asociación entre población gitana y exclusión, debido a la posible influencia de los estereotipos sociales en las personas encuestadoras: estos se concretarían en dos procesos paralelos, donde por un lado hogares gitanos integrados serían más difícilmente identificados como tales por la persona que realiza la encuesta y, por otro, hogares no gitanos pero en situación de clara exclusión podrían ser confundidos con hogares gitanos. En periodos en los que se expande la exclusión social, habría más probabilidades de identificar como gitanos a hogares excluidos que no lo son. Esto sería coherente con el hecho de que la estimación más elevada se derivaría de la tercera encuesta y nos llevaría a considerar más seriamente la hipótesis de que la población gitana podría estimarse entre las 800.000 y el millón de personas.

Una vez aclaradas las dificultades que se encuentran a la hora de dimensionar la comunidad gitana española, focalizamos la mirada en

---

(12) Esta sección recoge los principales resultados del análisis realizado en Damonti y Arza Porras (2014). Documento de trabajo 3.5. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.

---

(13) La población gitana es identificada por la persona que realiza la encuesta, sobre la base de sus propios criterios. Está sometida pues a cierta variabilidad a partir de su propia subjetividad.

las situaciones de exclusión social(14). Dos aspectos resultan aquí especialmente relevantes: en primer lugar, tal como ya se ha aclarado en el apartado introductorio, la diferencia abismal existente entre la situación social de la población gitana y la del resto de la población, tanto antes como después de la crisis. De hecho, si en 2007 el 15% de la población no gitana se encontraba en situación de exclusión, este porcentaje ascendía al 75,5% entre la población gitana. En 2013 las diferencias en el porcentaje de personas afectadas por la exclusión siguen siendo enormes (23,5% de incidencia de la exclusión en la población no gitana y 72,3% en la población gitana, y un ISES del 5,2 frente a 1,2), aunque la diferencia se ha reducido por el incremento en las personas no gitanas en situación de exclusión.

Desde el punto de vista de las desigualdades de género, la evolución parece muy positiva (aunque la incidencia de la exclusión sigue siendo enorme en comparación con el resto de la población). En 2007, los hogares cuya sustentadora principal era una mujer presentaban un ISES mu-

cho más elevado que los hogares cuyo ingreso principal era aportado por un varón (8,2 frente a 5,2). En 2013, sin embargo, estas diferencias desaparecen y los hogares liderados por una mujer presentan un ISES que es incluso ligeramente más reducido (o, mejor dicho, algo menos elevado) que el de los hogares encabezados por un hombre (5,0 frente a 5,3). La fuerte intensidad de esta disminución (cercana al 39% en 6 años), unida al carácter reducido de la muestra de 2007 y a la variabilidad inducida por el proceso de heteroidentificación, sin embargo, nos obligan a tomar estos datos con extrema cautela. Los datos de los que disponemos, en suma, no nos permiten sacar conclusiones definitivas acerca de la evolución de las desigualdades de género en la exclusión de mujeres y hombres de etnia gitana. Por otra parte, sí sugieren la necesidad de nuevas investigaciones que aborden este tema.

En segundo lugar, una vez aclarada la intensidad con la que comparativamente la comunidad gitana se ve afectada por procesos de exclusión (ya antes de la crisis económica), observamos los

**TABLA 3.19. Porcentaje de personas en situación de integración, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa en función de la pertenencia étnica, 2007 y 2013**

	2007		2013	
	Población gitana	Resto	Población gitana	Resto
Integración	5,3	51,3	5,8	35,2
Integración precaria	18,8	33,7	21,9	41,2
Exclusión moderada	49,3	9,2	17,9	14,1
Exclusión severa	26,6	5,8	54,4	9,5
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de las EINSFOESSA 2007 y 2013.

(14) Los datos que se muestran aquí identifican la distribución por individuos, en lugar de por hogares. Se trata de una decisión de carácter metodológico, relacionada con el mayor tamaño de los hogares gitanos, que lleva a distorsiones en los datos si se consideran los resultados por hogar.

efectos de la crisis en la evolución de la propia situación de las y los gitanos. El espacio de la integración presenta un ligero aumento de más de 3 puntos, hasta el 27,7% (casi despreciable dada la variabilidad que nos introduce el proceso de heteroidentificación), pero el movimiento más significativo es la caída de casi un tercio de la población gitana desde situaciones de exclusión moderada hacia situaciones de exclusión severa. Si en 2007, de hecho, «solamente» una persona de etnia gitana de cada cuatro se encontraba en exclusión severa, siete años después esta proporción crecía a más de una de cada dos. La crisis económica, entonces, ha significado un claro empeoramiento de las situaciones de las personas de etnia gitana, situaciones que, ya antes de la crisis, destacaban por su gravedad.

Una encuesta realizada por la Fundación Secretariado Gitano indica que no hay grandes diferencias entre la población gitana y el conjunto de la población española en lo que a tasa de empleo se refiere (Sánchez y Fernández, 2011). Por otro lado, sin embargo, el mismo estudio señala que un porcentaje muy elevado de personas gitanas trabajan en empleos no cualificados y se encuentran afectadas por el subempleo y el em-

pleo precario. Este hecho conlleva que la tasa de exclusión del empleo sea muy elevada (69,7% de los hogares en 2007 y 78,6% en 2013) y claramente superior a la del conjunto de la población (casi cinco veces más elevada en 2007 y el doble en 2013). También cabe destacar que, mientras que la exclusión del empleo del conjunto de la población es en gran parte una consecuencia de la crisis, en el caso de los hogares gitanos no es un fenómeno coyuntural sino estructural. En suma, las dificultades que las personas de etnia gitana viven para acceder al mercado de trabajo son claramente mayores que las del resto de la población (Laparra *et al.*, 2012).

En relación con el acceso al consumo también se evidencia una situación de especial desventaja en los hogares gitanos, que experimentan exclusión del consumo en un porcentaje cuatro veces y medio más elevado que el resto de la población (27,2% frente a un 6,6%).

En lo referente a la educación, también se destaca una situación de especial desventaja para las personas de etnia gitana, que, en términos generales, presentan un nivel de educación formal muy bajo en comparación con la población mayoritaria

**TABLA 3.20. Población afectada por cada una de las dimensiones de la exclusión social para la población gitana y para el resto de la población en 2007 y 2013**

	2007		2013	
	Población gitana	Resto	Población gitana	Resto
Exclusión del empleo	69,7	15,7	78,6	40,2
Exclusión del consumo	s.d.	s.d.	27,2	6,6
Exclusión política	12,1	12,0	22,0	13,6
Exclusión de la educación	18,3	10,2	36,7	7,7
Exclusión de la vivienda	68,3	20,5	72,1	27,7
Exclusión de la salud	52,7	8,4	42,5	19,0
Conflicto social	16,3	4,7	18,5	5,8
Aislamiento social	9,2	4,3	3,1	2,6

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de EINSFOESSA 2007 y 2013.

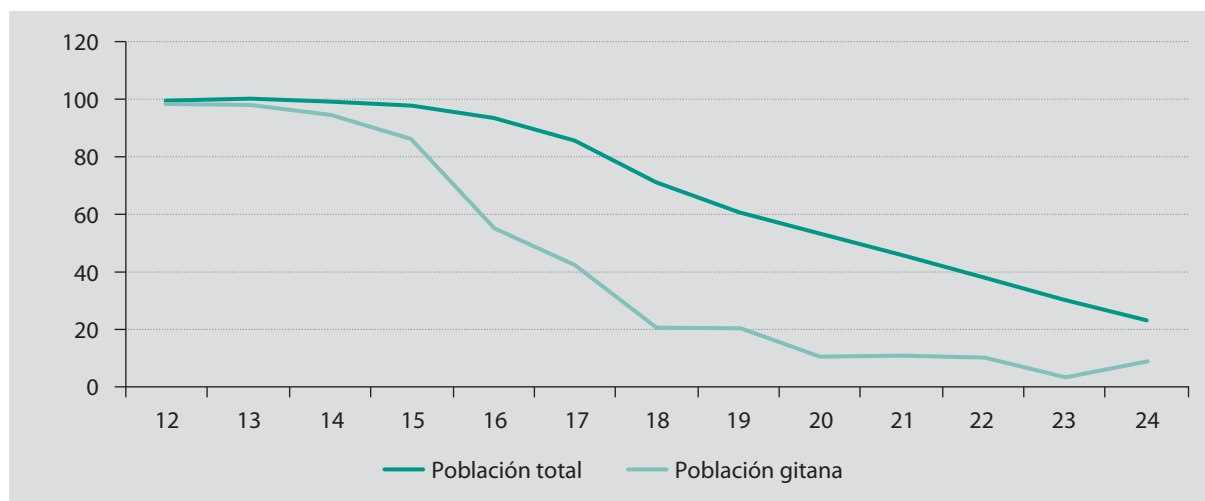
(Laparra *et al.*, 2012), así como un abandono prematuro del sistema escolar a partir de los 12 años, tal como se muestra en el gráfico que aparece a continuación. La gravedad de la situación la refleja asimismo la tasa de fracaso escolar, que en la población gitana es casi cinco veces mayor que para el conjunto de la población (64,4% frente a 13,3%) (Fundación Secretariado Gitano, 2013). En los últimos siete años, a partir de la información recogida en las Encuestas FOESSA, la situación habría empeorado significativamente: la exclusión educativa, de hecho, ha duplicado (del 18,2% al 36,7%), y esto justo mientras para el resto de la población ha disminuido 2,5 puntos.

En el ámbito de la vivienda, pese a la (relativa) superación del chabolismo, se han generado nuevos problemas, como la concentración de la población gitana en determinados barrios, el hacinamiento y el deterioro de las viviendas y el entorno (Fundación Secretariado Gitano, 2009). Las Encuestas FOESSA confirman plenamente este análisis y revelan que un altísimo porcentaje de hogares gitanos experimenta exclusión en este ámbito (el 68,3% en 2007 y el 72,1% en 2013).

A nivel de salud, se destaca que, pese a una significativa reducción de la exclusión en este ámbito en los últimos siete años (del 52,7% al 42,5%), los niveles siguen permaneciendo tres veces mayores que para el resto de la población. Todo esto tiene consecuencias muy graves e implica que la esperanza de vida de las personas de etnia gitana sea menor que la del conjunto de la población (Laparra *et al.*, 2012). En un estudio del Ministerio de Sanidad (La Parra, 2009) ya se afirmaba que la comunidad gitana se encuentra en una situación de desigualdad en salud que se manifiesta en un estado de salud más deficitario, en la mayor presencia de hábitos de riesgo para la salud y en el tipo de utilización de determinados recursos sanitarios (como, por ejemplo, un menor uso de las prestaciones ginecológicas de carácter preventivo por parte de las mujeres gitanas).

Finalmente, en relación con la dimensión social-relacional, se destacan niveles elevados de conflictividad social (tres veces mayor que para el resto de la población). La situación de convivencia de la comunidad gitana en España parece ser notablemente mejor que la que se da en otros

**GRÁFICO 3.13. Tasas netas de escolarización por edad para la población gitana y para el conjunto de la población**



Fuente: Fundación Secretariado Gitano, 2013: 86.



países europeos, tanto del Este como en otros casos más cercanos (Francia o Italia). Sin embargo, el mantenimiento de estas diferencias nos dice que sigue siendo necesario trabajar en este campo. Cabe pensar en la hipótesis de que va a ser difícil mejorar en este ámbito de las relaciones personales y grupales si no se avanza sensiblemente en otros aspectos más materiales de la integración social.

Resumiendo, podemos afirmar que la población gitana representa un colectivo fuertemente desfavorecido en comparación con el resto de la población. Esta afirmación se ve ulteriormente confirmada si consideramos que las personas de etnia gitana no solamente están enormemente sobrerrepresentadas en el espacio de la exclusión, sino que, en estrecha relación con eso, también enfrentan altos niveles de discriminación por parte de la etnia mayoritaria. Una persona de etnia gitana de cada dos, de hecho, declara haberse sentido discriminada alguna vez en la vida (mientras que en el resto de la población esto le sucede a una persona de cada ocho).

En conclusión, podemos afirmar que la población gitana representa un sector de nuestra sociedad que sufre intensos procesos de desigualdad en comparación con el resto de la población. Sin embargo, no debemos olvidar que la comunidad gitana es muy heterogénea y que sus diferencias internas (en cuanto a valores, nivel educativo, situación económica, etc.) no dejan de incrementarse en las últimas décadas. En particular, resulta especialmente relevante la distinción entre las personas de etnia gitana autóctonas y aquellas que han inmigrado del este europeo. No obstante, los resultados de este y otros estudios son rotundos al afirmar que los niveles de exclusión en la comunidad gitana son alarmantes y que su situación está empeorando muy rápidamente con la crisis económica y los recortes sociales.

### 3.2.4. Exclusión en todos los sitios, pero en unos más que en otros

La variable territorial era también muy significativa antes de la crisis y sigue siéndolo, con una incidencia de los procesos de exclusión social mayor en las zonas urbanas que en las rurales (diferencias de hasta 10 puntos porcentuales), tanto en las grandes ciudades como en municipios de tamaño intermedio situados en las áreas metropolitanas. El proceso de deterioro en estos años ha sido claramente mayor en las ciudades (municipios mayores de 100.000 habitantes), que presentaban tasas de exclusión ligeramente por debajo de la media y ahora se sitúan en el 27,8%.

Pero es sobre todo en ciertos barrios desfavorecidos donde, aún con una definición más laxa en esta última edición de la encuesta, la exclusión tiene una incidencia del 42,8% de la población. En estos barrios, una de cada cuatro personas está afectada por situaciones de exclusión severa.

Afortunadamente, todavía en dos de cada tres casos, las situaciones de exclusión se dan en barrios que presentan buenas condiciones, con mayor presencia de grupos integrados (el 79,3% fuera del espacio social de la exclusión), lo que sin duda facilitará en el futuro los procesos de reincorporación social en muchos casos, si se toman las medidas oportunas.

Por primera vez en la EINSFOESSA 2013 puede aportarse un análisis de las diferencias territoriales de la exclusión social en España en términos de comunidades autónomas. El aumento considerable de la muestra en esta última edición y el diseño de una muestra mínima para cada comunidad así lo permite. Debido a que este es por tanto un primer intento, hay que tomar los datos de tal avance como una primera aproximación y que habrá que ir profundizando en análisis más detallados posteriormente.

En este análisis, además, al ser el primero de esta serie de tres encuestas, no es posible una perspectiva temporal, en comparación con las anteriores. Tampoco se puede facilitar información significativa para las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja, donde la muestra realizada no es significativa, ni en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde no se realizó la encuesta.

A partir de estos datos, con todas las cautelas de un primer análisis, que debe tomarse como una primera aproximación, podemos poner de manifiesto algunas cosas:

- En todas las comunidades autónomas, los procesos de exclusión social son importantes y las

diferencias en este aspecto son, en general, salvo alguna excepción, menores que las que aparecen analizando la renta per cápita o la incidencia del riesgo de pobreza.

- De las comunidades analizadas, destaca la Comunidad Valenciana, con una tasa de exclusión del 32%, y los archipiélagos, con tasas claramente superiores a la media. En los tres casos, la exclusión severa es también significativamente más alta. La asociación de estas comunidades a modelos de desarrollo más basados en la precariedad y la estacionalidad (en el turismo o la construcción) es patente.
- En posiciones intermedias, en torno a la media del país, encontramos comunidades autó-

**TABLA 3.21. Incidencia de la exclusión social por comunidades autónomas\*: distribución en cuatro grupos, tasa de exclusión e Índice Sintético de Exclusión Social**

	Hogares					Individuos						
	Integración	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Tasa de exclusión	Índice Sintético de Exclusión Social	Integración	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Tasa de exclusión	Índice Sintético de Exclusión Social
Andalucía	33,9	44,0	11,4	10,6	22,1	1,41	30,9	43,9	12,1	13,1	25,2	1,58
Aragón	45,0	38,1	10,8	6,2	16,9	1,03	44,3	36,7	11,0	8,0	19,1	1,16
Asturias	40,5	42,3	9,5	7,7	17,3	1,08	39,5	44,5	9,1	6,9	16,0	1,05
Baleares	30,1	42,6	17,6	9,7	27,3	1,57	30,6	41,9	15,8	11,7	27,4	1,70
Canarias	29,1	44,8	16,2	9,9	26,1	1,57	26,3	45,1	17,6	10,9	28,6	1,65
Castilla y León	47,8	37,8	9,8	4,6	14,5	0,92	49,9	34,1	10,9	5,1	16,0	0,96
Cataluña	35,9	43,2	13,7	7,2	20,9	1,26	33,0	42,1	15,7	9,2	24,9	1,45
C. Valenciana	35,0	39,0	14,5	11,5	26,0	1,46	30,6	37,4	16,7	15,3	32,0	1,75
Extremadura	33,8	43,0	16,9	6,3	23,2	1,26	30,5	43,2	18,2	8,0	26,3	1,38
Galicia	49,0	34,0	11,6	5,3	16,9	0,91	48,0	34,0	13,1	4,8	18,0	0,93
Madrid	41,9	40,6	10,8	6,7	17,5	1,17	37,6	40,5	12,9	9,0	21,9	1,41
Navarra	46,3	35,8	11,4	6,5	17,9	0,99	46,4	36,4	9,7	7,5	17,2	1,04
País Vasco	38,3	44,3	11,6	5,8	17,4	1,07	38,1	45,3	11,4	5,2	16,6	1,06
España	36,9	41,2	13,1	8,8	21,9	1,32	34,3	40,6	14,2	10,9	25,1	1,50

\* No se puede facilitar información para las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja, donde la muestra realizada no es significativa.

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

nomas normalmente situadas en los primeros puestos en cuanto a generación de riqueza y tasas de empleo (como Cataluña o Madrid), con un modelo de desarrollo en el que posiblemente va implícito un mayor grado de dualidad social, junto a otras que responden a patrones de menor desarrollo económico (Andalucía o Extremadura), pero con modelos de integración de tipo más tradicional.

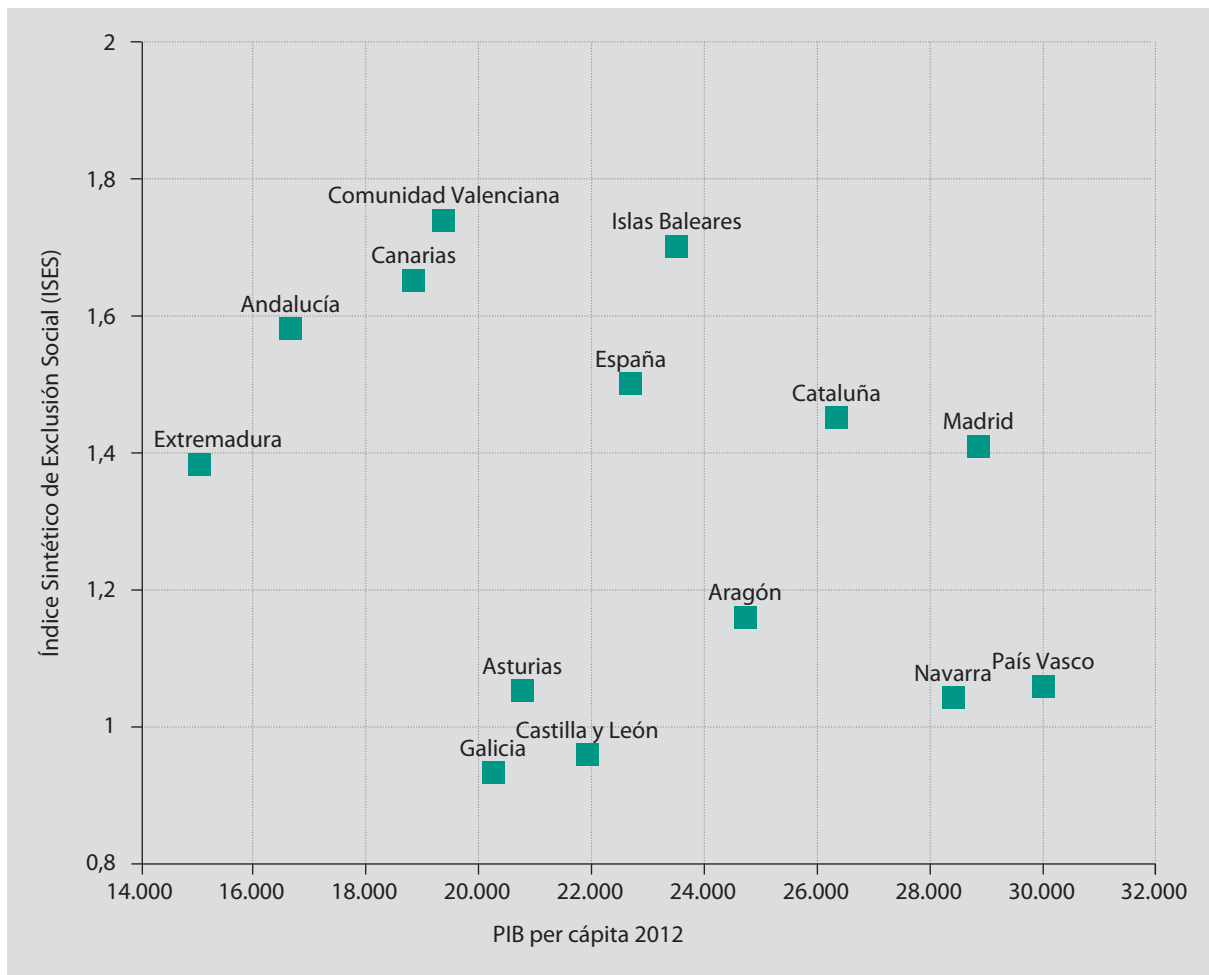
cuentran preferentemente en el norte de España y presentan también gran variedad en cuanto al nivel de riqueza.

En el gráfico siguiente puede verse claramente la escasa asociación que tiene, al menos en España, el nivel de desarrollo económico con el nivel de integración social que presenta cada territorio.

- Las comunidades autónomas que mantienen un mayor nivel de integración social se en-

A partir de esta constatación, se abre toda una agenda de investigación sobre los distintos

**GRÁFICO 3.14. Asociación entre el nivel de desarrollo económico (PIB per cápita en 2012) y el nivel de integración social (ISES 2013)**



Fuente: La estimación del PIB per cápita es la última publicada en el INE por CC. AA. y el Índice Sintético de Exclusión Social proviene de la EINSFOESSA13.

modelos de integración social y los diferentes factores que han podido configurarlos. A la vista de esta dispersión, cabe pensar en una combinación entre distintos factores estructurales (que tienen que ver con la estructura económica, con el modelo de desarrollo y con la estructura y dinámica demográfica, por ejemplo), con otros *elementos institucionales* (la densidad institucional, el capital social o,

más en concreto, el desarrollo de ciertas políticas), así como con la incidencia diferencial de *ciertos fenómenos*, como la inmigración, que están a su vez relacionados con todo lo anterior. Profundizar en todas estas explicaciones sobrepasa sin duda los objetivos de este informe, pero es algo que está presente en la agenda de investigación inmediata de la Fundación FOESSA.

### 3.3. El desempleo expande la exclusión social, pero la ocupación precaria también hace que aumente<sup>(15)</sup>

El empleo ha sido ampliamente considerado como un instrumento valioso de integración, ya que permite mejorar no solo la estabilidad económica, sino también la autonomía personal, la autoestima, la creación de relaciones sociales o el acceso al sistema de protección social. Si bien el desempleo siempre ha supuesto un riesgo alto de exclusión, debemos señalar también que la existencia de mecanismos de compensación como la protección social, las prestaciones o el apoyo familiar hacen que la relación entre desempleo y exclusión sea estrecha pero no directa (Pérez-Erasmus, 2010). Es por ello que diversos estudios han desarrollado la concepción de los efectos del desempleo o del empleo precario como «riesgo de exclusión» (Laparra, 2007) o «factor de vulnerabilidad ante la exclusión social» (Subirats *et al.*, 2004). Partiendo de esta perspectiva pretendemos, en primer lugar, mostrar una panorámica que ponga de relevancia la relación de la exclusión social con la exclusión del empleo y, en segundo lugar, entender la distribución del impacto de la crisis en los diferentes grupos sociales en términos de empleo.

Como era de esperar desde este planteamiento, el desempleo se asocia directamente a los procesos de exclusión en muchos hogares: el 75,6% de los hogares encabezados por una persona desempleada están afectados por la exclusión social y el índice de exclusión es cuatro veces mayor que cuando el sustentador principal está trabajando. Aún sin que tenga por qué ser el sustentador principal, la presencia de una persona desempleada en el hogar aumenta la proporción de hogares excluidos hasta llegar al 43,6%. Atendiendo al conjunto de la población, la mitad de los desempleados están excluidos y cuatro de cada 10 personas excluidas están paradas.

El impacto del desempleo en el espacio social de la exclusión no se entiende en términos de extensión relativa (no es que las personas desempleadas estén ahora más expuestas a la exclusión social: siguen siendo tres de cada cuatro de los hogares encabezados por una persona desempleada y aproximadamente la mitad del total de las personas desempleadas, prácticamente igual durante todo el periodo), sino en términos de intensidad (el 37% de los hogares encabezados por un desempleado están en situaciones de exclusión severa, 15 puntos más que en 2007) y, sobre todo, en términos absolutos, porque ahora

---

(15) Esta sección recoge los principales resultados del análisis realizado en Zugasti Mutilva (2014). Documento de trabajo 3.6. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.

hay muchos más hogares afectados por el desempleo. Como resultado de todo ello, tomando como referencia el espacio de la exclusión, el 38,6% de los hogares excluidos está encabezado por una persona desempleada, bastante más del doble que en 2007, y en 6 de cada 10 hogares excluidos hay alguien desempleado (el triple que en 2007). En las situaciones de exclusión severa la presencia de este tipo de hogares todavía es más relevante (el 46,8% de los hogares en exclusión severa están encabezados por una persona desempleada, tres veces más que en 2007).

Pero el acceso o el mantenimiento del empleo tampoco ha impedido una mayor incidencia de los procesos de exclusión social que, como hemos visto, se desarrollan en muy diversas dimensiones. El contexto de crisis laboral se ha traducido en una reducción del poder de negociación de los trabajadores, que están asistiendo a una precarización de las condiciones en las que desarrollan su actividad. Los hogares en los que la persona sustentadora principal está trabajando han experimentado un aumento de la exclusión de 4 puntos. En el conjunto de los trabajadores ocupados, la tasa de exclusión ha ascendido al 15,1%. Ahora, en la mitad de los hogares excluidos, y en 4 de cada 10 hogares en exclusión severa, hay alguna persona ocupada, algo que en sí mismo no parece suficiente para superar estas situaciones más problemáticas.

Es por ello que pretendemos, en tercer lugar, mostrar la pérdida de capacidad integradora del empleo y la tendencia precarizadora a las que está asistiendo el conjunto de la población ocupada en general y los colectivos más vulnerables en particular.

### 3.3.1. Una distribución desigual del impacto de la crisis en el empleo

No podemos dejar de constatar la notable reducción de personas ocupadas y el consiguiente aumento del desempleo que las estadísticas oficiales registran insistentemente y que también se ve reflejada en la declaración de las personas entrevistadas en las Encuestas FOESSA. Obviamente este es un factor de primer orden a la hora de ver cómo ha afectado eso a los procesos de exclusión social.

La tendencia es la misma si observamos los resultados de las Encuestas FOESSA que si atendemos a la Encuesta de Población Activa, aunque la primera tiende a clasificar menos personas ocupadas e inactivas y más como paradas, ya que se basa preferentemente en la autopercepción de la persona encuestada. Nótese que el nivel de actividad requerido por la EPA para identificar a una persona como ocupada es

**TABLA 3.22. Distribución de la población de 16 a 64 años según su situación en relación con el empleo**

	EINS Fundación FOESSA			EPA, INE (2.º trimestre)		
	2007	2009	2013	2007	2009	2013
Ocupados	61,8	52,7	48,5	66,8	60,8	55,1
Parados	6,6	18,2	25,2	5,8	13,4	19,8
Inactivos	22,4	20,8	17,8	27,4	25,8	25,1
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: EINSFOESSA y EPA, 2.º trimestre (INE).

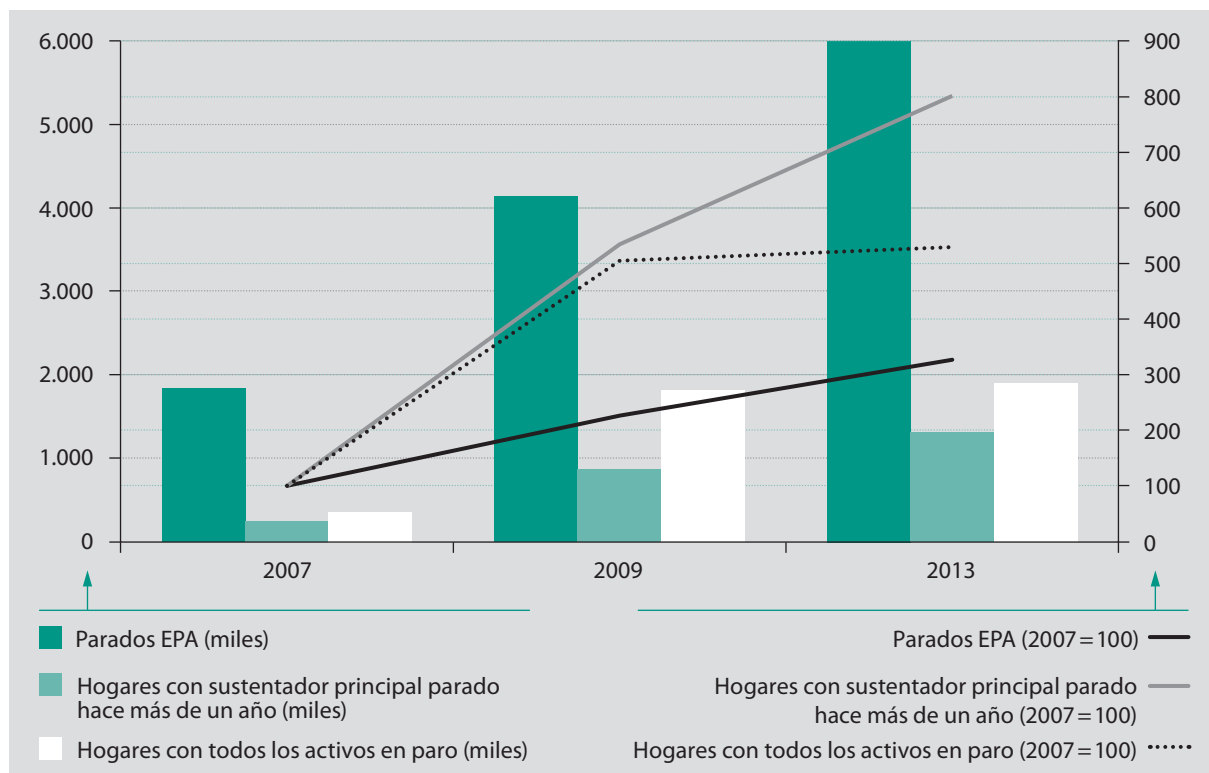
muy reducido (2 horas en la semana anterior) y también es más exigente en cuanto a la búsqueda activa y la disponibilidad inmediata para el empleo.

Pero más allá de esto, como vienen constatando diversos estudios, los efectos de la crisis económica y del empleo no han tenido una distribución equitativa entre los diferentes estratos y grupos sociales (Zugasti, 2013). Los puestos precarios, en los que la población extranjera y los jóvenes se encontraban claramente sobrerrepresentados, han sido los primeros en desaparecer. De manera paralela, el desempleo ha crecido vertiginosamente en estos grupos sociales. Contemplando la incidencia del desempleo en el conjunto del hogar es

cuando podemos identificar las situaciones de «exclusión del empleo».

Los datos muestran, en primer lugar, un crecimiento vertiginoso de la incidencia de la exclusión del empleo en los hogares. Esta exclusión, que tiene en cuenta la concentración de la precariedad, el desempleo y la falta de ingresos, afecta preferentemente a los hogares encabezados por mujeres a lo largo del periodo analizado. Es destacable, asimismo, que las mayores diferencias entre hombres y mujeres se establecen en el año 2013. Esto se debe no tanto a las diferencias en la concentración del desempleo en estos núcleos sino a la mayor incidencia de la precariedad en los hogares sustentados por mujeres.

GRÁFICO 3.15. Evolución del desempleo y de su incidencia en los hogares



Fuente: EPA y EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

Se ha producido todo un vuelco en relación con la edad del sustentador principal. Si bien con anterioridad a la crisis, la exclusión del empleo afectaba en mayor medida a los hogares encabezados por personas de entre 45 y 64 años, con el avance de la misma, registramos una relación entre la juventud de la persona principal y la incidencia de este fenómeno. En 2013, el 44,5% de los hogares encabezados por personas menores de 29 años se encontraban excluidos del empleo frente al 15,4% registrado en 2007. Como hemos comentado, la destrucción de empleo en España se ha centrado en puestos vulnerables y precarios en los que las personas jóvenes se encontraban sobrerrepresentadas. Es decir, actualmente esta población sufre tanto la epidemia del desempleo como la de la precariedad.

La exclusión del empleo ha afectado a todos los niveles educativos, pero más a los niveles intermedios, y se han reducido incluso las diferencias. Esto se debe en parte a la incidencia del desempleo en los jóvenes que presentan un mayor nivel educativo que los grupos de más edad (aunque también a la extensión del desempleo a amplios sectores sociales). El análisis multivaria-

ble pone de manifiesto que, descontando la influencia de la edad, cuanto menos estudios, más exclusión del empleo. Este resultado da cuenta pues de la extensión de trayectorias descendentes en términos de empleo, que antes de la crisis eran protagonizadas por personas con niveles educativos preferentemente bajos.

La variable étnica muestra una clara relación con la exclusión del empleo. Son los hogares encabezados por personas gitanas o inmigrantes quienes muestran una mayor incidencia de la exclusión del empleo. Destaca, asimismo, el brutal impacto de este fenómeno en los hogares monoparentales, con algún menor o con algún joven.

Más allá de la incidencia diferencial en cada grupo, el perfil mayoritario de los hogares excluidos del empleo es una cuestión relevante desde el punto de vista del diseño de estrategias y políticas de empleo. En el año 2013, el perfil se corresponde con el de hogares sustentados por varones, de 45 a 64 años, con un nivel educativo medio-bajo (secundaria obligatoria), de nacionalidad española y que además se encuentra trabajando.

**TABLA 3.23. Incidencia de la exclusión del empleo por 100 hogares de cada grupo y distribución del total de hogares afectados según características del hogar**

	2007		2009		2013	
	Incidencia	Distribución	Incidencia	Distribución	Incidencia	Distribución
Sexo del sustentador principal						
Varón	15,4	71,5	23,5	72,9	33,5	65,3
Mujer	17,1	28,5	24,2	27,1	35,8	34,7
Edad del sustentador principal						
Menos de 29 años	15,4	9,3	37,4	10,0	44,5	8,5
De 30 a 44 años	16,1	30,6	30,2	34,3	42,6	30,3
De 45 a 64 años	18,3	42,0	29,6	44,0	42,3	48,7
Más de 65 años	12,0	18,2	8,8	11,7	14,4	12,5
Ni lee ni escribe	45,5	1,8	26,1	2,9	33,8	2,4
Estudios del sustentador principal						
Sin enseñanza obligatoria	21,5	39,8	21,3	30,2	30,1	23,4
Secundaria obligatoria	13,6	20,0	30,0	36,6	41	38,5
Secundaria postobligatoria	14,1	22,6	24,7	23,6	33,7	25,5
Enseñanza superior	11,9	15,8	13,0	6,7	26,3	10,2
Ocupación del sustentador principal						
Trabajando	14,5	62,2	19,1	40,0	30,4	44,1
Desempleado	97,0	19,0	99,7	39,9	99	32,3
Pensionista	7,2	9,6	9,2	10,2	16	12
Otras situaciones	14,3	9,2	16,1	10,0	29,6	11,5
Composición del hogar						
Hogar monoparental	24,4	16,6	43,8	21,6	47,2	19,6
Hay algún anciano	14,1	27,6	11,5	18,3	16,3	16,5
Hay algún menor	18,6	34,8	33,0	38,3	49	41,2
Hay algún joven 18-24	23,2	28,4	43,5	32,4	55,8	33,8
Hay algún ocupado	14,5	64,4	21,4	54,3	33,1	60,6
Hay algún parado	93,2	38,5	97,1	79,7	91,2	80,1
Hay algún discapacitado	14,3	10,6	26,6	16,3	31,5	16,2
N.º de miembros en el hogar						
Persona sola	15,2	18,5	11,2	8,8	16,9	9,6
De 2 a 4 miembros	15,8	74,3	23,6	72,8	36,1	77,1
Cinco y más miembros	18,2	7,2	51,5	18,4	62,5	13,3
Tres grupos étnicos						
Todos españoles o de EU15	13,0	71,4	19,6	72,9	30,6	79,1
Algún extranjero (no EU15)	28,6	20,6	51,2	23,5	59,3	15,9
Gitanos españoles	68,7	8,0	63,3	3,6	72,9	5,1
Tamaño de municipio						
Más de 100.000 hab.	17,7	46,7	26,4	50,9	37,4	49,2
Entre 50.000 y 100.000	13,4	8,5	22,2	11,7	30,2	10,2
Entre 20.000 y 50.000	15,2	20,2	20,5	13,5	37,9	17
Entre 5.000 y 20.000	12,5	14,3	24,2	15,9	31,7	14,7
Menos de 5.000	18,4	10,3	18,2	8,0	25,3	8,9
<b>Total</b>	<b>15,8</b>	<b>100</b>	<b>23,7</b>	<b>100</b>	<b>34,3</b>	<b>100</b>

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.



### 3.3.2. La exclusión del empleo implica un mayor riesgo de exclusión en otros ámbitos

El desempleo ha provocado una extensión de los procesos de exclusión social hacia sectores que hasta ahora no se habían visto afectados y también una intensificación de las dificultades asociadas a la pérdida del empleo. Pretendemos mostrar ahora la incidencia de la exclusión del empleo en otras dimensiones de la exclusión, ver cuáles son las dimensiones más afectadas. La propuesta de análisis parte de la ya desarrollada concepción multidimensional de la exclusión social y entiende que el análisis de las interrelaciones es necesario para una mejor comprensión de las dinámicas y la articulación de los distintos procesos de exclusión.

En la tabla siguiente puede verse cómo la incidencia de los distintos procesos de exclusión social es notablemente mayor en los hogares afectados por los procesos de exclusión del empleo. No pre-

tendemos establecer aquí una relación de causa efecto, ya que todos estos procesos están fuertemente interrelacionados y los procesos causales son de ida y vuelta en la realidad. Pero sí podemos ver la clara asociación existente entre las distintas dimensiones de la exclusión que aquí reflejamos.

A la vista de los datos, cabe deducir que la exclusión del empleo tiene un impacto evidente en otras dimensiones de la exclusión. La incidencia es el doble en muchos ámbitos entre los hogares afectados por el desempleo de exclusión. Especialmente destaca el impacto en la exclusión del consumo, como cabía esperar, con una incidencia relativa casi cinco veces mayor en los hogares afectados por la exclusión del empleo y que incluso ha ido en aumento (al prolongarse también la duración de las situaciones de desempleo y precariedad laboral). La escasa incidencia de la exclusión del empleo en los procesos de aislamiento social se explica porque los grupos afectados por este tipo de problemas (preferentemente personas mayores) se encuentran ya fuera del mercado de trabajo y, por tanto, al margen de los procesos de exclusión del empleo, tal como los hemos definido aquí.

**TABLA 3.24. Incidencia de otros procesos de exclusión social en los hogares excluidos del empleo y en el resto de los hogares (porcentaje e incidencia relativa)**

	2007		2013		Incidencia relativa en los excluidos del empleo	
	Excluidos del empleo	Resto	Excluidos del empleo	Resto	2007	2013
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a/b)	(c/d)
Exclusión del consumo	6,4	1,5	12,2	2,6	4,27	4,69
Exclusión política	28,7	10,3	18	10	2,79	1,80
Exclusión de la educación	13,2	10,1	8,8	7,8	1,31	1,13
Exclusión de la vivienda	47,3	15,1	38,3	18,8	3,13	2,04
Exclusión de la salud	22,8	9,6	28,4	13,1	2,38	2,17
Conflicto social	8,4	4,4	9,6	3,4	1,91	2,82
Aislamiento social	7,1	7,9	3,9	7,1	0,90	0,55

Fuente: EINSFOESSA 2007 y 2013.

La expansión del desempleo y el deterioro general del mercado de trabajo han supuesto una extensión también de los problemas sociales en otros ámbitos, pero no por que se hayan reforzado las relaciones causales con las otras dimensiones, como puede verse en la tabla anterior. Incluso la incidencia relativa en los hogares excluidos del empleo respecto del resto disminuye en ciertos casos debido a la amplia «normalización» de las situaciones de desempleo. La disminución de las desigualdades en cuanto a las problemáticas de vivienda y de salud apunta también en el mismo sentido: la expansión del desempleo hacia amplios sectores de la población.

Destaca, sin embargo, el crecimiento de las situaciones de conflicto social entre los hogares excluidos del empleo (y el aumento de las diferencias con el resto de hogares), una tendencia especialmente delicada que puede disparar la intensificación de ciertas situaciones de exclusión en el futuro. Ahora, la incidencia de este tipo de problemáticas en las relaciones sociales es ya casi tres veces mayor entre los hogares excluidos del empleo.

### 3.3.3. Exclusión social y exclusión del empleo. Evidencias a partir del análisis de la precariedad y el desempleo

Dentro de los procesos de exclusión social en el complejo ámbito del empleo, en el mercado de trabajo, caben distinguir dos aspectos esenciales: en primer lugar, las situaciones en las que los hogares se ven excluidos de participar en la actividad productiva general; en segundo lugar, aquellas situaciones en las que esta participación

se produce en condiciones tales de precariedad laboral que no permiten construir procesos positivos de integración social. Es por ello que interesa tanto el estudio de la concentración del desempleo en los hogares como el de la precariedad. Veremos por ello cómo trabajan los sectores excluidos a partir de variables clave vinculadas a la calidad del empleo y siempre manteniendo la comparativa con la población integrada. Más allá de las situaciones individuales en el mercado de trabajo, interesa aquí ver el posicionamiento del conjunto del hogar, de todas las personas que lo componen.

#### 3.3.3.1. La concentración del desempleo en los hogares aumenta

Las situaciones de paro, especialmente si es la persona principal la que se encuentra en desempleo, impactan claramente en el escenario general del hogar. Se vinculan a una merma de los ingresos del mismo. Los periodos cortos de desempleo son más fácilmente compensables pero si la situación se prolonga puede dar lugar a dificultades acumuladas, como pueden ser la implementación de privaciones y ajustes de diverso tipo con una clara incidencia en la vida de los hogares. Es por ello que resulta alarmante el crecimiento del número de hogares con el sustentador principal en desempleo de larga duración. En 2013, el 7,5% de los hogares españoles se encontraban en esta situación. Es decir, la cifra ha aumentado 6,5 puntos en 6 años.

La situación respecto a los indicadores que dan cuenta de la combinación de situaciones de los miembros del hogar es igualmente alarmante. Los hogares con todos sus miembros no ocupados y que además no reciben prestaciones contributivas ha aumentado un 59%. En esta misma línea, es destacable que el 10,9% de los hogares españoles se encuentran con todos sus miembros en desempleo.

**TABLA 3.25. Hogares con dificultades vinculadas al desempleo y personas que viven en hogares con dificultades vinculadas al desempleo**

	Hogares			Personas		
	2007	2009	2013	2007	2009	2013
Hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un año o más	1,0	5,1	7,5	1,1	6,0	9,2
Hogares sin ocupados, ni pensionistas contributivos, ni de baja, ni con prestaciones contributivas por desempleo del INEM	4,9	—	7,8	4,7	—	7,6
Hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año	6,9	21,0	27,6	8,7	27,1	36,0
Hogares con todos los activos en paro	2,2	10,6	10,9	2,3	11,6	12,3

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

Por último, debemos señalar la importancia en términos numéricos de los hogares con al menos una persona desempleada que no ha recibido formación ocupacional en el último año, cuestión que reduce su empleabilidad. El 27,6% de los hogares españoles se encuentran en esta situación.

La concentración del impacto del desempleo en un sector de hogares más vulnerables ha tenido un efecto intensificador de las consecuencias sociales de esta crisis de empleo: mientras las tasas de desempleo individuales se multiplicaban por tres (algo ya en sí mismo bastante espectacular) el impacto en los hogares se multiplicaba por cinco o por ocho según los indicadores en los que nos fijemos.

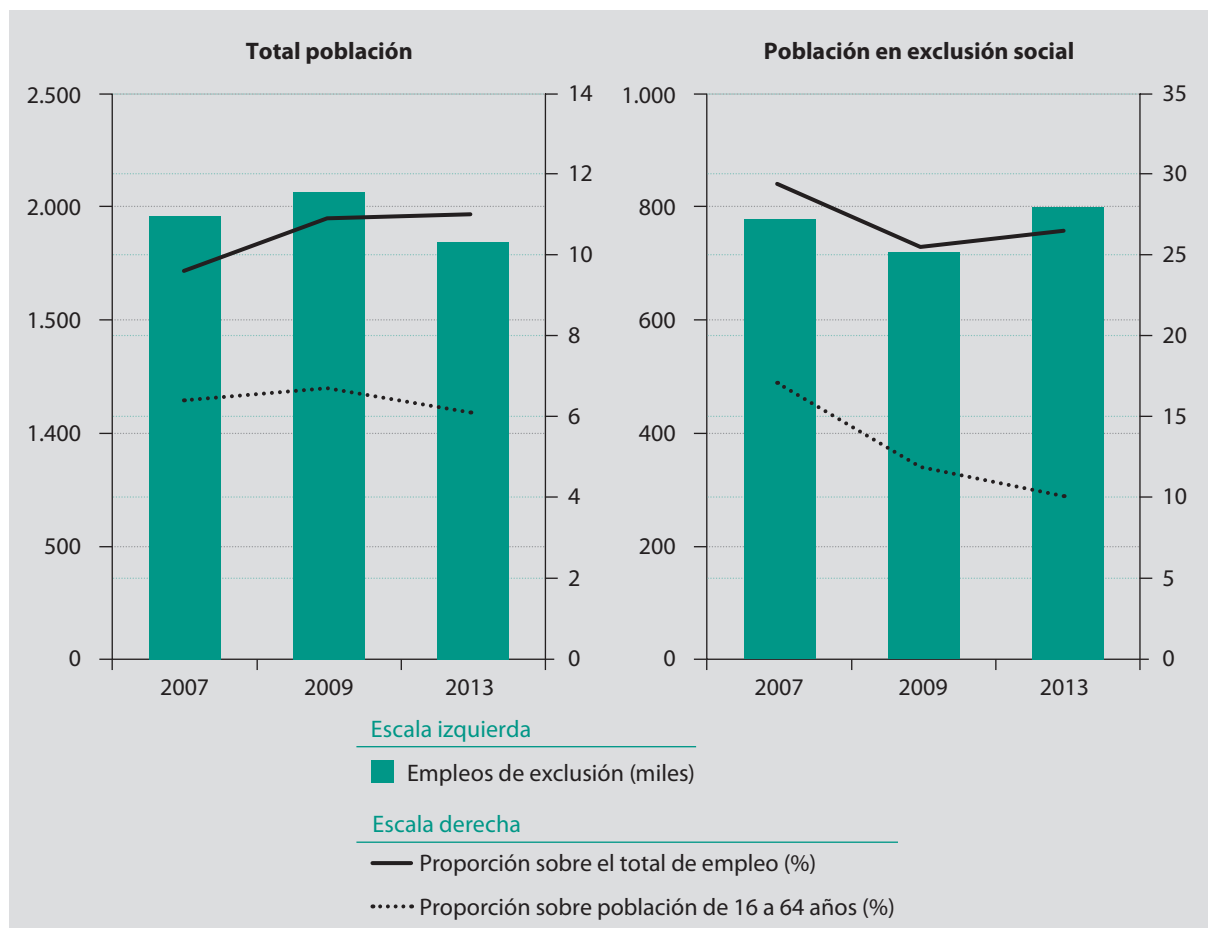
### 3.3.3.2. Empleos precarios pero socialmente útiles

La situación de aquellas personas que han conseguido mantenerse en el mercado laboral continúa empeorando. Así, los datos reflejan un aumento de la proporción de personas ocupadas en empleos de exclusión (del 9,6% en 2007 al 11% en 2013) y en irregularidad (del 3,1% en 2007 al 4,1% en 2013). Asimismo, disminuye la proporción de empleados en jornadas típicas, de 37 a 40 horas (del 64,9% en 2007 al 59,1% en 2013) y

en contratados estables (del 73,5% en 2007 al 72,7% en 2013).

Sin embargo, estas proporciones relativas no deben ocultarnos una característica diferencial de esta crisis respecto de otras experiencias anteriores: la destrucción de empleo formal no se ha visto moderada por una expansión de la economía sumergida que ofrezca una alternativa de ingresos, aún en condiciones muy precarias, a los hogares afectados por la crisis. Lo que aquí llamamos empleo de exclusión, bien por las características de las actividades realizadas, bien por la subprotección que implican, o bien por la falta de cotización a la Seguridad Social. Al contrario, estos empleos de exclusión se han visto también afectados por la crisis y se han reducido en unos 200.000 desde 2009 en el conjunto de la población. Específicamente en los sectores socialmente excluidos, que han experimentado un aumento muy notable, el total de empleos de exclusión justamente ha logrado mantenerse y eso hace que en este sector de población sea ahora notablemente más difícil encontrar incluso este tipo de actividades económicas: si en 2007 el 17,1% de las personas en situación de exclusión social lograba acceder a un empleo de exclusión, ahora lo hace tan solo el 10,1%. La competencia se hace más intensa incluso en los sectores más marginales del mercado de trabajo.

GRÁFICO 3.16. Evolución del empleo de exclusión en el conjunto de la población española y en los sectores afectados por la exclusión social



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

Todo ello tiene una clara incidencia en los resultados comparados sobre la situación laboral de las personas excluidas e integradas que aquí presentamos. La destrucción de empleo y el consecuente aumento del desempleo han supuesto una merma evidente del poder de negociación de la población que desea trabajar y especialmente de la población en situación de exclusión, que presenta dificultades acumuladas que aumentan su aceptación de peores condiciones de trabajo.

Obviamente, conforme nos acercamos a los sectores socialmente más excluidos, la importancia de los empleos de exclusión se hace más

patente. Si son tan solo una proporción casi residual del 3,2% entre los sectores más integrados, pasan a ser 4 de cada 10 empleos entre los más excluidos. Pero estos empleos, subprotegidos, socialmente estigmatizados o realizados en condiciones especialmente desfavorecidas, tienen también una presencia significativa, aunque minoritaria, en sectores amplios de la población (en la integración precaria y la exclusión moderada). Aquí, la presencia de otros factores compensadores, otros empleos, la protección social o el apoyo familiar hacen que no se traduzcan en situaciones graves de exclusión social.

**TABLA 3.26. Distribución por ocupaciones de los distintos grupos sociales de la integración a la exclusión**

	2007			2013		
	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa
Directores y gerentes	8,8	1,9	1,0	5,7	1,6	1,2
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	15,4	0,5	2,6	20,1	6,2	4,0
Técnicos; profesionales de apoyo	17,8	4,0	2,1	13,6	5,1	3,5
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	12,9	9,8	1,6	6,1	4,3	2,3
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	15,6	26,8	24,5	21,8	30,2	22,4
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	1,0	0,3	1,0	2,9	3,4	1,9
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción	13,6	16,4	24,0	11,4	9,3	12,8
Operadores de instalaciones de maquinaria y montadores	2,7	6,1	1,0	7,0	7,4	4,2
Ocupaciones elementales	12,0	34,0	42,2	10,2	31,9	47,7

Fuente: EINSFOESSA 2007 y 2013.

Pero incluso los sectores socialmente más excluidos no se emplean preferentemente en actividades marginales, en empleos de exclusión, sino en puestos elementales muy normalizados. En el año 2013, el 37,6% de los excluidos empleados trabajaban en este tipo de puestos elementales (prácticamente la mitad de los trabajadores en exclusión severa). Pero no es desdeñable el hecho de encontrar todo tipo de ocupaciones desarrolladas incluso por los sectores en las situaciones de exclusión más extrema.

Dentro del colectivo de personas en situación de exclusión severa, son mayoría quienes se insertan como empleadas domésticas (13,7%). Los datos reflejan también la importancia en términos numéricos del colectivo de excluidos que se insertan en empleos que se alejan de la imagen de marginación que se atribuye al trabajo de este grupo más desfavorecido. El 9,3% trabaja en servicios de restauración, el 4,4% en la construcción y el 2,6% como dependienta en tiendas o

almacenes. La lista que puede verse en la tabla siguiente supone más de dos tercios del total del empleo desarrollado por los sectores excluidos en España.

Solamente la enumeración de este tipo de actividades nos permite apreciar la relevancia estructural y la utilidad social que presentan las actividades económicas desarrolladas por los sectores socialmente más desfavorecidos.

El sector servicios recoge la mayor parte de los empleados, tanto excluidos como integrados. Es reseñable asimismo que, a lo largo del periodo analizado, observamos un aumento en la proporción de personas excluidas insertas en el sector agrícola, que tradicionalmente ha venido mostrando una mayor temporalidad, por la estacionalidad de las tareas, y una menor protección social. Durante la crisis, el empleo se ha mantenido más en este sector y posiblemente se ha convertido también en actividad refugio

**TABLA 3.27. Principales ocupaciones de las personas en situación de exclusión severa**

	<b>2013</b>
Empleados domésticos	13,7
Trabajadores asalariados de los servicios de restauración	9,3
Otro personal de limpieza	7,4
Peones agrícolas eventuales temporeros	6,3
Recogedores de materiales diversos (chatarra y otros)	5,6
Trabajadores en obras estructurales de construcción	4,4
Venta ambulante marginal	3,8
Dependientes en tiendas y almacenes	2,6
Acabado construcciones e instalaciones	2,4
Trabajadores de los servicios personales	2,3
Operadores de instalaciones y maquinaria fijas	2,1
Ayudantes de preparación de alimentos	2,0
Peones del transporte, descargadores y reponedores	2,0
Otros trabajadores de los cuidados a las personas	1,9
Agencias viajes/recepcionistas y telefonistas/empleados de ventanilla	1,8

Fuente: Encuestas FOESSA 2013.

**TABLA 3.28. Distribución de la población ocupada por grupos de exclusión en función de su situación en el mercado de trabajo, 2007 y 2013**

	2007				2013			
	Integración precaria	Integración moderada	Exclusión moderada	Exclusión severa	Integración precaria	Integración moderada	Exclusión moderada	Exclusión severa
Oficio en exclusión								
No	96,7	87,4	74,8	62,7	96,8	88,4	80,5	60,8
Sí	3,3	12,6	25,2	37,3	3,2	11,6	19,5	39,2
Agricultura	2,3	6,5	5,4	3,6	4,5	5,6	9,8	10,3
Industria	8,2	8,7	12,2	2,6	9,9	9,8	8,1	7,7
Construcción	14,2	18,1	19,6	24,9	6,5	9,7	7,6	8,9
Servicios	75,3	66,7	62,8	68,9	79,1	74,9	74,5	73,2
Jornada laboral								
Menos de 20 horas	1,8	7,3	20,5	10,3	5,0	6,5	9,0	19,2
De 20 a 36 horas	12,4	13,8	24,5	51,1	16,0	19,4	22,0	21,5
37 a 40 horas	74,4	58,5	43,9	31,6	63,2	59,8	52,0	42,0
Más de 40 horas	11,5	20,5	11,2	6,9	15,8	14,3	16,9	17,3
Situación laboral								
Estables	82,7	66,3	57,1	43,8	84,9	71,1	56,9	36,4
Temporales	14,1	30,1	39,7	47,6	13,8	25,1	34,9	38,7
Empleo social	0,0	1,3	0,3	—	0,3	0,5	1,3	1,2
Irregularidad	3,2	2,4	3,0	8,6	1,1	3,3	6,9	23,6

Fuente: EINSFOESSA 2007 y 2013.

para trabajadores expulsados de otros empleos. Este aumento relativo del sector agrícola nos habla también de la interrupción del proceso de promoción laboral, desde la agricultura a otros empleos mejores, que ciertos sectores, como los trabajadores extranjeros, venían experimentando hasta finales de la pasada década.

La situación tampoco resulta favorable en lo que al número de horas de empleo se refiere. Las personas excluidas tienen un menor acceso a jornadas que podríamos categorizar como «típicas» (de entre 37 a 40 horas). En 2013, el 63,2% de los trabajadores plenamente integrados lo hacen en estas condiciones, frente al 42% de los excluidos. Por el contrario, entre los más excluidos se encuentran especialmente sobrerrepresentados en jornadas «atípicas», tanto por defecto (menos de 20 horas), como por exceso (más de 40 horas). En el 17,3% de los trabajadores en exclusión social severa, trabajar muchas horas no parece ser una solución suficiente a sus problemas.

La estabilidad en el empleo muestra una clara relación con la integración social. En 2013, se registra una diferencia de 48,5 puntos entre los más integrados y los más excluidos. Este último grupo muestra una importante inserción en puestos de tipo temporal (38,7% en el año 2013) y en empleos irregulares (23,6% en 2013). La irregularidad en el empleo se ha multiplicado por tres en este periodo entre los trabajadores más excluidos. A ello le debemos sumar que esta población apenas recibe formación continua, lo que dificulta aún más la promoción laboral.

### **3.3.3.3. La explotación económica de los sectores excluidos se intensifica con la crisis**

En este apartado tratamos de mostrar y cuantificar la utilidad social del empleo de los sectores

excluidos. Pretendemos aquí mostrar la relación entre los ingresos obtenidos y las horas de trabajo invertidas por diferentes colectivos (integración, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa). Daremos cuenta así de la situación de las personas menos favorecidas en términos de explotación laboral.

Hemos calculado los ingresos obtenidos por estos sectores de las diversas actividades económicas desarrolladas. No se trata, por tanto, de salarios exclusivamente, sino que también están presentes los beneficios generados por todo tipo de actividades productivas.

El cálculo, que debe ser interpretado como una estimación, ha sido realizado a partir de la combinación de los datos obtenidos en las Encuestas FOESSA y en la Encuesta de Población Activa. De esta última tomamos el dato referente al número total de ocupados.

Destaca, en primer lugar, que ha aumentado el número de personas que viven en hogares excluidos y que se encuentran ocupadas. Ello debe entenderse en el marco de una extensión del espacio social de la exclusión. Paralelamente, puede observarse una bajada de la media de ingresos derivados del trabajo entre la población general. Sin embargo, la disminución de los ingresos no se ha distribuido de manera equitativa. Son las personas en situación de exclusión moderada quienes más han visto mermados sus salarios (13%).

Asimismo, podemos observar cómo son las personas en situación de exclusión, bien severa o bien moderada, quienes tienen una recompensa menor en relación con las horas de trabajo invertidas (4 y 5 euros la hora, respectivamente). Los datos evidencian también un descenso en los ingresos medios por hora. Dicho fenómeno ha impactado de manera diferente en los grupos sociales analizados. Así, las personas en situación



de exclusión moderada han visto mermados sus ingresos del trabajo en más de un 25%, mientras que quienes se encuentran en situaciones de exclusión más severa registran una bajada del 17%. Estas cifras se hallan por encima a las correspondientes a la población integrada.

En suma, las personas excluidas trabajan más para ganar menos. En 2013, los sectores integrados desarrollaron el 40,1% de las horas laborales del conjunto de la sociedad y percibieron el 47,3% del salario total. En contraste, los sectores en situación de exclusión severa trabajaron el 5,7% del total de horas para obtener el 3,5% de los ingresos generados por el trabajo entre el conjunto de los ocupados.

Las personas en exclusión y especialmente las que se encuentran en situaciones más severas están además sobrerrepresentadas en los estratos bajos de la escala de ingresos derivados del trabajo. El 85,7% de las personas en situación de exclusión severa cobra menos de 7 euros la hora y el 49% obtiene un salario inferior a los 3 euros la hora (claramente por debajo del SMI legalmente establecido).

**TABLA 3.29. Utilidad social del empleo de los sectores excluidos e integrados. Ingresos percibidos y horas trabajadas en términos de masa salarial agregada, 2007 y 2013**

	2007			2013				
	Integrados	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Integrados	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa
Personas ocupadas	10.650,655	6.227,432	1.668,409	853,604	6.798,948	7.478,843	2.022,251	1.115,725
Horas de trabajo anuales (media)	2,062	1,986	1,642	1,544	2,007	1,956	1,893	1,739
Ingresos del trabajo anuales (media)	17.120,4	12.259,5	10.265,1	7.323,1	15.278,6	12.033,6	8.930,6	6.812,9
Relación salario/jornada	8,3	6,2	6,3	4,7	7,6	6,2	4,7	3,9
Porcentaje de horas sobre las horas totales	57,2	32,2	7,1	3,4	40,1	43,0	11,2	5,7
Porcentaje de ingresos sobre los ingresos totales	64,6	27,1	6,1	2,2	47,3	41,0	8,2	3,5

Fuente: EINSFOESSA 2007 y 2013.

**TABLA 3.30. Ingresos por hora trabajada según la situación de la persona en relación a la exclusión, 2013**

	Integración	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa
De 0 a 2,99 euros	7,0	16,6	25,9	49,0
De 3 a 6,99 euros	46,7	54,7	56,9	36,7
De 7 a 8,99 euros	18,5	13,5	10,6	4,3
De 9 a 11,99 euros	14,6	8,9	4,3	5,3
Más de 12 euros	13,2	6,2	2,3	4,7

Fuente: EINSFOESSA 2013.

Se pone de manifiesto pues que la realidad de la exclusión social, el significado económico y social que ésta tiene en nuestra sociedad, no viene marcado por la irrelevancia de una población redundante, de un excedente sobrante, improductivo e inútil. Más bien lo contrario, las actividades realizadas y su dimensión en tiempo y en dinero nos hablan de la relevancia de la aportación de más de un millón de trabajadores en exclusión social severa y de otros 2 millones más en exclusión moderada, cuyas condiciones de vida vienen marcados más bien por la sobreexplotación económica en un mercado de trabajo enormemente deteriorado.

Se confirma la ya extendida idea de que la población excluida y en especial quienes se encuentran en situaciones más severas han sido especialmente afectados por la crisis, pero no solo

por la reducción de los empleos disponibles, sino también por la intensificación de su explotación laboral.

Esta evolución queda rubricada por la propia percepción de la población afectada. En 2013, el 24,7% de las personas en situación de exclusión severa señalaron que habían asistido a un proceso de precarización laboral y el 31% habían visto frustradas sus expectativas de promoción. Esto fue paralelo al aumento de la duración de la jornada (18,1%) y a la búsqueda de actividades para completar sus ingresos (22,2%). Sin embargo, ello no implicó un aumento de los ingresos del colectivo. Así, el 72,1% de los excluidos severos señalaron haber visto reducidos sus ingresos. Los datos de evolución reflejan una mayor precarización de la población excluida (excluidos compensados y excluidos severos).

**TABLA 3.31. Percepción sobre el impacto de la crisis en la población ocupada**

	2013				Total
	Integrado	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	
Tiene un trabajo más precario	14,7	20,6	25,1	24,7	18,6
Ha aumentado duración de jornada laboral	15,6	14,9	15,3	18,1	15,4
Ha disminuido duración de jornada laboral	7,0	9,1	11,4	9,0	8,4
Ha visto reducidos sus ingresos	46,1	59,5	62,7	72,1	54,5
Ha tenido que completar ingresos con otras activ.	6,1	14,0	18,6	22,2	11,4
Ha visto frustradas expectativas de promoción	15,5	22,4	29,7	31,0	20,5

Fuente: EINSFOESSA 2013.

En esta fase de la crisis, el debate debe ir más allá de la muy relevante cuestión del enfrentamiento del desempleo y poner de relieve la situación de precarización de los sectores más vulnerables. Los resultados ponen de manifiesto una pérdida progresiva de la capacidad integradora del empleo y una contradicción cada vez más intensa entre el aumento de los trabajadores en situación de exclusión social y la creciente relevancia estructural de la función que cumplen en el sistema productivo.

### 3.3.4. Más población en búsqueda de empleo con peores perspectivas

Si nos centramos ahora en la población parada (la semana anterior a la encuesta buscaba empleo, ha estado buscando empleo en las últimas cuatro semanas y está disponible para trabajar) observamos que 9 de cada 10 personas desempleadas recurren al Servicio Público de Empleo Estatal, una proporción muy relevante y sin grandes diferencias entre los grupos sociales. Ello debe vincularse al requisito de inscripción establecido en las prestaciones de protección frente al desempleo, así como en otras prestaciones sociales.

Por otro lado, los datos reflejan un claro aumento del tiempo de búsqueda de empleo. Si en 2009 el 58,1% de las personas paradas llevaban menos de un año en esta situación, en 2013 encontramos que el 44% señalan esta opción. De manera paralela, ha aumentado el número de personas que se encuentran en procesos de desempleo muy prolongado (más de 2 años) que, por su extensión temporal, debe vincularse al desánimo ante la imposibilidad de encontrar un puesto. Las situaciones de desempleo de entre 2 y 4 años han aumentado en mayor medida entre las personas en situaciones de exclusión severa y moderada, 9,8 y 15,7 puntos respectivamente.

La crisis ha ido aparejada a una reducción de los ingresos del 70% de las personas paradas encuestadas. Debemos tener en cuenta que la pérdida del empleo suele ir ligada a una merma de los ingresos. Por otro lado, si el desempleo se prolonga, baja la cantidad de ingresos que se perciben con las prestaciones contributivas que dan paso a subsidios de menor cuantía. Finalmente, las personas pueden tener que afrontar situaciones sin ingresos. El 17,8% de las personas paradas señalan haber agotado alguna prestación (desempleo/subsidio/prodi/prepara/renta mínima).

**TABLA 3.32. Tiempo de búsqueda de empleo entre la población desempleada en distintos grupos sociales, 2013**

	Integración	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Total desempleados
Un año o menos	58,7	52,8	37,5	32,5	44,0
De 1 año a 2	23,9	22,1	31,0	25,8	25,4
De 2 a 4 años	11,9	16,0	21,1	27,7	20,0
Más de 4 años	5,5	9,2	10,4	14,0	10,5
Desempleo de larga duración	41,3	47,3	62,5	67,5	55,9
Desempleo de muy larga duración	17,4	25,2	31,5	41,7	30,5

Fuente: EINSFOESSA 2013.

**TABLA 3.33. Percepción sobre el impacto de la crisis de las personas paradas, 2013**

	Porcentaje
Ha aumentado la búsqueda de empleo	63,2
Ha visto reducidos sus ingresos	70,0
Ha aprovechado para aumentar sus estudios o su formación	11,4
Ha tenido que dejar de estudiar o de formarse	2,6
Ha agotado alguna de estas prestaciones: desempleo/subsidio/prodi/prepara/renta mínima	17,8

Fuente: EINSFOESSA 2013.

**TABLA 3.34. Características de la población parada que realiza formación para el empleo y de la población en edad activa que realiza algún tipo de formación**

	Parados	Población de 16 a 64 años
	Formación para el empleo	Algún tipo de formación
Varón	53,9	46,2
Mujer	46,1	53,8
Menos de 30 años	39,6	36,0
30-44 años	37,9	34,1
45-64 años	21,9	29,9
Analfabetos	0,3	0,1
Sin estudios obligatorios	8,4	5,9
Secundaria obligatoria	35,9	24,3
FP, bachiller	39,5	38,4
Superiores	15,9	31,2
Espanoles y UE15	78,0	86,4
Gitanos españoles	2,7	2,1
Extranjeros	19,3	11,5
Integrado	18,4	40,8
Integración precaria	39,2	38
Exclusión moderada	24,8	12,3
Exclusión severa	17,6	8,8
<b>Total</b>	<b>11,1</b>	<b>10,6</b>

Fuente: EINSFOESSA 2013.

En este marco, la población parada se ha visto obligada a desarrollar estrategias de afrontamiento al nuevo contexto. El 63,2% señala haber aumentado la búsqueda de empleo y el 11,4% afirma haber aprovechado para estudiar o formarse. En un marco como el actual, de deterioro del empleo y de aumento del desem-

pleo, resulta interesante analizar las estrategias formativas y de búsqueda de empleo de la población.

La proporción de población que ha recibido formación en las cuatro semanas anteriores a la encuesta es claramente minoritaria. El 10,6% de

la población entre 16 y 64 años ha realizado algún tipo de formación y el 11,1% de las personas paradas han realizado formación profesional o prelaboral.

Son los varones, menores de 30 años, con un nivel educativo medio (BUP, FPI, FPII, bachiller LOGSE o superior) y de nacionalidad española quienes preferentemente están accediendo a la formación para personas en desempleo. Los datos reflejan además que las actividades formativas están llegando fundamentalmente a personas que se encuentran en situación de integración precaria. Quienes están en situación de exclusión severa son los que tienen una menor presencia.

En contraposición, encontramos que las personas integradas y las mujeres en edad activa son quienes preferentemente están recibiendo formación en un sentido más amplio. Dentro de esta categoría incluimos desde formación continua para personas ocupadas hasta actividades de desarrollo personal.

Podemos señalar entonces que los datos reflejan un claro aumento de la búsqueda de empleo que va de la mano de un aumento brutal de las tasas

de desempleo que, sin embargo, no va acompañado de estrategias formativas paralelas.

Atendiendo al tipo de formación realizada, puede verse que la incidencia mayor corresponde a la formación continua (realizada por trabajadores ocupados, muchas veces en la propia empresa o en relación con la misma) seguida de la formación ocupacional (realizada por personas desempleadas, normalmente en relación con el servicio público de empleo correspondiente). Pero otro tipo de formaciones, menos directamente orientadas al empleo, tienen también una importancia nada despreciable.

El acceso de los distintos grupos sociales a cada tipo de formación está muy marcado: la formación continua se asocia al espacio de la integración social, de la misma forma que la que tiene un contenido más ocioso o de desarrollo personal; la formación ocupacional está más presente en todos los grupos, aunque aún más en la exclusión más severa; y la formación prelaboral se asocia más claramente al espacio de la exclusión social.

Los recursos dedicados a la formación, mayoritariamente financiada con fondos públicos, son escasos pero aun así parece que hay margen

**TABLA 3.35. Proporción de acceso a distintos tipos de formación en función de los niveles de integración social, 2013**

	Integración	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Total
Formación ocupacional	1,9	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	2,3
Formación prelaboral	0,6	1,0	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	1,1
Formación continua	<b>4,6</b>	<b>2,5</b>	1,2	0,3	2,8
Desarrollo personal	<b>1,0</b>	0,4	0,7	0,7	0,7
Ocio y tiempo libre	<b>1,5</b>	0,7	0,4	0,6	0,9
Sin especificar	1,3	1,4	1,2	1,5	1,3
<b>Total</b>	<b>10,9</b>	<b>8,3</b>	<b>7,9</b>	<b>8,3</b>	<b>9,1</b>

Fuente: EINSFOESSA 2013.

para una utilización más adecuada a las cifras de desempleo y de exclusión social que estamos observando. Tanto las características de la formación realizada como la distinta presencia en cada grupo social, escasamente asociada a lo necesaria que resultaría en cada caso, nos sugieren esas posibilidades de mejora.

En conclusión, durante los últimos años hemos asistido a un escenario de fuerte destrucción de puestos de trabajo. Ello ha tenido un claro impacto social en el conjunto de la población en general y en la población excluida en particular. La concentración del desempleo en los hogares ha aumentado claramente. El 10,9% de los hogares españoles se encuentran con todos sus miembros en desempleo y el 7,8% de los hogares sin ocupados no recibe prestaciones.

Este avance del desempleo ha ido acompañado del desarrollo de estrategias de búsqueda de empleo que no han conseguido frenar el desarrollo del fenómeno del desempleo de muy larga duración. Así, mientras el desempleo se alarga, la situación de los hogares empeora. El 70% de las personas paradas señalan haber visto mermados sus ingresos y el 17,8% ha agotado alguna prestación en el último año. Es reseñable aquí que se

constata un bajo recurso a actividades de tipo formativo como estrategia para salir del desempleo o para mejorar la empleabilidad.

De forma paralela a este proceso, hemos asistido a una extensión de la fragilidad del empleo. Quienes han conseguido mantenerse en el mercado de trabajo son ahora más vulnerables a la precarización, que afecta fundamentalmente a las personas excluidas. Es este colectivo social el que preferentemente se emplea en puestos en exclusión (4,7% en 2013), en puestos no cualificados (37,6% en 2013) y en situación de irregularidad (12,7% en 2013). Su explotación queda reflejada también en términos salariales. Las personas en situación de exclusión tienen que trabajar más para obtener un salario menor.

El panorama resulta especialmente preocupante si tenemos en cuenta que los hogares excluidos del empleo muestran dificultades acumuladas y que la distribución de los efectos de la crisis entre los diferentes grupos sociales no ha sido homogénea. La exclusión del empleo implica un mayor riesgo de exclusión en otros ámbitos. Es decir, el alejamiento progresivo de la integración en el empleo se relaciona con el avance hacia la exclusión en otras dimensiones.

### 3.4. Algunos síntomas de agotamiento del recurso tradicional a la solidaridad familiar<sup>(16)</sup>

La institución familiar en España ha ocupado un espacio relevante, y ampliamente analizado, en el ámbito académico. El papel fundamental que las familias mediterráneas vienen ejerciendo en la provisión de bienestar y en la garantía y asen-

tamiento de las situaciones de integración social ha sido demostrado en numerosos trabajos previos, tanto a nivel teórico como empírico (Sarasa y Moreno, 1995). No obstante, los cambios sociales que podrían estar dándose en el seno de estas (procesos de individualización, nuevas formas de familia o la extensión de las dificultades en el marco de la crisis) podrían estar debilitando la capacidad de contar con el tradicional apoyo familiar (Moreno y Mari-Klose, 2013).

(16) Esta sección recoge los principales resultados del análisis realizado en Martínez Virto (2014). Documento de trabajo 3.7. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.

Los estudios sobre el primer impacto de la crisis confirmaban que la solidaridad familiar continuaba activa, a pesar de algunos de estos cambios (Cantó, 2010; Laparra y Pérez, 2011; Meil, 2011; Martínez Virto, 2014). A partir de la EINSFF09 pudimos ver cómo las familias estaban convirtiéndose en un amortiguador fundamental de la crisis y del desempleo, compensando algunas situaciones de privación y dificultad, y previniendo el desarrollo de itinerarios de descenso a los espacios de la exclusión. Habíamos podido confirmar ya sin embargo la constatación de los límites y los síntomas de agotamiento que presentaba, después de varios años de crisis económica y de empleo, el recurso tradicional en la sociedad española a la solidaridad familiar como soporte básico para enfrentar los problemas sociales.

No obstante, la tradicional responsabilidad que las familias españolas vienen asumiendo en la provisión y en la gestión del bienestar conlleva importantes riesgos, especialmente en periodos como el actual, donde las dificultades se ven prolongadas e intensificadas. En un estudio anterior (Laparra y Pérez, 2012) ya se veía que el recurso a la solidaridad familiar para afrontar las dificultades que generaba la crisis económica mostraba ciertos síntomas de sobrecarga y agotamiento.

### 3.4.1. Conflicto y aislamiento social, ¿causa o efecto de los procesos de exclusión?

En una perspectiva general de los resultados de la EINSFF13 no se observan visos de empeoramiento de las relaciones sociales, sino que la calidad de estas se mantiene, e incluso mejora en algunas cuestiones como la frecuencia o el tipo de relación que se mantiene. A pesar del incre-

mento de las dificultades, el capital social de los hogares españoles permanece activo.

Existe una amplia tradición, sobre todo impulsada desde la sociología francesa, en identificar la estrecha vinculación entre el desarrollo de procesos de exclusión del empleo y el deterioro o la pérdida de relaciones sociales (Paugam, 1994). En un contexto de alta tasa de desempleo cabría, por tanto, pensar en un gran deterioro de las relaciones sociales. En el sentido contrario de la causalidad, sabemos que vivir situaciones de aislamiento social y conflicto incrementa las posibilidades de desarrollar algunos procesos de exclusión. No obstante, los resultados demuestran que en 2013 se reducen los costes que procesos de exclusión como la pérdida del empleo o la pérdida de la vivienda tienen en materia relacional.

En la tabla 3.36 se recogen, por un lado, las implicaciones que estar en situación de conflictividad y aislamiento social tiene en el desarrollo de los procesos de exclusión en materia de empleo, pobreza o consumo, exclusión política, educativa, vivienda o salud. Por otro lado, la incidencia de los diferentes procesos de exclusión al vivir en situaciones de aislamiento o conflicto.

Tal como se constata en la primera de ellas, la exclusión en el empleo se ha incrementado entre 2007 y 2013 en los hogares en situación de conflicto y aislamiento social, como lo ha hecho también en el conjunto de los hogares, que hemos visto anteriormente. En los hogares en conflicto social, se observa un incremento de más del doble (del 26,2% al 59,2%). Pero lo relevante es el nivel alcanzado: 6 de cada 10 hogares en estas situaciones afectados por la exclusión del empleo. En un contexto de expansión de las dificultades laborales en todos los grupos, las personas con determinados comportamientos socialmente estigmatizados quedan en su mayoría fuera de juego. En las situaciones de aislamiento social la

**TABLA 3.36. Incidencia de los distintos procesos de exclusión en los hogares con situaciones de conflicto social o aislamiento social (sobre cada 100 de estos hogares)**

	Conflicto social			Aislamiento social		
	2007	2009	2013	2007	2009	2013
Exclusión del empleo	26,2	41,4	59,2	14,6	14,7	22,4
Exclusión económica/Pobreza extrema	4,4	3,3	8,4	1,8	4,1	3,0
Exclusión política	30,6	29,8	16,8	14,6	17,1	18,6
Exclusión de la educación	23,0	13,0	15,2	5,4	13,9	8,9
Exclusión de la vivienda	37,9	34,9	46,1	32,7	22,1	26,4
Exclusión de la salud	27,3	24,7	39,4	13,2	19,4	24,8

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

**TABLA 3.37. Incidencia del conflicto social y del aislamiento social en los hogares afectados por cada uno de los otros procesos de exclusión (%)**

	Conflicto social			Aislamiento social		
	2007	2009	2013	2007	2009	2013
Exclusión del empleo	8,4	10,6	9,6	7,1	3,8	3,9
Exclusión económica/Pobreza extrema	9,5	8,5	10,6	5,9	10,8	4,1
Exclusión política	11,7	9,1	7,3	8,5	5,2	8,8
Exclusión de la educación	11,0	6,8	10,3	3,9	7,5	6,6
Exclusión de la vivienda	9,4	10,7	10,1	12,6	6,8	6,2
Exclusión de la salud	11,9	14,2	11,9	9,3	11,2	8,1

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

incidencia de los procesos de exclusión del empleo, tal como los hemos definido, son lógicamente menores al tratarse en muchos casos de personas mayores, ya jubiladas, que no les afecta ni el desempleo ni el empleo precario.

Si bien la relación con el ámbito laboral es reseñable, también lo es la exclusión del ámbito sanitario. Tanto en los hogares en situación de conflicto como en los de aislamiento social los procesos de exclusión sanitaria aumentan, con respecto a 2007, en 12 pp. (del 27,3% al 39,4%, y del 13,2% al 24,8%, respectivamente). Tiene que ver este proceso con la mayor vulnerabilidad de las personas con problemas de salud mental,

adicciones o en situación de dependencia frente los recortes en salud. Como se ha observado en otras partes del informe(17), los efectos del copago en los medicamentos parecen constatare en el aumento de los índices de privación farmacéutica. Igualmente, los efectos en materia de recortes en atención, pagos de ayudas a la dependencia o las listas de espera en los servicios de atención especializados parecen tener más implicaciones en los hogares aislados y en situación de conflicto social.

(17) Para ampliar esta idea consultar Martínez Virto, Azcona Sáenz y Pérez Eransus (2014). Documento de trabajo 3.8. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.



En la tabla anterior, se observa si, en los hogares afectados por cada uno de los distintos procesos de exclusión, aumenta o se reduce en el tiempo la proporción de situaciones de aislamiento y conflicto. En general, podemos observar que la extensión de muchos de estos problemas sociales (empleo, ingresos, vivienda, salud) a capas más amplias de la sociedad supone una cierta «normalización» que hace que los problemas de aislamiento y conflicto social estén menos presentes proporcionalmente. Así, la menor traducción del desempleo en el aislamiento social se debe a que se ha producido un aumento de los hogares sin empleo que no ha ido de la mano de un incremento paralelo del aislamiento en iguales dimensiones.

Las tendencias son similares para los hogares en exclusión severa, aunque con índices de exclusión, conflicto y aislamiento más intensos. Si atendemos a la incidencia que las situaciones de conflicto y aislamiento tienen en el desarrollo de los procesos de exclusión social se observa que el conflicto y el aislamiento incrementan de manera importante las posibilidades de verse afectado por el desempleo, por la pobreza severa, por la exclusión en salud y por la exclusión residencial.

Al espectacular incremento, entre los años 2007 y 2013, de los procesos de exclusión laboral se une que las situaciones de conflicto y aislamiento aumentan aún más las posibilidades de verse afectado por la pérdida del empleo. En esta misma línea, el aislamiento y el conflicto también contribuyen a incrementar la pobreza económica, la exclusión sanitaria y la residencial. Todo ello constata que, de manera más intensa en los hogares excluidos, el capital social desempeña un papel fundamental en la prevención de estos procesos.

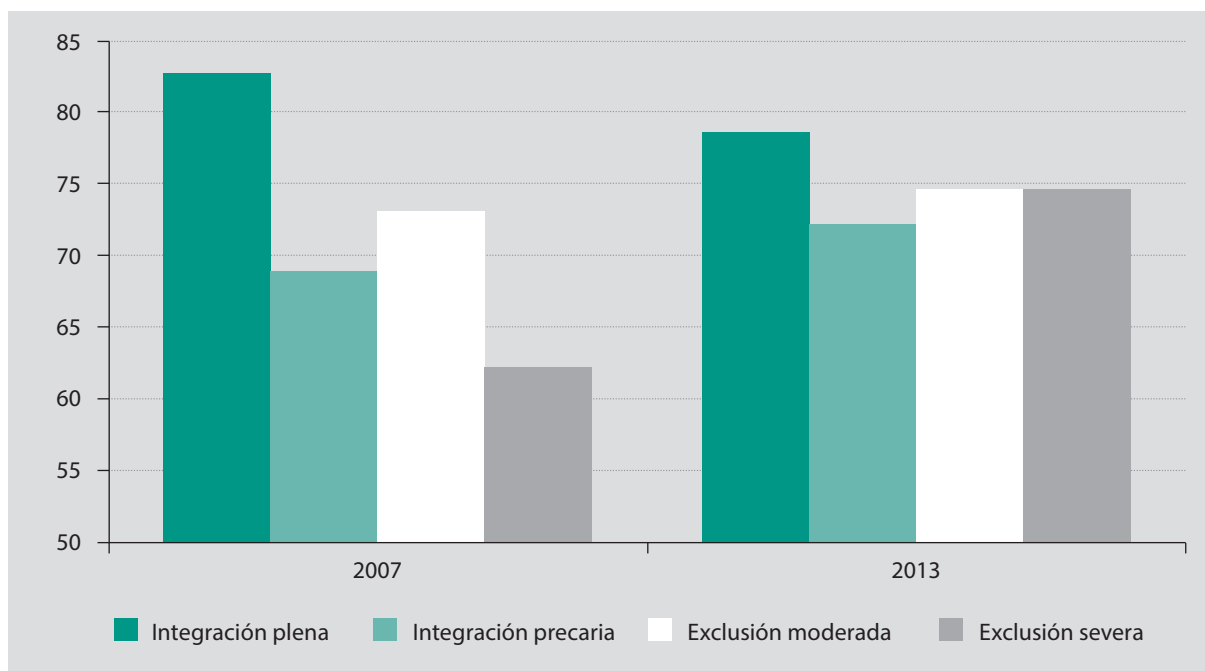
Por tanto, a grandes rasgos se constata que, si bien el desarrollo de procesos de exclusión en

materia residencial o laboral no ha supuesto un incremento de las situaciones de aislamiento, los hogares que partían de situaciones de conflictividad y aislamiento social han demostrado desarrollar más procesos de exclusión en materia sanitaria, laboral o residencial. Esta evolución es más intensa en los hogares en exclusión severa, los cuales demuestran que las situaciones de conflicto social y aislamiento duplican y cuadruplican, respectivamente, el desarrollo de procesos de exclusión laboral entre 2007 y 2013. En definitiva, si el aumento generalizado de procesos de exclusión en materia laboral, sanitaria o residencial, entre otras, no parece traducirse en un incremento de las situaciones de aislamiento y conflicto entre 2007 y 2013, carecer de capital social tiene implicaciones en el desarrollo de estos procesos de exclusión. Por ello, el papel que representan las relaciones sociales para prevenir y contrarrestar algunas situaciones de exclusión arroja luz sobre la importancia de contar con el capital social.

#### **3.4.1.1. Evolución de la capacidad de tener ayuda y de ayudar a otros hogares**

Algunos trabajos empíricos previos de carácter cualitativo comienzan a alertar de que la prolongación de las dificultades en muchos hogares podría estar dando lugar a una sobrecarga de las familias (Lasheras y Martínez-Virto, 2013). En un primer acercamiento a los hogares que manifiestan contar, o haber contado, con alguna persona que pudiera ayudarles en situaciones de necesidad no se observa un deterioro importante de la capacidad de recibir ayuda entre 2007 y 2013, pero sí una tendencia a la baja. De hecho, los porcentajes sobre el total de hogares que tienen, o han tenido alguna vez, ayuda se reducen en 0,4 pp. (75,5%-75,1%). No obstante, si se hace una lectura por espacios de exclusión, se observa un ligero incremento de la ayuda con la que cuentan los hogares precarios, en exclusión

GRÁFICO 3.17. Hogares que manifiestan tener o haber tenido ayuda, en los años 2007 y 2013



Fuente: EINSFOESSA 2007 y 2013 (total de hogares).

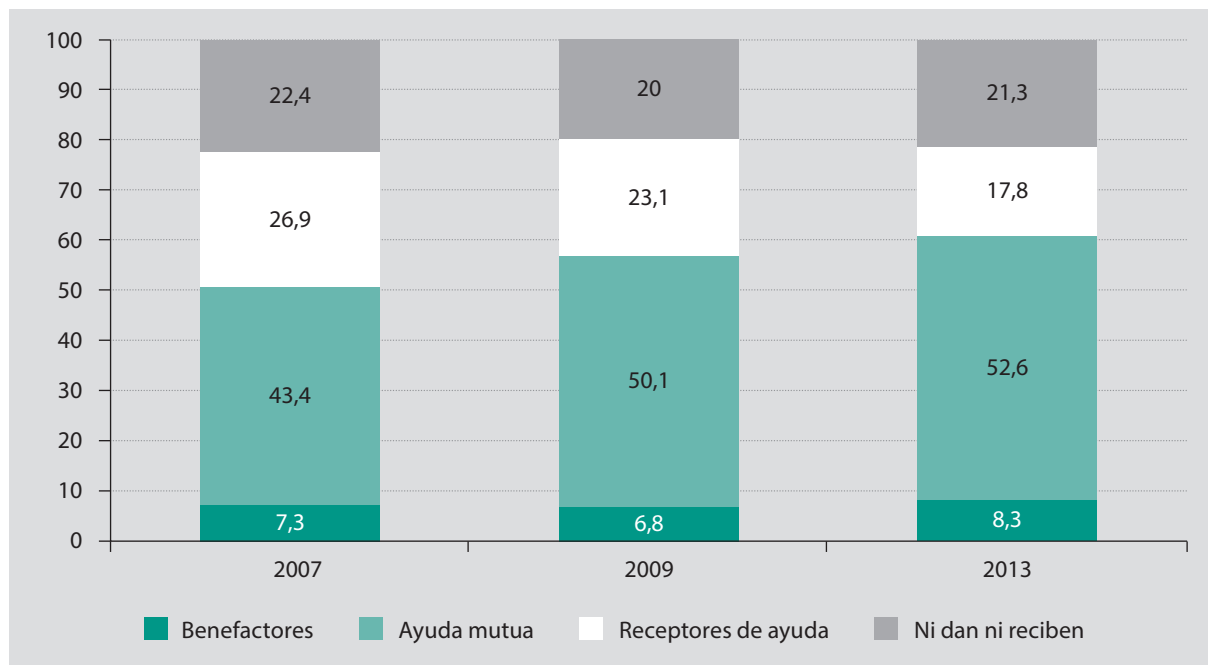
moderada y severa, mientras que se reduce en 4,1 pp. la ayuda con la que cuentan los integrados. Este hecho podría ir vinculado a un aumento de la necesidad de pedirla en los hogares con más dificultades.

En definitiva, a nivel general se observa que tres cuartas partes de los hogares cuentan con ayuda en momentos de necesidad, es decir, un 75% del total. Este alto porcentaje evidencia que la cobertura y solidaridad informal es muy activa, tanto en 2007 como en 2013, aunque esté viviendo una ligera tendencia a la baja. No obstante, además de esta fotografía general, es interesante conocer la tipología de ayuda con la que cuentan. Para ello se identifican cuatro tipos de ayuda. En primer lugar, aquellos hogares que se tienen *ayuda mutua*, es decir, que ofrecen ayuda a otros hogares y también ellos la reciben si la necesitan. En segundo lugar,

aquellos que *dependen de las ayudas externas*, debido a que reciben ayuda si la necesitan pero no la pueden ofrecer. En tercer lugar, los hogares *benefactores* que suministran ayuda a otros núcleos pero ellos no la reciben. Por último, los hogares que *ni tienen ni dan ayuda*, bien porque nunca la han necesitado o porque no cuentan con redes de apoyo.

En general, se observa cómo han aumentado ligeramente los hogares que reciben algún tipo de ayuda, pero lo que más claramente se ve es que la ayuda mutua es la que más incidencia tiene con respecto al resto de ayudas, así lo muestra más de la mitad del total de hogares en 2013 (52,6%), con un incremento de 9,2 puntos entre 2007 y 2013. Por otro lado, el tipo de ayuda menos utilizada en 2013 es aquella en la que un hogar da ayuda pero no la recibe, es decir, los hogares benefactores (8,3%).

**GRÁFICO 3.18. Evolución de los hogares en relación con la ayuda que reciben y/u ofrecen, respecto al total de hogares**



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013 (total de hogares).

No obstante, este porcentaje sobre el total de hogares aumenta en un punto porcentual en relación con 2007.

Por el contrario, se observa una reducción del porcentaje total de hogares que solo reciben ayudas y de aquellos que ni las dan ni las reciben. Esta es especialmente reseñable en el primero de los casos, se reduce en más de 9 puntos porcentuales los hogares que en 2013 son solo receptores de ayudas.

Por tanto, la opción de la interdependencia, en la que un hogar recibe ayuda a la vez que apoya a otros es la opción que más ha crecido, mientras que la proporción de los que solo reciben se ha reducido notablemente. Este aumento de los hogares que cuentan con una persona que les apoye en momentos de necesidad es una evidencia del incremento de

las situaciones de necesidad de ayuda. Sin embargo, este aumento de 9,2 puntos porcentuales, en relación con otros incrementos en materia de exclusión laboral o económica, parece apuntar a que el incremento de dar y recibir ayuda no se ha producido en la misma intensidad que lo han hecho las situaciones de dificultad.

La tendencia a incrementar los mecanismos de ayuda mutua como respuesta a las dificultades que genera la crisis está presente en los distintos espacios sociales, pero se hace especialmente visible en los hogares ubicados en los espacios de la integración (13 pp. más en la integración plena y 17 pp. en la integración precaria). Del mismo modo, los hogares plenamente integrados reducen su dependencia de ayudas externas y aumentan su rol de benefactores.

**TABLA 3.38. Proporción de hogares que dan y/o reciben ayuda en los distintos espacios de la integración a la exclusión**

	2007				2013			
	Integración plena	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Integración plena	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa
Ayuda mutua	47,8	33,9	35,3	34,7	59,1	50,2	46,0	38,2
Reciben ayuda	26,8	26,8	15,8	18,8	16,0	16,0	20,8	26,6
Benefactores	4,4	8,1	13,3	6,9	6,0	9,9	7,0	10,5
Ni dan ni reciben	13,8	25,1	31,8	35,1	17,5	22,5	25,2	23,1
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: EINSFOESSA 2007 y 2013 (total de hogares por espacios de exclusión).

Por el contrario, el recurso a la ayuda de terceras personas aumenta claramente en el espacio social de la exclusión. Los hogares en situaciones de exclusión más moderada lo hacen incrementando el recurso a mecanismos de ayuda mutua e interdependencia (aumenta casi 11 puntos porcentuales) mientras que los hogares en exclusión más severa pueden desarrollar menos ese tipo de estrategias y se sitúan más en la posición de meros receptores (con un aumento de casi 8 puntos porcentuales) y, por tanto, se muestran más dependientes.

En uno de cada tres casos, los hogares en situaciones de exclusión severa no pueden recurrir a la ayuda externa, lo que sin duda contribuye a agravar las dificultades sociales. La situación de los hogares integrados que no recurren a ayudas es también importante, pero tiene otro significado muy distinto: no recurren porque no lo necesitan.

El debilitamiento de los lazos sociales es, por concepto, una dimensión sustancial de la exclusión social, y efectivamente eso se traducía ya antes de la crisis en una menor presencia de las redes de ayuda en el espacio de la exclusión. El efecto de la crisis ha hecho que estas diferencias

se intensifiquen y las dificultades de ciertos sectores para recurrir al apoyo de otras personas ha hecho agravarse los procesos de exclusión.

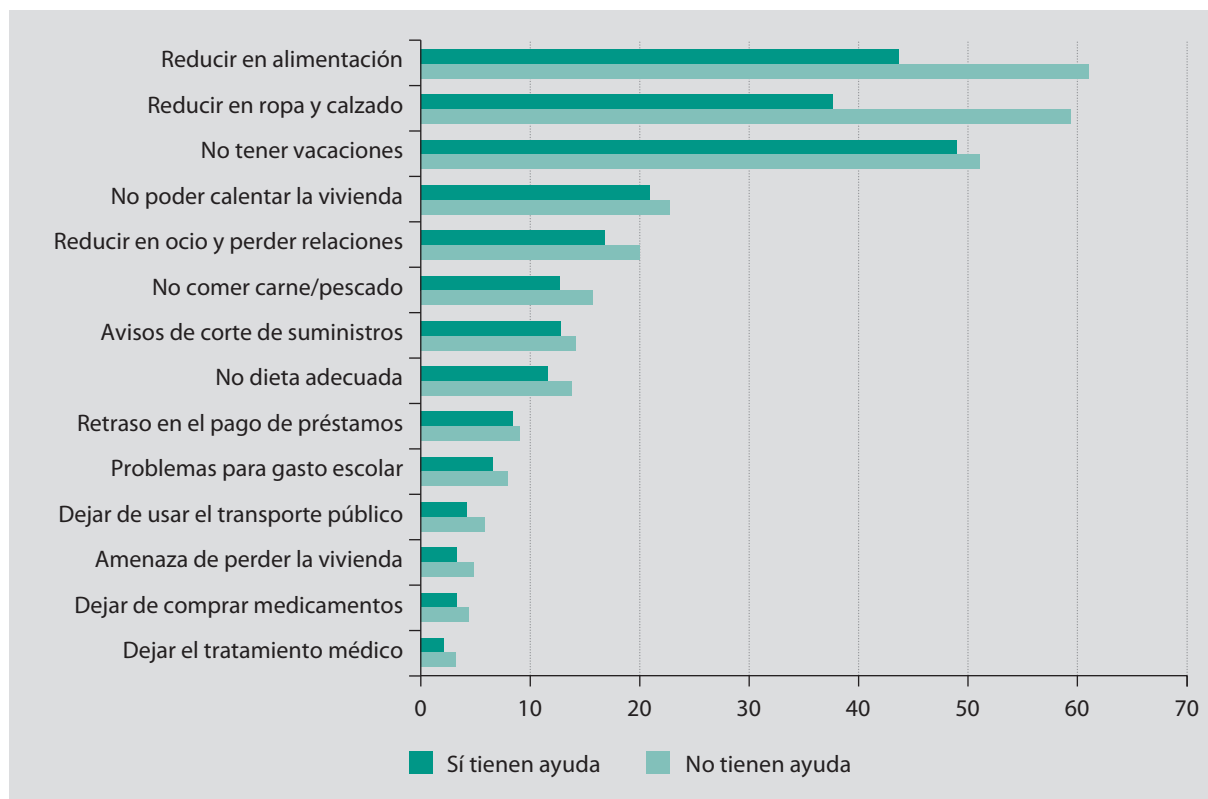
En definitiva, si bien se constata la extensión de las redes de ayuda a nivel general (un 75% de los hogares cuentan con ayuda cuando la necesitan), pueden verse síntomas de un progresivo y paulatino debilitamiento de la capacidad de dar y recibir ayuda entre 2007 y 2013. Además de ello, la mirada por espacios de la exclusión evidencia dos conclusiones fundamentales. La primera de ellas es que los hogares excluidos han visto incrementados sus niveles de dependencia a ayudas externas y, por tanto, son más vulnerables ante el riesgo de que la pérdida de ayuda se produzca. En segundo lugar, que uno de cada tres hogares afectados por procesos de exclusión severa no reciba ayuda de ninguna persona pone de relieve la importancia de las políticas públicas en la cobertura de las necesidades sociales. A medida que la crisis se alarga, son más los hogares que pueden necesitar ayuda, por estar ubicados en los espacios de exclusión. Si no cuentan con ella, estos hogares aislados y sin apoyos en momentos de necesidad podrían estar viviendo las situaciones de dificultad más intensas.

### 3.4.2. Tener ayuda previene privaciones y reduce la exclusión residencial

Contar con ayuda familiar puede resultar clave para prevenir caídas a situaciones de exclusión y evitar así escenarios de mayor dificultad. Si bien estos apoyos no pueden, en sentido estricto, ser identificados como una estrategia, debido a que tener o no tener ayuda está más definido por mantener redes de apoyo que por decisiones familiares, este es un factor que, sin duda, amplía significativamente la capacidad de respuesta de los hogares. En el análisis rea-

lizado en 2011 sobre el primer impacto de la crisis se observaban diferencias entre la intensidad de las estrategias o acciones desarrolladas por los hogares para enfrentar las dificultades cotidianas. En el análisis de las encuestas 2007 y 2009 se constataba que aquellos hogares en los que el impacto era menos intenso primaban las estrategias de ajuste, mientras que en aquellos que se veían sobrepasados por la crisis manifestaban estar en riesgo de tener privaciones de carácter básico. En esta nueva fase se observan, como veremos a continuación, situaciones de dificultad más intensas, evidenciando que el apoyo de las redes sociales previene impagos y privaciones básicas.

**GRÁFICO 3.19. Estrategias de respuestas a la crisis en función de la ayuda recibida en el año 2013 (porcentaje total de hogares)**



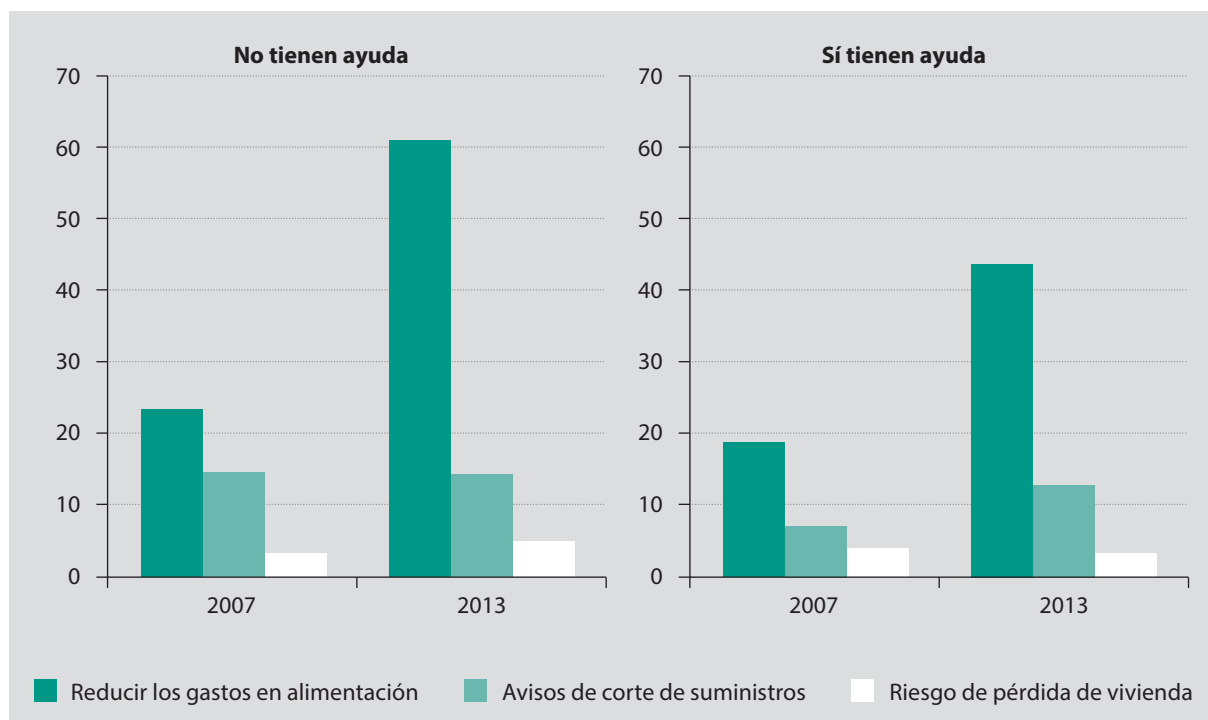
Fuente: EINSFOESSA 2013 (total de hogares).

Las implicaciones de tener o no tener ayuda en la gestión se observan claramente en el anterior gráfico, el cual nos da una foto del año 2013. Los hogares que tienen ayuda desarrollan en menor medida estas estrategias, las cuales se vinculan claramente al riesgo de privaciones de carácter básico (alimentación, ropa, medicación y tratamientos u ocio). Las diferencias entre ambos grupos son especialmente intensas en materia de alimentación (17,3 pp), ropa y calzado (21,8 pp), pero también en prácticamente todos los ámbitos de privación considerados.

El incremento de ciertas privaciones que muestra el siguiente gráfico arroja luz sobre la mayor vulnerabilidad de los hogares que no tienen ayuda cuando la necesitan, en relación con aquellos que sí la tienen.

Los que no tienen ayuda se ven en la necesidad de reducir los gastos en alimentación, reciben más avisos de corte de suministro y manifiestan más riesgo de impagos y amenazas de pérdida de la vivienda. El recorte en alimentación es una estrategia, especialmente extendida en aquellos hogares que no tienen ayuda. Este hecho se ha incrementado notablemente desde 2007 (se observa un aumento de 37,6 puntos porcentuales en los hogares que no tiene ayuda, mientras que en aquellos que sí la tienen aumenta 25 puntos). Los hogares sin ayuda manifiestan también tener más cortes de suministro (14,2%) o riesgo de pérdida de la vivienda (4,8%) que los hogares con ayuda. Aquí la evolución temporal es menos clara, posiblemente por la confluencia de otros factores, como por ejemplo que los hogares que están pagando la hipoteca son

**GRÁFICO 3.20. Evolución de los riesgos de privación entre 2007-2013 según la disponibilidad de ayuda (porcentaje total de hogares)**



Fuente: EINSFOESSA 2007 y 2013.

más vulnerables y que muchos de ellos cuentan con ayuda de la familia extensa precisamente por ello.

Así pues, los hogares sin ayuda son los que están viviendo las situaciones de mayor vulnerabilidad, tanto por las posibilidades de verse apoyados como por la capacidad de responder de manera autónoma al impacto de la crisis.

### 3.4.3. Pero se hacen manifiestos también los límites de la solidaridad interna en los hogares

En el apartado anterior sobre el mercado de trabajo hemos visto cómo se ha producido una cierta concentración del desempleo en determinados hogares y, con ello, la expansión de los hogares en los que todos sus miembros activos se encuentran desempleados. Esta dinámica del mercado de trabajo ha supuesto una notable reducción de la capacidad de los hogares de reconstruir ciertos equilibrios, siquiera precarios, con los ingresos de otros miembros del hogar.

La estabilidad en el empleo del *breadwinner* y la combinación de su salario fijo con algunos otros ingresos aún más limitados, de empleos temporales o de la protección social, permitían salir adelante a muchos hogares en otros periodos de dificultad en crisis anteriores, aún a costa de reducir los gastos. Como hemos visto, el impacto de esta crisis en el empleo se ha centrado más que otras veces en el sustentador principal del hogar y ha repercutido también más en el conjunto de la familia. Con ello, la posibilidad de esta combinación de recursos de distintos miembros del hogar y de distintas fuentes se ha visto notablemente reducida.

En una primera fase de esta crisis, las pensiones pudieron cubrir en cierta medida esta función de estabilización, de última red, de recurso básico para muchos hogares. El número de hogares afectados por el desempleo en el que había un pensionista se multiplicó casi por cuatro, acercándose al millón de hogares en 2009. En los últimos años, sin embargo, han crecido más los hogares afectados por el desempleo que no cuentan con un pensionista y esta «tasa de cobertura» de las pensiones sobre el desempleo familiar ha disminuido: poco más de uno de cada cinco hogares afectados por el desempleo cuenta con este recurso, en muchos casos esencial.

**TABLA 3.39. Presencia de pensionistas en los hogares afectados por el desempleo**

	Medios 2007	Finales 2009	Medios 2013
Proporción de hogares que tienen algún parado (%)	6,5	19,4	30,1
Estimación de hogares que tienen algún parado (miles) (a)	1.061	3.321	5.250
Estimación de hogares con parados y con algún pensionista (miles) (b)	255	917	1.165
Proporción (%) (b/a)	24,1	27,6	22,2

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013 (basado en la estimación de hogares de la EPA, INE).

Cuando el impacto del desempleo en los hogares es más agudo y todas las personas activas del hogar se encuentran desempleadas, la presencia de pensionistas es notablemente mayor, lo que algo nos dice de cómo se adaptan las estrategias de convivencia en estos casos: el 36,7% de estos hogares en desempleo total familiar cuentan con un pensionista, 664.000 hogares en total. Sin embargo, aquí puede verse también cómo cada vez hay más hogares en estas circunstancias extremas que no cuentan con el apoyo de este importante recurso: tener un pensionista en casa.

La comparación entre los hogares afectados por el desempleo que cuentan con una pensión y los que no cuentan con ella nos permite aproximarnos a la función que aun así siguen cumpliendo para casi 1,2 millones de hogares: una reducción de 9 puntos porcentuales de la tasa de exclusión (más de 6 en la de exclusión severa).

La significación de las pensiones todavía es más relevante cuando la incidencia del empleo de los hogares es mayor. Para los 664.000 hogares en

**TABLA 3.40. Presencia de pensionistas en los hogares en los que todos los activos están parados (desempleo total familiar)**

	Mediados 2007	Finales 2009	Mediados 2013
Proporción de hogares con desempleo total familiar (%)	2,6	9,8	10,4
Estimación de hogares con desempleo total familiar (miles)	418	1.675	1.806
Estimación de hogares con desempleo total familiar y algún pensionista (miles)	127	650	664
Proporción (%) (b/a)	30,4	38,8	36,7

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013 (basado en la estimación de hogares de la EPA, INE).

**TABLA 3.41. Niveles de integración social de los hogares afectados por el paro y de los que tienen todos los activos parados, según presencia de algún pensionista en el hogar, 2013**

Nivel de integración	Hogares con algún parado		Hogares con todos los activos en paro	
	Hogares SIN pensionista	Hogares CON pensionista	Hogares SIN pensionista	Hogares CON pensionista
Integrado	4,9	1,4	0,0	0,0
Integración precaria	49,4	62,1	20,9	56,3
Exclusión moderada	25,1	22,2	30,8	24,3
Exclusión severa	20,5	14,3	48,3	19,5
Total tasa de exclusión	45,7	36,5	79,1	43,7
Índice Sintético de Exclusión Social (ISES)	2,532	2,281	5,019	2,761

Fuente: EINSFOESSA 2013.



los que todos sus activos están en paro, la presencia de un pensionista supone una reducción del 45% en la tasa de exclusión y del 60% de la de exclusión severa, con respecto a los hogares en los que no hay pensiones.

El modelo que se configura en estos hogares, sin embargo, está fuertemente marcado por la precariedad que genera verse obligados a compartir estos recursos escasos: casi dos tercios de los hogares afectados por el desempleo que cuentan con una pensión (y un 56% de los hogares en desempleo total familiar) se encuentran en situaciones de integración precaria.

En resumen pues, el riesgo de que la institución familiar presente síntomas de extenuación, debilitando su capacidad de protección en el futuro, nos resalta la importancia de constituir mecanismos de apoyo a los hogares con dificultades que liberen a sus redes sociales y prevengan el agotamiento total de sus apoyos. Una de las grandes potencialidades de la familia es que la movilización de sus recursos es rápida y efectiva, pero debe tener siempre un carácter urgente, puntual y de emergencia. De lo contrario, podríamos presenciar la sobrecarga de esta, la intensificación de las tensiones en las relaciones interpersonales y el aumento de sectores que no cuentan con esta red de protección informal.

### 3.5. La erosión del efecto amortiguador de las políticas sociales en España<sup>(18)</sup>

Una de las lecciones aprendidas de esta crisis de alcance internacional es que las políticas sociales de los modelos de bienestar europeos constituyen un importante amortiguador frente a los efectos de las convulsiones de los mercados financieros.

Las pensiones y las prestaciones de desempleo no solo actúan como estabilizadores automáticos del consumo sino que también están ejerciendo una importante función en el mantenimiento de las condiciones de vida de las personas en desempleo y, por tanto, en la prevención de procesos de pobreza y exclusión. Los programas de formación e intermediación laboral buscan la forma de adecuar la cualificación de los desempleados con las nuevas oportunidades de empleo. Los sistemas sanitarios de cobertura universal mitigan los problemas de salud física y mental ocasionados por el paro. La educación gratuita sigue salvaguardando

la formación e igualdad de oportunidades de la población joven, independientemente de la situación económica de sus padres. Y las rentas mínimas y los servicios sociales constituyen una última red de apoyo para las situaciones de crisis y la falta de cobertura y apoyo familiar. Las políticas sociales, por tanto, contribuyen a mantener el bienestar de la población, a pesar de la situación económica y de la incesante destrucción de empleo.

No obstante, existe toda una trayectoria de estudios comparados que analizan la eficacia diferenciada de los diversos modelos de bienestar europeos, cuyas clasificaciones también se demuestran vigentes en este periodo de fuerte inestabilidad económica. Los modelos nórdicos de vocación universalista aseguran un nivel mayor de cobertura frente a la pobreza y el desempleo, así como, una apuesta más sólida por políticas de activación laboral como herramienta frente al desempleo. Además su orientación previa hacia los nuevos riesgos sociales constituidos por el desempleo de los jóvenes, la conciliación entre el empleo y la vida personal, así como los nuevos tipos de familia han favorecido una mejor protección

**(18)** Esta sección recoge los principales resultados del análisis realizado en Martínez Virto, Azcona Sáenz y Pérez Eranus (2014). Documento de trabajo 3.8. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.

también en tiempos de crisis. Sin embargo, en la Europa continental los modelos de protección más basados en la contribución previa y las limitaciones de las políticas familiares y de activación se muestran más ineficaces para hacer frente al desempleo de larga duración, los problemas de los jóvenes y para generar oportunidades de cualificación. La distancia respecto al resto de los modelos de bienestar mediterráneos también ha quedado evidenciada en esta crisis. La dualización de los modelos de protección del desempleo, la ausencia de políticas destinadas a las familias y a los jóvenes y el subdesarrollo de los programas de renta mínima explican su menor eficacia frente a la pobreza y la exclusión en esta crisis.

A las limitaciones de las políticas sociales menos protectoras es preciso añadir el riesgo implícito en la adopción de estrategias de austeridad en algunos países miembros. El objetivo de reducción del déficit fiscal ha puesto al gasto social en el punto de mira de los ajustes presupuestarios. Desde distintos niveles, tanto expertos como movimientos sociales, se viene alertando sobre los riesgos sociales que conlleva la aplicación de la llamada estrategia de austeridad en la cobertura de necesidades básicas como la salud, educación, garantía de ingresos o servicios sociales (Frazer y Marlier, 2012). Sin duda, el riesgo se incrementa en los países o ámbitos de la política social en los que la estrategia de recorte parte de un nivel de desarrollo menor.

El caso de Grecia constituye un ejemplo en el que la estrategia drástica de austeridad aplicada a servicios básicos, sanitarios, educativos y sociales conlleva un fuerte deterioro de las condiciones de vida de la población entendida en términos de empobrecimiento, pero también en aumento de población con problemas de salud mental, alcoholismo, sinhogarismo o tasa de suicidios (Stuckler y Basu, 2013).

En el caso español, este periodo de crisis vuelve a evidenciar la peculiaridad y las limitaciones del modelo de bienestar. A pesar del fuerte proceso de declive

económico, por el momento se mantiene la protección prácticamente universal del sistema sanitario y educativo obligatorio; y el acceso a las pensiones de la población mayor permite la estabilidad de este colectivo frente a la crisis. Sin embargo, en este periodo se evidencia de forma drástica la ineficacia del sistema de empleo en la lucha frente al desempleo y la pobreza. Explican esta ineficacia las características de un sistema de protección de desempleo muy vinculado al principio de contribución previa y con cobertura limitada frente al desempleo de larga duración; el escaso desarrollo de políticas de activación; la ausencia de programas y políticas de apoyo a las familias o protección de la infancia; la práctica inexistencia de una política de vivienda y la escasa capacidad de los sistemas de renta mínima y servicios sociales fragmentados y heterogéneos en el nivel autonómico.

También caracterizan al caso español la reducción de los presupuestos autonómicos que ha marcado una dinámica de recortes sociales, intensificando los procesos de pobreza y exclusión originados en el mercado.

A través de los datos hemos conseguido mostrar el alcance y la eficacia que las políticas sociales siguen ejerciendo en España, amortiguando los efectos nocivos del desempleo con el fin de legitimar una apuesta por su mantenimiento y alertar sobre los riesgos implícitos en los procesos de recorte de la atención a los derechos básicos de la ciudadanía, tanto en materia educativa como sanitaria. Sin embargo, la duración del desempleo, el carácter limitado de las prestaciones y lo reducido de las cuantías nos permite comprobar un cierto agotamiento en la capacidad de respuesta. La pérdida de ingresos de los hogares y los fuertes costes de la vivienda caracterizan a una parte importante de los procesos de exclusión social en esta crisis. Por último, también se evidencia el impacto de los recortes en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, comprobando que la estrategia de austeridad tiene efectos más intensos en la población más vulnerable (Frazer y Marlier, 2011).

### 3.5.1. El efecto amortiguador de la garantía de ingresos

#### 3.5.1.1. La eficacia de las prestaciones frente a la pobreza

Es justo comenzar la referencia a la protección social en periodo de crisis reconociendo su capacidad de respuesta. Respecto a 2007, en 2013 se concedían en España 3 millones más de prestaciones al año. Este incremento recoge el aumento progresivo del número de pensionistas debido al envejecimiento poblacional, pero sobre todo, responde al aumento de las prestaciones de desempleo al ritmo del incremento del paro. El número de perceptores de prestaciones de desempleo de

la Seguridad Social y de subsidios de desempleo alcanzó casi los 3 millones en 2010, año a partir de cual la cifra comienza a descender debido al agotamiento de las prestaciones.

También las rentas mínimas y la renta activa de inserción manifiestan una respuesta expansiva, llegando a más de doscientos mil perceptores respectivamente.

El indicador de pobreza medido antes y después de prestaciones, a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, permite medir la eficacia de las mismas al mostrar cuál sería el volumen de población en situación de pobreza relativa (bajo el umbral del 60% de la renta mediana) si no existieran prestaciones económicas.

**TABLA 3.42. Evolución del volumen de perceptores de prestaciones (miles) 2005-2013**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pensiones de jubilación	4.678	4.809	4.863	4.937	5.039	5.141	5.246	5.330	5.451
Pensiones de supervivencia	2.469	2.496	2.522	2.547	2.572	2.597	2.620	2.647	2.679
Pensiones de incapacidad	833	860	889	907	921	934	938	943	935
Prestaciones contributivas desempleo	687	720	780	1.101	1.625	1.472	1.328	1.381	1.311
Subsidios desempleo	559	559	576	646	961	1.445	1.331	1.327	1.314
PNC jubilación	279	277	271	265	261	257	254	252	251
PNC invalidez	205	205	203	199	197	196	195	195	195
Rentas mínimas	101	103	103	114	157	193	224	217	—
Renta activa de inserción	50	51	66	68	96	126	186	234	240
SGIM LISMI	44	38	33	29	25	21	18	16	13
FAS	33	28	28	21	18	16	14	10	8
Prestaciones familiares	—	—	—	687	747	811	845	865	887
<b>Total</b>	<b>9.937</b>	<b>10.146</b>	<b>10.334</b>	<b>11.521</b>	<b>12.619</b>	<b>13.208</b>	<b>13.201</b>	<b>13.417</b>	<b>13.286</b>

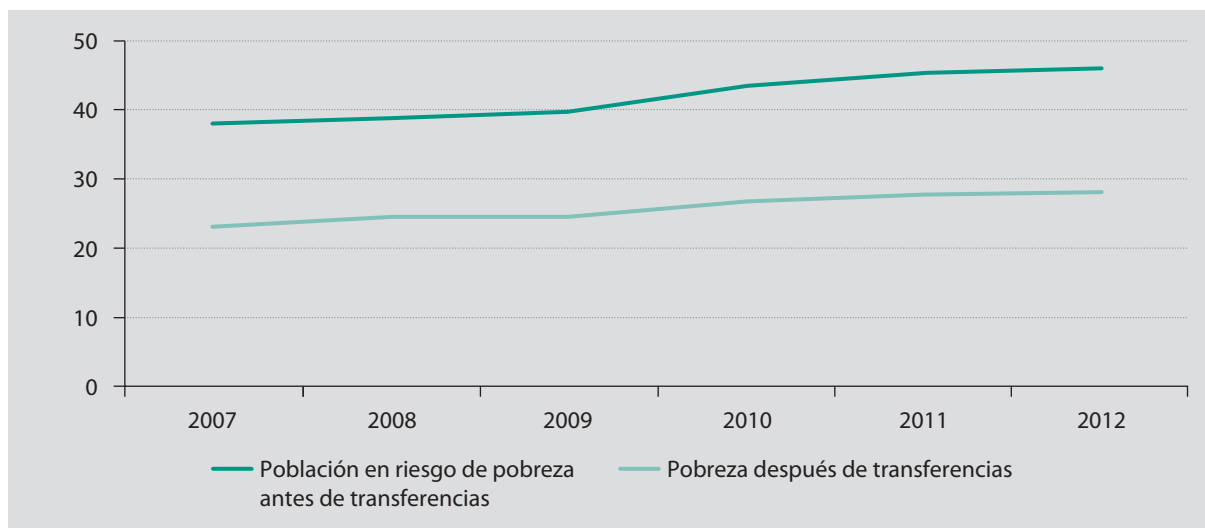
Fuente: MTAS (SEPE).

**TABLA 3.43. Evolución de la tasa de pobreza antes y después de transferencias (%)**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pobreza antes de transferencias	38,0	39,0	39,8	43,6	45,4	46,2
Pobreza después de transferencias	23,3	24,5	24,5	26,7	27,7	28,2
Reducción de la pobreza	38,7	37,2	38,4	38,8	39,0	39,0

Fuente: ECV.

GRÁFICO 3.21. Evolución de la tasa de pobreza antes y después de transferencias (%)



Fuente: ECV (INE).

En el caso de España este indicador nos permite una doble lectura. Por un lado, conocer que las prestaciones económicas en España reducen en un 40% la pobreza, ya que esta situación alcanzaría a más de un 46% de la población en 2012 de no ser por las pensiones y las prestaciones de desempleo. Además, la evolución del dato desde 2007 permite comprobar que ese porcentaje se ha mantenido estable, a pesar del fuerte incremento de la pobreza, debido a la expansión del número de prestaciones.

Aún es mayor el efecto preventivo de las prestaciones frente a la pobreza severa. A través de la Encuesta FOESSA comprobamos que las prestaciones consiguieron reducir en 2013 la pobreza severa en

un 82%: sería del 30,4% sin las transferencias sociales y se quedaría finalmente en el 7,3%.

La visibilidad del efecto de las prestaciones en la prevención de la pobreza severa es mayor si analizamos de manera separada las distintas situaciones de exclusión social. Las prestaciones consiguen reducir la pobreza severa en su totalidad dentro de la población integrada y en integración precaria. No obstante, reducen la pobreza severa en un 74% dentro de la población en situación de exclusión moderada y tan solo en una 0,3% en la exclusión severa. De hecho, por la falta de prestaciones en este grupo de población se explica, en parte, la intensidad de la exclusión.

TABLA 3.44. Pobreza severa antes y después de transferencias sociales por grupos, 2013

	Pobreza severa antes de transferencias sociales	Pobreza severa después de transferencias sociales	Porcentaje de reducción
Integración	19,6	0	100
Integración precaria	20,8	0	100
Exclusión moderada	30,6	8	74
Exclusión severa	44,5	43,5	0,3

Fuente: EINSFOESSA 2013.

Sin embargo, una mirada comparada del indicador muestra la debilidad de nuestro sistema de protección respecto a otros países europeos con porcentajes de reducción de la pobreza relativa más elevados (70% en Dinamarca, 66% en Francia, o 60% en Reino Unido, según Laparra y Pérez, 2012). Esta baja capacidad tiene que ver, por un lado, con la cuantía de una parte de las prestaciones que, aunque sean eficaces para superar la pobreza severa, no llegan a situar a la población por encima del umbral del riesgo de pobreza; pero también con la falta de cobertura de muchas situaciones de pobreza a las que no llegan las prestaciones de desempleo por no cumplir los requisitos de contribución previa o haber agotado prestaciones. Como veremos más adelante, cabe prever que en los próximos años se produzca una drástica caída del número de perceptores, por lo que su eficacia frente a la pobreza se verá disminuida aún más.

### 3.5.1.2. Agotamiento del efecto amortiguador de la garantía de ingresos

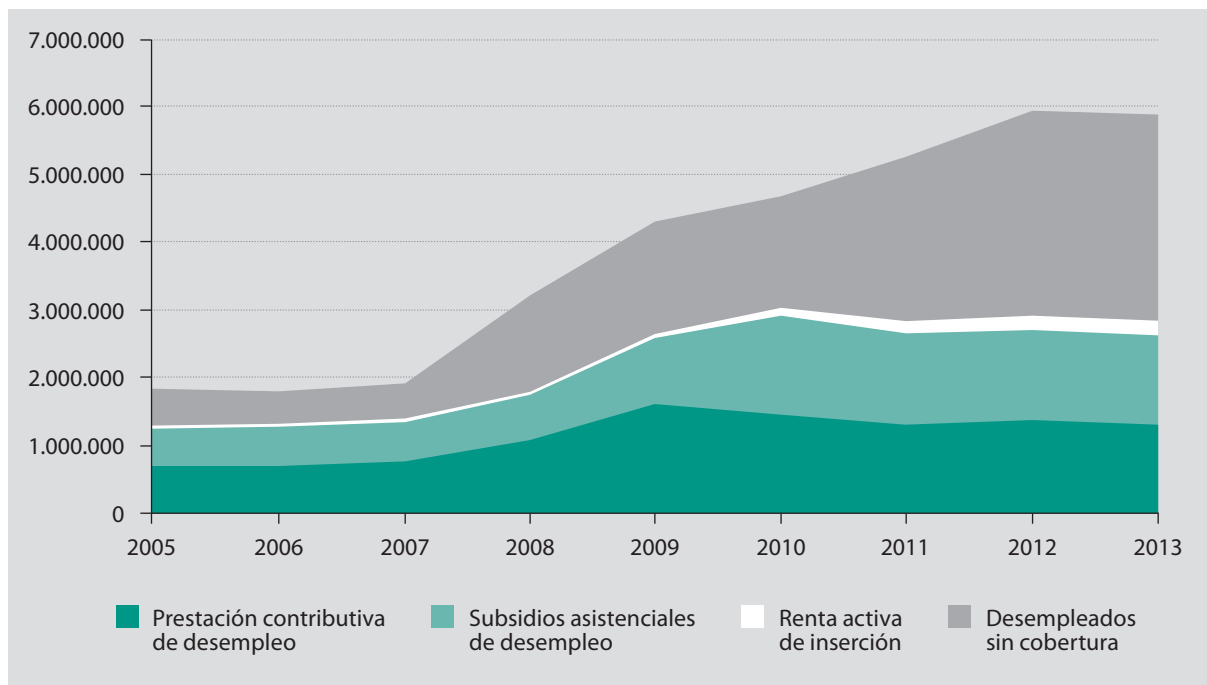
El incremento constante del número de desempleados desde el inicio de la crisis y la duración limitada de las mismas explica por qué, a pesar de la expansión de las prestaciones, el volumen de parados sin cobertura ha ido aumentando. La expansión tanto de las prestaciones contributivas como de los subsidios por igual llevó al esfuerzo máximo de cobertura en 2013 alcanzando a los 3 millones de pensionistas. Sin embargo, el incesante aumento del desempleo y un cierto declive en la cobertura por agotamiento del sistema hizo que en 2013, algo más de la mitad de los desempleados, 3 millones de personas en desempleo, no percibiesen ningún tipo de prestación.

**TABLA 3.45. Evolución del volumen de prestaciones relacionadas con el desempleo, volumen de desempleados (según la EPA) y porcentaje sin cobertura 2005-2013**

	Prestación contributiva desempleo	Subsidio desempleo	Renta activa de inserción	Total perceptores	Total desempleados (EPA)	Desempleados sin cobertura	Sin cobertura (%)
2005	687.033	558.501	49.666	1.295.200	1.841.300	546.100	30
2006	720.384	558.702	51.346	1.330.432	1.810.600	480.168	27
2007	780.205	575.675	65.600	1.421.480	1.927.600	506.120	26
2008	1.100.879	646.186	67.567	1.814.632	3.207.900	1.393.268	43
2009	1.624.792	960.888	95.543	2.681.223	4.326.500	1.645.277	38
2010	1.471.826	1.445.228	125.680	3.042.734	4.696.600	1.653.867	35
2011	1.328.020	1.331.316	186.316	2.845.652	5.273.600	2.427.948	46
2012	1.381.261	1.327.027	233.773	2.942.061	5.965.400	3.023.339	51
2013	1.310.915	1.313.986	240.252	2.865.153	5.896.300	3.031.147	51

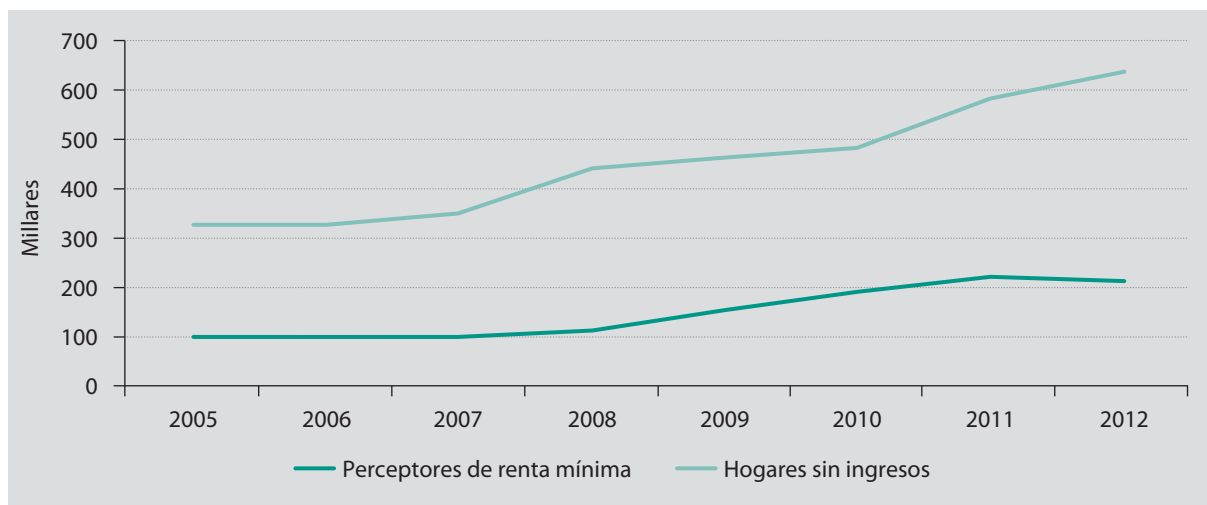
Fuente: MTAS (SEPE), EPA.

**GRÁFICO 3.22. Evolución del volumen de perceptores de prestaciones y desempleados sin ningún tipo de cobertura, 2005-2013**



Fuente: EPA y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

**GRÁFICO 3.23. Evolución del volumen de hogares sin ingresos y perceptores de renta mínima, 2005-2012**



Fuente: EPA y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Como ha sido ampliamente demostrado, las rentas mínimas autonómicas constituyen una red heterogénea y fragmentada de prestaciones que, a excepción del País Vasco, presentaban antes de la crisis una escasa capacidad de cobertura. En estos años tales programas han sufrido cierta expansión debido al fuerte incremento de las situaciones de necesidad. Para aproximarnos a la demanda potencial de este tipo de programas podríamos utilizar el indicador de hogares con todos los activos en paro, que constituye ya 1.832.300 hogares en 2013 según la EPA. O de manera más ajustada, el de hogares sin ningún tipo de ingreso ni por empleo ni por prestaciones. En este último caso se manifiesta también un fuerte incremento del número de hogares en dificultad, sobre todo en la última etapa, desde 2011, coincidiendo con el agotamiento de muchas prestaciones de desempleo. De este modo, la tímida expansión de las rentas mínimas, ya truncada con las políticas de ajuste a partir también de 2011, incrementa aún más la brecha entre necesidades y niveles de cobertura.

Los datos de 2012 muestran un cambio de la tendencia expansiva y, por primera vez desde 2007,

un descenso en la cobertura de las rentas mínimas: tan solo dieron protección a 217.338 frente a los 223.940 del 2011 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Las prestaciones económicas, pensiones o prestaciones de desempleo están presentes en un 60% de los hogares. En el seno del hogar, la falta de ingresos por trabajo se compensa por los ingresos de otras actividades laborales o prestaciones. Tal como consta en la tabla siguiente, en un 12% de los hogares están presentes prestaciones de desempleo y pensiones. Como se ha visto señalado en el apartado anterior, la presencia de pensionistas tiene una importancia significativa en los hogares afectados por el desempleo: en un 22% de estos había una pensión, mejorando significativamente la situación del hogar.

Si analizamos los ingresos anuales medios de cada tipo de hogar, aunque la dispersión interna en cada grupo es muy amplia, sobre todo en lo relativo a ingresos por trabajo, se observa una situación significativamente mejor de aquellos hogares que combinan ingresos por trabajo de diversos miembros, o ingresos por trabajo y prestaciones, respecto a los que solo viven de prestaciones.

**TABLA 3.46. Perceptores de distintos tipos de prestación**

Tipos de prestaciones	Porcentaje
Hogares con pensiones	41,8
Hogares con prestaciones de desempleo	11,9
Hogares con prestaciones para educación (becas, ayuda transporte, comedor,...)	0,3
Hogares con ayudas de servicios sociales (rentas mínimas, ayudas extraordinarias,...)	1,2

Fuente: EINSFOESSA 2013.

**TABLA 3.47. Ingresos medios anuales por distintos tipos de hogar según su fuente de ingresos**

Tipo de ingreso en el hogar	Media de ingresos del hogar (€/ año)
Solo ingresos por prestaciones	12.776
Ingresos del mercado y de prestaciones	23.871
Solo ingresos del mercado	22.483

Fuente: EINSFOESSA 2013.

### 3.5.2. El impacto de la burbuja inmobiliaria en los procesos de exclusión social

La vivienda en propiedad constituye un importante factor de integración. En primera instancia porque cubre la necesidad básica de alojamiento sin gastos y en segundo lugar porque, especialmente en España, implica una estrategia de ahorro y protección. El acceso a la propiedad generalizado ha sido promovido por la facilidad de crédito, la desgravación fiscal, la regulación del suelo, entre otros. Por ello, el incremento desmesurado del precio de un bien básico, utilizado como estrategia de inversión, contribuyó a que ya antes de la crisis muchos hogares sufrieran procesos de exclusión de la vivienda. A su vez, la lógica mercantil que ha marcado el desarrollo de este sector ayuda a entender el escaso desarrollo de una política social de vivienda. La tardía emancipación de los jóvenes en España o las dificultades para hacer frente a los gastos de alquiler o compra de la vivienda ya eran fenómenos presentes en la sociedad española en el periodo anterior a la crisis. El desempleo y el empobrecimiento de los hogares en la crisis ha incrementado los procesos de exclusión relacionados con la vivienda y evidencian la necesidad de una política social que favorezca el acceso a este bien básico.

#### 3.5.2.1. Aumentan significativamente desde 2009 los procesos de exclusión debido a los gastos excesivos de vivienda

En el incremento de los procesos de exclusión social desde 2009 destaca de manera predominante la influencia de la exclusión de la vivienda a través del empobrecimiento de la población con motivo de la incongruencia entre los ingresos y

los gastos de vivienda. En este sentido, se destaca que si en el año 2007 el 4,5% de las personas encuestadas se encontraba por debajo del umbral de pobreza extrema debido a unos gastos excesivos de vivienda y, en el 2009, el 7,6%, los datos referidos al año 2013 revelan un aumento significativo, representado ya el 11,1% de los hogares encuestados; es decir, de más del doble. En el perfil de quienes se encuentran ahogados por los gastos de vivienda, destaca la fuerte presencia de hogares en tal situación de pobreza a raíz de los gastos de vivienda y con alguna persona desempleada, ocupada y/o con menores de edad, estando, dichos hogares, abarcando un espacio mayor dentro de la exclusión severa.

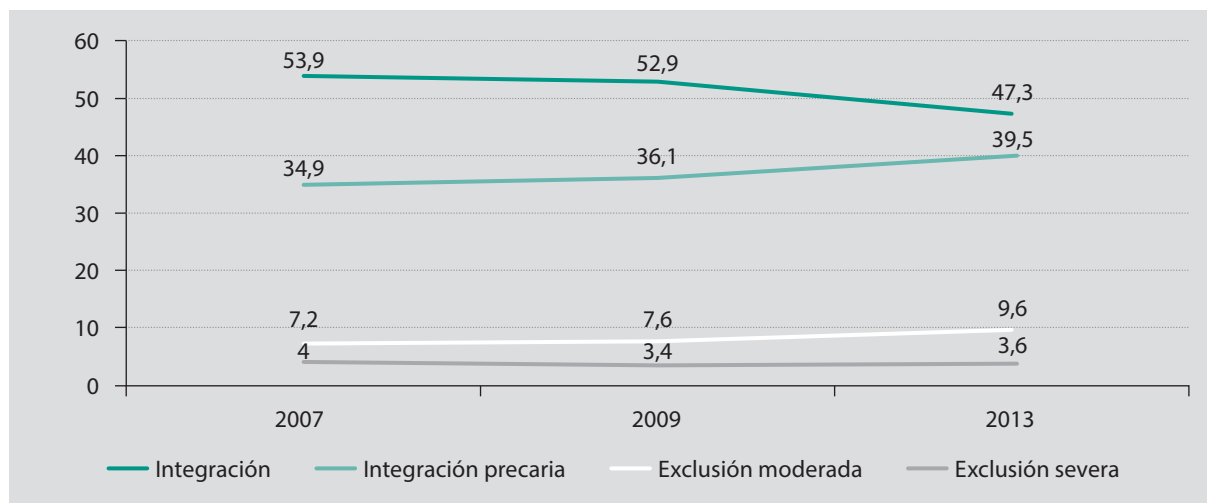
#### 3.5.2.2. La vivienda en propiedad (sin carga hipotecaria) como factor de inclusión

El hecho de contar con una vivienda en propiedad totalmente pagada se muestra como un notable factor de integración en nuestra sociedad. En el pasado año 2013, quienes gozan de una vivienda en propiedad son, fundamentalmente, el grupo de los integrados (47,3%), y esta proporción desciende drásticamente a un 9,6% en la exclusión moderada y un 3,6% en la población excluida severa, que se encuentra también excluida de la vivienda.

El colectivo más frecuente en el régimen de tenencia en propiedad con pagos pendientes es el de la integración precaria (42,2%) precisamente los gastos de vivienda desestabilizan la integración de dichos hogares. En el régimen de tenencia en alquiler, quienes disfrutan del mismo son quienes se ubican también dentro de la integración precaria. El grupo predominante en el alquiler social sigue siendo el de la exclusión severa (39%) seguido del relativo a la integración precaria (38,8%). Todo ello parece indicar que la capacidad del régimen de tenencia en propiedad de absorber estratos sociales inferiores se ha ido



**GRÁFICO 3.24. Evolución del porcentaje de hogares que tiene una vivienda en propiedad totalmente pagada. Subdivisión en función de los intervalos de inclusión, 2007-2013**



Fuente: Elaboración propia a partir de EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

erosionando a raíz de la eclosión de la burbuja inmobiliaria, diluyéndose los mecanismos de acceso al mismo.

### 3.5.2.3. Concentración de las amenazas de expulsión en los hogares con el sustentador principal en desempleo y ubicados en la exclusión severa

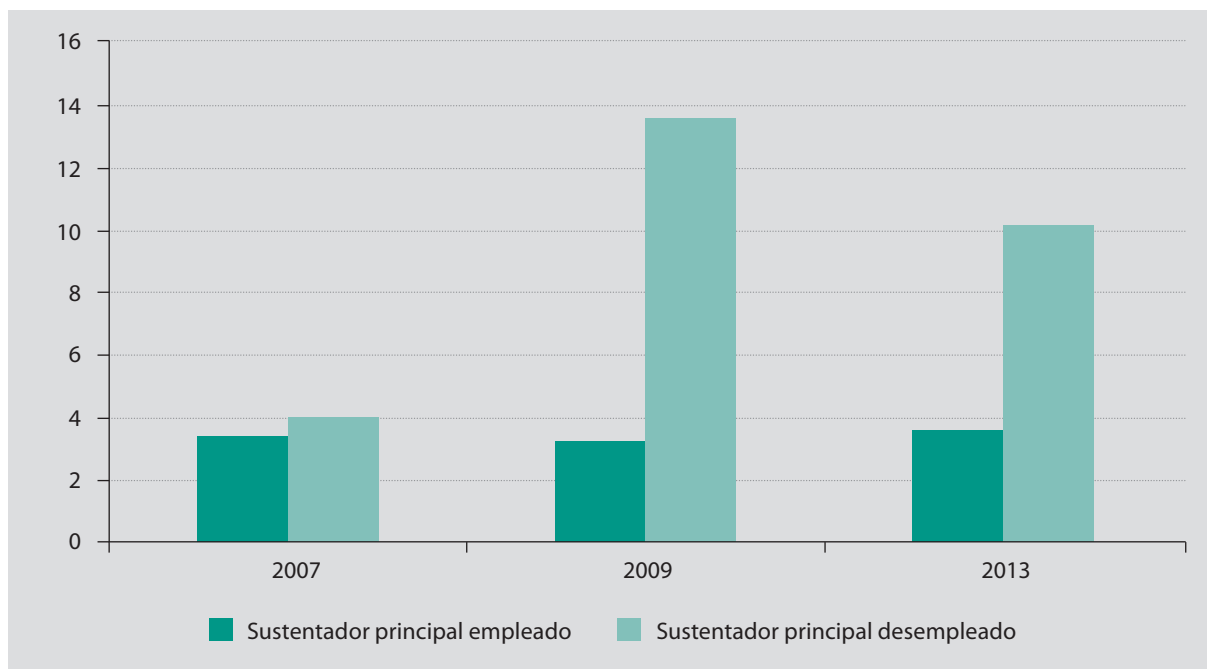
Los resultados de las Encuestas FOESSA 2013 no apuntan hacia un incremento del número de amenazas de expulsión de la vivienda, manteniéndose, el porcentaje de hogares que sufre tales amenazas, invariable en un 3,7%. Quien se encuentra en situación de desempleo afronta obviamente mayores obstáculos para asumir los costes de la vivienda que quien se encuentra trabajando. Sin embargo, debido a que el precio de la vivienda no ha sufrido un descenso acorde al de los salarios, dichas dificultades parecen no afectar en exclusiva a los hogares cuyo sustentador principal se encuentra desempleado, sino

que la imposibilidad de costear dichos gastos se presenta también como una realidad para quienes detentan un empleo. Esta condición de vulnerabilidad se refleja en el hecho de que, en el año 2013, el 20,7% de quienes trabajan y el 46,6% de quienes se encuentran buscando empleo tienen complicaciones a la hora de asumir dichos gastos para el mantenimiento de la vivienda.

Pero más que al desempleo, las amenazas de expulsión de la vivienda están fuertemente asociados a los procesos de exclusión en su conjunto, como puede verse en el gráfico 3.26, hasta tal punto en estos seis años, la inseguridad para el mantenimiento de la vivienda se ha configurado como una característica diferencial de los hogares en exclusión severa, un riesgo prácticamente ausente en el espacio de la integración social.

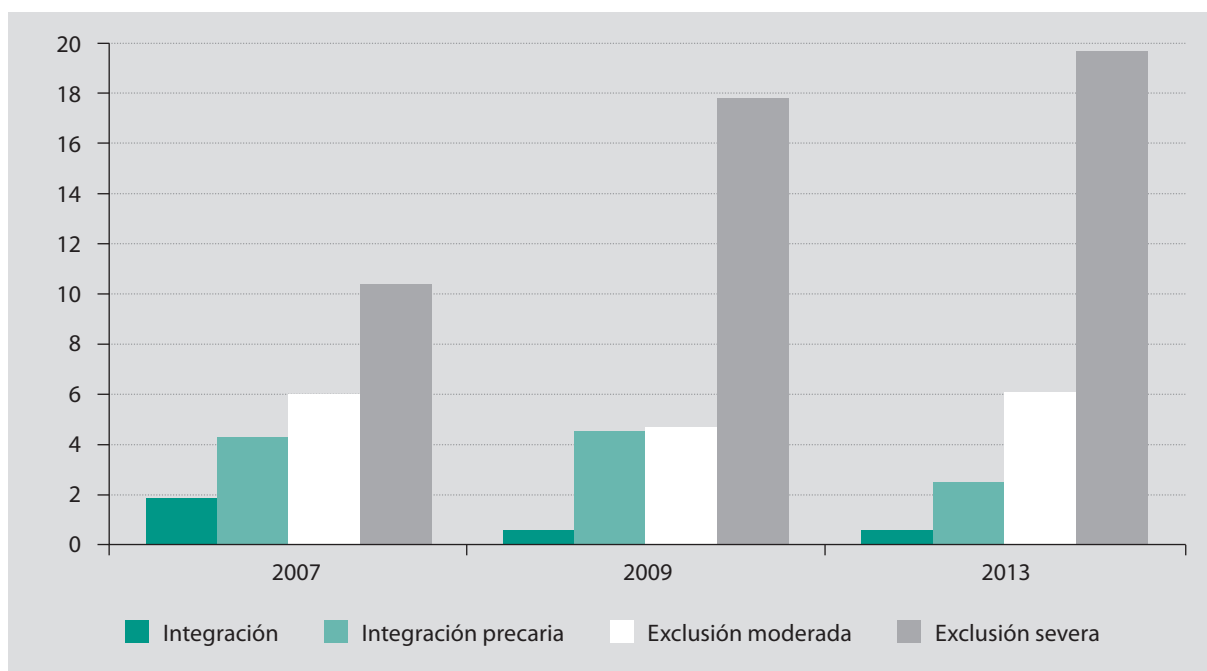
La amenaza por desahucio no supone necesariamente la ubicación dentro del espacio de la exclusión, pero existe una correlación positiva entre ambas variables. Por su parte, el brusco in-

**GRÁFICO 3.25. Evolución de las amenazas de expulsión por desahucio en función de la ocupación del sustentador principal, 2007-2013**



Fuente: Elaboración propia a partir de EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

**GRÁFICO 3.26. Evolución de los hogares que sufren amenazas de expulsión de su vivienda en función de los intervalos de exclusión, 2007-2013**



Fuente: Elaboración propia a partir de EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

crecimiento del número de amenazas de expulsión entre la población que sufre de exclusión severa así como el descenso de dichas amenazas dentro del ámbito de la integración y la integración precaria tiene su explicación tanto en motivos económicos como en la modificación del volumen de cada ámbito de integración.

#### 3.5.2.4. La privación como resultado de asumir los costes de vivienda

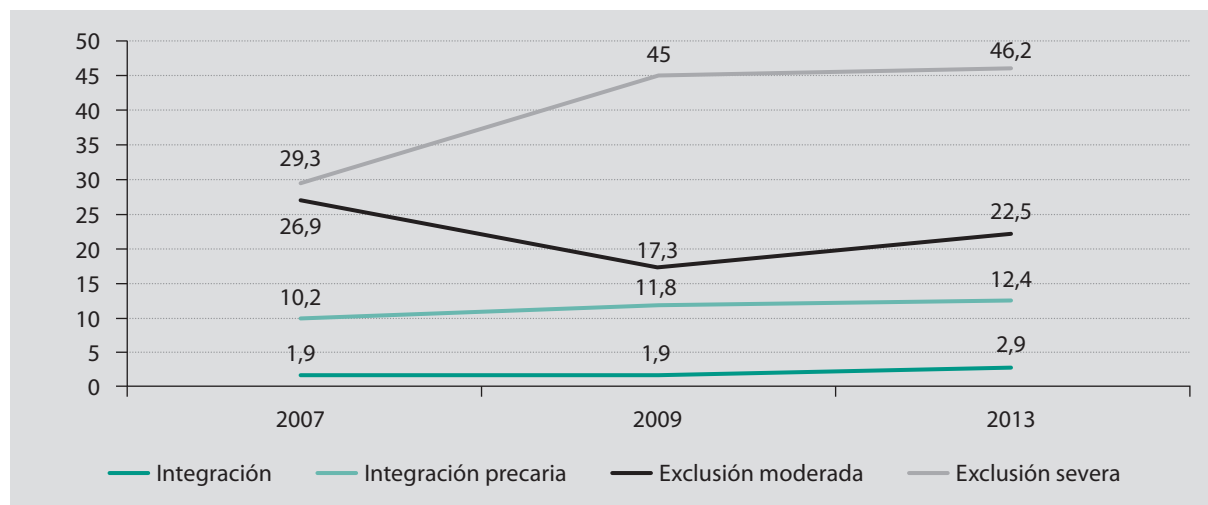
La vulnerabilidad de los hogares se ha incrementado también a la hora de asegurar los suministros básicos de la vivienda. Las personas que han tenido avisos de corte de luz, agua o teléfono han pasado de ser el 9,1% en el año 2007 al 13,2% en 2013. Al mismo tiempo que dicho dato, ha de valorarse el incremento de aquellos hogares que tratan de evitar tal situación límite a través de la reducción de los gastos fijos de la casa (electricidad, agua, calefacción...); es decir, a partir del desarrollo de estrategias de privación a nivel de suministros. Así pues, quienes trataban de ahorrar

en este apartado han pasado de ser el 36,6% de los hogares en 2007 al 51,5% en 2013.

Un análisis más detallado revela la existencia de una relación de proporcionalidad directa entre quienes se encuentran en una situación cercana a la exclusión social y quienes aplican mayores estrategias de reducción del gasto en materia de vivienda, o, en su defecto, entre quienes perciben las consecuencias de la imposibilidad de asumir dichos costos.

Destaca el incremento del riesgo de perder los suministros básicos del hogar que se produce en el espacio de la exclusión severa ya que, si en 2007 recibían tales avisos el 29,3% de los hogares, en 2013 pasan a hacerlo el 46,2%. El ámbito de la integración experimenta también un ligero incremento sufrido en los últimos años pero muy significativo. La mejora en este aspecto de las situaciones de exclusión moderada hay que relacionarlas con la reducción de gastos en este aspecto, aun a costa de no conseguir un estándar apropiado, como vemos a continuación.

**GRÁFICO 3.27. Evolución de los avisos de cortes de luz, agua o teléfono en los diferentes ámbitos de integración, 2007-2013**



Fuente: Elaboración propia a partir de EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

La reducción de los gastos básicos de vivienda, tales como electricidad, agua o calefacción, es una estrategia bastante universal. Cuanto menor integración, mayor necesidad de aplicar estrategias de racionalización del gasto. En estos años en el ámbito de la integración han pasado del 20,3% al 36,4% los hogares que desarrollaban esta estrategia. En la integración precaria han pasado del 42,3% al 53,5%; en la exclusión moderada del 57,4% al 68,2%, y en la exclusión severa del 76% al 80,1%. Dentro de esta misma estrategia, cabe distinguir los casos en los que se trata de una racionalización del gasto (bienvenida incluso desde una perspectiva ecológica) en un contexto de aumento del precio de la energía, especialmente asociados al espacio de la integración, y los casos en los que implica una situación de privación a la hora de satisfacer una necesidad básica.

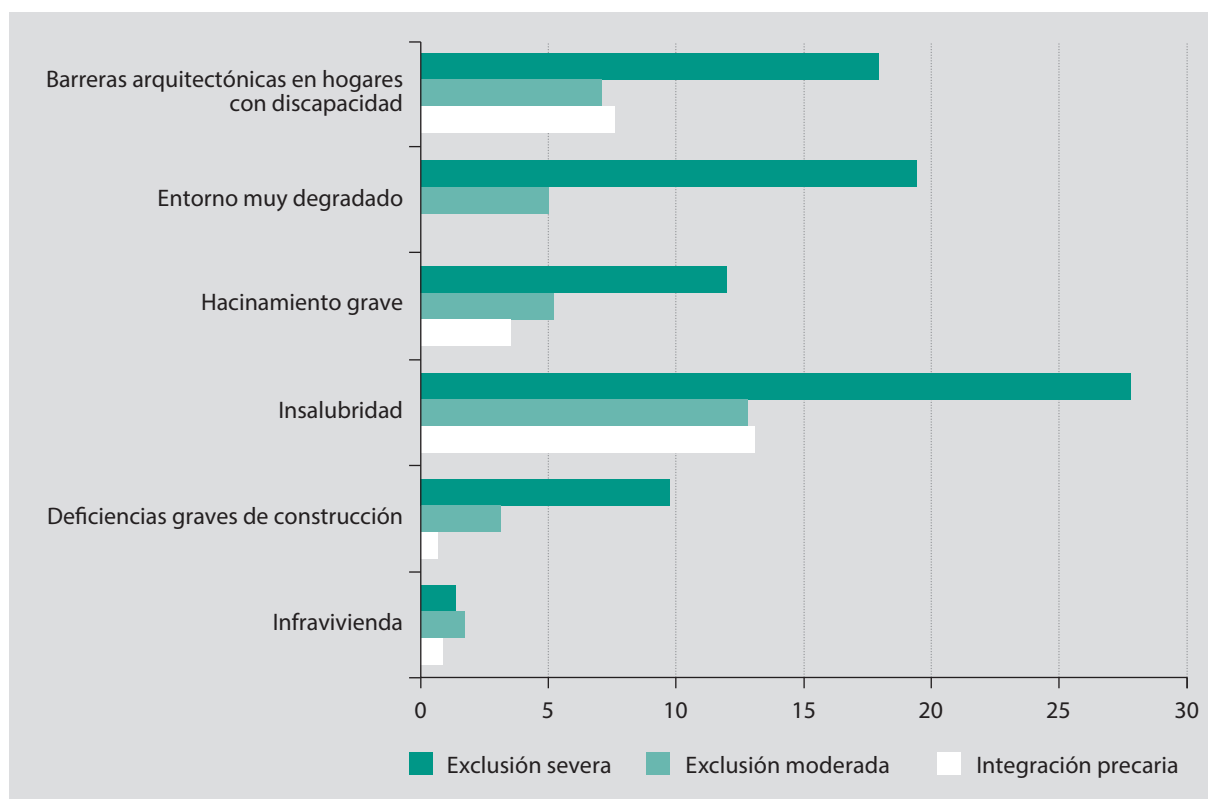
La pobreza energética se aprecia, en el 2013, en más de un quinto de los hogares entrevistados (21,5%), si la asociamos a aquellos que no podían soportar el coste de mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Al valorar dicho dato en función de la situación económica de los hogares, se aprecia que la no ubicación de los mismos dentro de la pobreza no es suficiente para librarse de la aplicación de tal estrategia de privación, ya que el 17,2% de los hogares no pobres no puede hacer frente al costo de mantener la vivienda a una temperatura adecuada. No obstante, el

impacto aumenta cuanto mayor es la carencia de recursos; no pudiendo afrontar tales gastos el 34,5% de quienes se encuentran dentro de la pobreza moderada y el 46,8% de quienes están dentro de la pobreza severa.

### **3.5.2.5. El deterioro de la vivienda y su entorno como reflejo de los procesos de exclusión social**

Aunque el parque de viviendas está muy renovado después de la enorme inversión realizada en este ámbito, las condiciones estructurales de la vivienda también empeoran en ciertos sectores. Se percibe un incremento en lo referente a la existencia de deficiencias graves en la construcción (pasa del 1,3% al 1,6%), de condiciones de insalubridad tales como humedades, suciedades y olores (del 7,4% al 9,6%), de barreras arquitectónicas (del 2,7% al 5,7%) y, especialmente, de la residencia en un entorno muy degradado (del 0,6% al 2,4%). El impacto de la crisis sobre las condiciones de habitabilidad de los hogares es también muy diferente entre los grupos sociales, obligando a dirigir la mirada hacia aquellos sectores más cercanos al espacio de la exclusión también en este ámbito. Estos problemas, por la propia definición operativa que hemos utilizado, no se encuentran presentes en los hogares plenamente integrados.

**GRÁFICO 3.28. Problemas en relación con las condiciones de habitabilidad de la vivienda y su entorno, en función de intervalos de integración, 2013**



Fuente: Elaboración propia a partir de EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

### 3.5.3. La respuesta de la sanidad pública a la pérdida de salud física y mental de la población

#### 3.5.3.1. El aumento de la exclusión social conlleva un aumento de los problemas de salud física y salud mental

La relación entre exclusión social y salud es estrecha y bidireccional. Las condiciones de vida determinan la salud física de los individuos, de tal forma que el desempleo, la pobreza y las privaciones inciden negativamente en la salud física y mental

de quienes las padecen. Por otro lado, la presencia de estos problemas de salud puede constituir un fuerte obstáculo para la integración social y laboral, dependiendo de la red de apoyos y del acceso a servicios sociosanitarios que pueda haber.

Con los datos de la encuesta comprobamos que el estado de salud de la población es peor conforme se intensifican los procesos de exclusión social, tal como se observa en la tabla de la página siguiente.

El aumento del desempleo y la pobreza están empeorando, paulatinamente, las condiciones de vida de la población. Algunos datos resultan especialmente dramáticos. Desde 2007 se ha duplicado el volumen de personas que declaran haber pasado hambre en algún momento, que ha aumentado del 2% en 2007 al 4,5% en 2013.

**TABLA 3.48. Proporción de hogares que manifiestan que su salud es mala o regular en función de su nivel de integración**

	Integración	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa
Regular	21,8	21	23	19
Mala	4,7	7,2	7,9	9,9
Francamente mala	1,6	4,4	4,1	6,8

Fuente: EINSFOESSA 2013.

Significativo resulta también el porcentaje de hogares en los que en 2013 existe un problema de depresión u otro trastorno de salud mental que asciende a un 10,7% del total. Como cabía prever, la falta de salud mental es mayor en las situaciones de exclusión más intensas. Prácticamente en uno de cada cinco hogares excluidos hay depresión o problemas de salud mental, mientras que en los hogares plenamente integrados, la incidencia es del 6%.

### 3.5.3.2. Las políticas de austeridad comienzan a erosionar la eficacia del sistema sanitario

A pesar de la crisis la gran mayoría de la población sigue teniendo acceso a la atención sanitaria, independientemente de su situación laboral y de ingresos, y hace uso de ella frecuentemente.

En 2013, un 30% de la población utilizó la sanidad en el último mes, hasta un 64% en los últimos 6 meses y alcanza un 80% en el último año. Sin embargo, las dificultades económicas de los hogares pueden afectar a su acceso a la sanidad, un 4,3% de los hogares excluidos manifiestan requerir atención médica y no acudir al médico por no poder pagar el desplazamiento. Lo que puede ser más grave en el caso de hogares con

enfermos, un 1% de los hogares no acudió al médico en el último años (se produce un incremento desde su cifra de 0,1 en 2009).

Debido al comienzo de la aplicación en varias CC.AA. de la reforma sanitaria de 2012, en 2013 aparece de nuevo población sin cobertura sanitaria. Esta situación afecta al 0,5% de los hogares, en relación con la inexistencia de este fenómeno en 2009.

Aunque quizá la evidencia más dramática del impacto de la crisis en la salud constituye el fuerte aumento de población que no puede comprar medicamentos debido a sus bajos ingresos y el incremento del copago, cabe prever el efecto negativo que este abandono de la medicación pueda tener en el medio o largo plazo en la salud de quienes necesitan estos medicamentos. La población afectada por este tipo de privación pasaba del 5,4% en 2007 al 7% en 2009, pero se disparaba hasta el 15,8% en 2013.

Comprobamos que el efecto de la austeridad traducida en listas de espera, aumento del copago farmacéutico o recorte de ayudas a la dependencia tiene un impacto especialmente intenso en la población excluida. En concreto, en lo concerniente a la pérdida del derecho a la atención sanitaria gratuita y las dificultades para seguir pagando medicamentos.

**TABLA 3.49. Hogares que sufren el impacto de los recortes por nivel integración, 2013**

	Hogares integrados	Hogares excluidos
Ha dejado de comprar medicamentos o de seguir tratamiento por no poder pagarlo	1,7	10,2
Ha dejado de tener tarjeta sanitaria	0,2	2
Ha dejado de percibir ayuda a la dependencia	0,7	3,1
Ha requerido atención médica y no ha acudido al médico por estar en lista de espera	2,6	5,1

Fuente: EINSFOESSA 2013.

### 3.5.4. Los recortes en educación podrían aumentar la fractura social en el futuro

Por el momento la crisis económica no ha tenido reflejo negativo en los indicadores más básicos de acceso a la educación. Es decir, el derecho a la educación obligatoria en España sigue manteniendo el nivel de escolarización previo a la crisis. Incluso han mejorado algunos indicadores educativos que nos distancian de Europa como la tasa de abandono escolar temprano, que descendió de un 28,4% en 2010 a un 24,9% en 2012. Este descenso no viene explicado por transformaciones del propio sistema sino precisamente por la coyuntura laboral negativa que

ha llevado a más jóvenes a mantenerse en el sistema educativo por más tiempo. A pesar de todo, la cifra sigue estando muy por debajo de la media europea que se situaba en el 14,5% en 2012 (Eurostat).

En este caso, el impacto del aumento de los procesos de exclusión educativa se relaciona con el empeoramiento de las condiciones de vida de los hogares en los que viven las personas en edad escolar y como esto puede afectar a su rendimiento, su manutención, los gastos de transporte y en última instancia su continuidad y paso hacia estudios postobligatorios no financiados en su totalidad.

La Encuesta FOESSA 2013 nos permite evidenciar el impacto de algunos de estos recortes y cómo estos afectan en mayor medida a los hogares en situación de exclusión.

**TABLA 3.50. Hogares que manifiestan que la crisis y los recortes han afectado a su proceso educativo, 2013**

	Total hogares	Hogares integrados	Hogares excluidos
Abandono del proceso educativo	0,7	0,4	2,1
Ha abandonado estudios universitarios	0,4	0,2	0,9
Ha dejado de utilizar comedor escolar por no poder pagarlo	0,9	0,7	1,4

Fuente: EINSFOESSA 2013.

Un 0,7% de los hogares manifiestan haber tenido que abandonar el proceso educativo, esta proporción dentro de la exclusión social alcanza al 2%, el mismo incremento se produce en hogares que han debido abandonar estudios universitarios o dejar de utilizar el comedor escolar.

En el corto y medio plazo, estas dificultades de financiación de estudios postobligatorios pueden intensificar los procesos de fractura social. Tal como muestran los datos, existe una manifiesta relación entre nivel educativo e intensidad de la exclusión. Cuanto mayor es el nivel de estudios de las personas, menores son las posibilidades de sufrir procesos de exclusión social.

En este caso la explicación es compleja. Podemos entender que la cualificación de las personas

principales del hogar facilita la inserción laboral y, por tanto, previene el desempleo continuado y la pérdida de integración. A su vez, desde una perspectiva analítica que atienda la lógica reproductiva de las clases sociales, podemos entender que nacer en un hogar integrado ayuda a alcanzar un elevado nivel de estudios y favorece la inserción laboral, es decir, contribuye a mantener el nivel de integración de origen. En el otro extremo, los/as jóvenes de hogares excluidos alcanzan generalmente un menor nivel formativo, debido a sus dificultades de acceso los estudios postobligatorios, por el precio de las tasas, transporte y su propia subsistencia o la de su familia en el periodo de estudios. Por ello, sus posibilidades de reproducir realidades de desigualdad y exclusión son mayores. De este modo, el efecto del encarecimiento de tasas de estudios postobligatorios y el recorte

**TABLA 3.51. Nivel de estudios de la población en función del nivel de integración, 2013**

	Integrado	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Total
<b>Total población</b>					
Ni lee ni escribe	2,5	0,1	3,2	3,8	7,1
No completa secundaria	26,5	24,1	27,0	27,5	32,6
Secundaria obligatoria	31,9	28,4	32,1	35,9	40,9
Secundaria postobligatoria	25,8	28,6	26,2	25,3	13,5
Estudios superiores	13,3	18,8	11,6	7,4	6,0
<b>Población de 25 a 44 años</b>					
Ni lee ni escribe	0,1	0,1	0,3	1,0	0,3
No completa secundaria	2,3	8,6	13,6	29,2	9,9
Secundaria obligatoria	25,0	35,5	40,7	45,2	34,2
Secundaria postobligatoria	43,3	39,0	35,7	19,4	37,5
Estudios superiores	29,2	16,9	9,6	5,2	18,2
<b>Población de 45 a 64 años</b>					
Ni lee ni escribe	0,1	0,7	2,0	7,9	1,3
No completa secundaria	13,3	24,2	28,3	37,2	22,0
Secundaria obligatoria	35,6	39,1	42,9	39,0	38,3
Secundaria postobligatoria	30,7	25,8	20,2	10,1	25,4
Estudios superiores	20,3	10,2	6,5	5,8	13,0

Fuente: EINSFOESSA 2013.



en las becas contribuirían claramente a intensificar estos procesos y la distancia entre clases sociales en el medio y largo plazo.

Respecto a la cualificación destinada a las personas desempleadas, su limitación no solo en cobertura sino en eficacia ha ido aumentando de manera paralela a la intensidad del fenómeno del desempleo en España. En 2013 ascendía a un 31,5% el porcentaje de hogares con personas en desempleo que no han recibido formación ocupacional en el último año, el doble que la proporción en 2007 (16,2%).

### 3.5.5. Se incrementa la atención de los servicios sociales a la población excluida

El impacto de la crisis en las condiciones de vida de la población ha supuesto un fuerte aumento y transformación en el perfil de la demanda de los servicios sociales de atención primaria. Las familias sin ingresos y con problemas de vivienda se unen a la ya heterogénea población atendida por servicios sociales.

Esta nueva demanda supone un reto para una red de servicios ya saturada antes de la crisis por sus funciones de información y orientación al conjunto de la ciudadanía, sus programas específicos y, sobre todo, por el incremento de población dependiente.

El volumen de población que acudió en 2013 a servicios sociales en busca de ayuda constituye el 7,6% del total, mientras que el 6,3% acudió a Cáritas, y el 4,6% a otras entidades sociales.

El aumento de los procesos de exclusión ha reorientado la atención de los servicios sociales hacia la población más excluida. En 2007, tan solo un 9% de la población en situación de exclusión severa había acudido en alguna ocasión a los servicios sociales locales. Sin embargo, en 2013, el 30% de estos hogares acudió en busca de ayuda (solicitud de rentas mínimas, ayudas de emergencia, apoyo, orientación y otros), tal como puede verse en la tabla siguiente. La lectura negativa del mismo dato nos lleva a entender que el 70% de la población en situación de exclusión severa no acudió a servicios sociales en 2013.

**TABLA 3.52. Población atendida por distintos servicios en 2013**

	Acude	No acude
Servicios sociales municipales	7,6	92,4
Cáritas	6,3	93,7
Otras entidades	4,6	95,4

Fuente: EINSFOESSA 2013.

**TABLA 3.53. Proporción de personas que acuden a los distintos servicios en función de su situación de integración, 2013 (%/total de cada espacio de integración)**

	Acude a servicios sociales locales	Acude a Cáritas	Acude a otras entidades
Integración	1,6	0,8	0,5
Integración precaria	5,9	4,2	2,7
Exclusión moderada	14,5	11,5	7,9
Exclusión severa	30	31,9	26

Fuente: EINSFOESSA 2013.

Si atendemos al conjunto de la población atendida por los servicios sociales municipales observamos cómo el 7,9% lo constituye población en situación de integración, el 32% en integración precaria, el 25% población en exclusión moderada y el 34,9% en exclusión severa. El perfil de la demanda de Cáritas lo componen el 4,5% de población integrada, el 27% integración precaria, el 23,8% exclusión moderada y el 44% exclusión severa.

En cuanto a la combinación de recursos como estrategia, tan solo el 20% de los hogares acuden a ambos tipos de servicios (municipales y de la red social). Preocupa más el 50,4% de la población en situación de exclusión que no acude a ninguna de las dos redes.

En resumen, el mantenimiento y el refuerzo de las políticas sociales tienen un demostrado efecto preventivo frente al deterioro de la situación social de las personas afectadas por el desempleo y la falta de ingresos. Por el contrario, la limitación de las mismas en un contexto como el actual puede conllevar un grave efecto multiplicador de los riesgos.

A través de los resultados ofrecidos, hemos comprobado el importante efecto que los sistemas de protección social ejercen frente a la exclusión social. La protección social en sí misma previene las situaciones de pobreza y exclusión severa, como es el caso de las prestaciones económicas de desempleo o rentas mínimas o la atención sanitaria. Sin embargo, en el caso de España, ya antes de la crisis se presentaban fuertes limitaciones para garantizar la superación de las situaciones de exclusión y pobreza. Los límites de la protección frente al desempleo, la ausencia de una política social de vivienda o los costes de la educación postobligatoria son evidencia de ello. En este caso la acción de los sistemas de protección social refuerzan los lazos de las redes familiares más integradoras a través de garantizar la continuidad en sistema educativo, la combinación de prestaciones e ingresos dentro del hogar para prevenir los procesos de exclusión residencial o la disponibilidad de ingresos para hacer frente al coste de los medicamentos, evidenciando una menor eficacia con los hogares más vulnerables. A su vez, el impacto de la aplicación de las políticas de austeridad (aumento del copago, tasas universitarias) puede incrementar la brecha social generada por el mercado de trabajo.

### 3.6. Conclusiones

En el informe anterior tratábamos de dar cuenta de «El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España», basándonos en la comparación

de las dos Encuestas FOESSA disponibles entonces (EINSFOESSA 2007 y EINSFOESSA 2009). Se señalaba en dicho informe la preocupación por

la extensión de la vulnerabilidad y la precariedad social en España, y se alertaba del riesgo de que esta dinámica acabase erosionando la cohesión social. El espacio social de la exclusión comenzaba a crecer ya, pero no tanto en sus formas más severas.

Puede concluirse hoy, a la luz de los datos que aporta esta nueva edición de la EINSFOESSA en 2013, que ha quedado plenamente constatado el enorme deterioro que la cohesión social está experimentando en nuestro país durante los últimos siete años, con un incremento notable de los procesos de exclusión social, que se hacen además más graves, y con una expansión significativa también de las situaciones de precariedad y vulnerabilidad social.

*De la extensión de la precariedad social que trajo consigo en un primer momento la destrucción de empleo hemos pasado a la intensificación de los procesos de exclusión: la exclusión severa se ha incrementado en un 82,6% y afecta ya a 5 millones de personas en España. Esta evolución pone sobre la mesa un riesgo real de dualización de la sociedad española, lo que sin duda tendrá efectos en el propio modelo económico, en la vida política e institucional y en suma en el modelo de convivencia. Desde la perspectiva de las políticas sociales, una sociedad más fragmentada supone un contexto de mayor dificultad para la intervención social, en el que los itinerarios de incorporación son mucho más improbables, más complicados y más costosos.*

Se planteaba en las conclusiones del informe anterior hace cuatro años la necesidad de preservar el capital humano y «rescatar a las personas». Esta estrategia no se puso en marcha seriamente. Hoy se nos muestra ya totalmente insuficiente: ahora es necesario *recuperar el capital humano que hemos destruido*. El deterioro en la situación económica y social de muchos hogares está afectando ya claramente a su propia salud, a la calidad de la

vivienda y de su entorno. No solo es la economía de los hogares lo que ha empeorado (el empleo o los ingresos), el deterioro social se extiende a otros ámbitos como la vivienda o la salud, y con todo ello, la empleabilidad, las potencialidades de las personas para salir adelante. La subutilización del capital humano durante la fase temprana de la crisis está derivando en su destrucción, lo que está teniendo una repercusión en el plano del desarrollo personal y progreso social y repercutirá también a futuro en el plano económico-productivo. Ese es el mayor capital social que se está destruyendo y que tendría que recuperarse en el futuro.

Sin entrar aquí en el debate económico de si estamos ya o no en una nueva fase expansiva del ciclo, algo que no corresponde a las conclusiones de este capítulo, lo que sí tenemos que constatar es que *no hay síntomas de que la tendencia al empeoramiento se haya detenido en cuanto a los problemas sociales*. No sabemos cuánto tiempo tardará el crecimiento económico en producir por sí mismo una mejora de la situación de los hogares más afectados por la crisis, que parten ahora de una posición de desventaja y cuya recuperación será más lenta (y si llegará a producirse ciertamente dependerá entre otras cosas del modelo de crecimiento). Tampoco hay anunciadas medidas políticas, a ninguno de los niveles administrativos, de suficiente envergadura como para que tengan incidencia en los problemas sociales que hemos señalado aquí.

Pero además, incluso la recuperación del empleo, si llega, puede ser insuficiente. Hemos encontrado que cada vez menos el acceso al empleo garantiza la integración social: la tasa de exclusión social entre los trabajadores ha ascendido hasta el 15,1% y hasta los empleos de exclusión de la economía sumergida, que no están creciendo, son cada vez una alternativa más inaccesible para un volumen creciente de personas excluidas. A pesar de la utilidad social y de la funcionalidad

económica del trabajo que realizan, las personas excluidas reciben una escasa compensación por su aportación al conjunto de la sociedad.

En el esfuerzo por cuantificar la evolución de la exclusión social, hemos aportado una estimación de la incidencia que tiene tanto en los hogares como en los individuos. Plantear el análisis de la exclusión social en términos de hogares tiene sentido pues es una unidad de consumo, de redistribución interna de los recursos, de producción de solidaridades y apoyos, y también una unidad habitual para la provisión de las políticas sociales y la intervención social sobre el terreno. Pero el hogar no es una unidad homogénea y el individuo sí lo es. Si en términos de hogares el aumento de la exclusión social es importante, lo es más en términos de personas, ya que son justamente las familias de mayor tamaño las que más afectadas se han visto, familias excluidas en las que hay muchos niños y muchos jóvenes.

Insistimos en esta conclusión en la gravedad de la situación que se está generando en cuanto a la exclusión social de la infancia y en relación con la situación de los jóvenes, espacialmente en los casos en los que están en hogares monoparentales donde la situación se agrava: su exclusión social se ha triplicado. En ambos casos estamos ante un grave riesgo de dilapidar un importante capital humano para las próximas décadas, contribuyendo a una cronificación generacional de las situaciones de exclusión social en el futuro que actuaría como un mecanismo para su reproducción ampliada.

Pero, especialmente para los jóvenes, es importante considerar el impacto que tienen las privaciones y las tensiones que genera la exclusión social en un momento muy especial del ciclo vital: cuando se construyen los hogares y se tienen los hijos, cuando se asientan las carreras profesionales y se tejen las redes sociales. Sabemos que, para las personas que se incorporan al mercado de trabajo en un periodo de crisis, la huella generacional perdura

por mucho tiempo y, en ciertos casos, no llega a recuperarse nunca. Los niños que no se tuvieron ya no se tienen, las inversiones que no se hicieron (vivienda, equipamiento, formación, experiencias, contactos,...) quedan pendientes, los proyectos vitales se transforman y a veces se rompen. Esta crisis, por su intensidad y su duración, deja una profunda huella generacional. Quizá sea excesivo el término mediático de una «generación perdida», pero sin adoptarlo, queremos insistir en la necesidad de construir un futuro para nuestros jóvenes, de evitar que prosiga esta sangría y de ofrecerles las oportunidades que en estos años no han tenido. Es especialmente necesario considerar que, tanto en la dimensión social como económica, la crisis proyectará su huella hacia el futuro: en cierto sentido, podemos hablar de *una generación hipotecada*. Y dado el proceso de estructuración social dualizado, sus efectos se dejarán notar con mayor virulencia en los cuerpos sociales más frágiles entre los que se encuentran los y las jóvenes de hoy.

La evidencia empírica muestra la importancia de la educación como mecanismo preventivo de los procesos de exclusión social y justamente es en la infancia y en la juventud cuando tiene sentido invertir preferentemente en educación y en formación: la situación de uno de cada tres jóvenes entre 16 y 34 años que ha dejado ya el sistema educativo y no tiene un empleo debería ser considerada prioritaria en este sentido.

De la misma forma, la incidencia diferencial que los procesos de exclusión están teniendo en los distintos grupos étnicos ha puesto en el punto de mira el modelo de integración para las minorías étnicas en nuestro país, un modelo que se había llegado a poner como ejemplo frente a otras realidades más penosas en Europa, tanto respecto a la población extranjera como a la propia comunidad gitana española. Ahora el modelo de integración de la población extranjera ha mostrado la vulnerabilidad del empleo precario y de baja cualificación sobre el que se asentaba y se ha

tambaleado también al cuestionarse la universalidad de ciertas políticas públicas. En el caso de la comunidad gitana, además, se ha evidenciado la inviabilidad de una verdadera integración social al margen del sistema educativo y del mercado de trabajo normalizado. En suma, vemos cómo se van erosionando significativamente importantes logros del periodo precedente en este aspecto. La creciente asociación de los procesos de exclusión social con la diferencia étnica (tres de cada diez personas excluidas pertenecen a minorías étnicas, una más que en 2007) implica también una mayor dificultad para construir procesos de integración en el futuro.

El análisis territorial de la exclusión social nos muestra un mapa muy distinto de aquel que se deduce de la producción y la distribución de la riqueza: no son siempre los territorios más ricos los que mayores niveles de integración social alcanzan y hay diferencias sustanciales en la incidencia de la exclusión social en territorios con niveles de riqueza similares. Este desajuste nos abre toda una agenda de investigación para conocer mejor las diferencias territoriales en el modelo de integración social y entender el papel que en cada caso ocupan los factores que lo explican: el desarrollo de ciertas políticas públicas o de otros factores estructurales, sean económicos sociales o demográficos. Este análisis comparado debería ser de gran ayuda para orientar las decisiones en materia de política social y para hacer más efectiva la propia intervención social.

Como elemento positivo, cabe resaltar también que no aparecen en este análisis indicios de que el capital social y relacional se esté viendo afectado todavía por el deterioro tan significativo que hemos visto en otros ámbitos, como el económico, el de la salud o la vivienda.

La sociedad en su conjunto, hasta cierto punto, ha reaccionado. Se han desarrollado los mecanismos de ayuda informal (ayuda mutua y multidireccio-

nal, preferentemente en el ámbito familiar, pero extendiéndose también a las redes de amistad y del vecindario). Las entidades sociales, a pesar de la notable reducción de las subvenciones públicas, han hecho un gran esfuerzo en captar nuevas donaciones y más voluntariado (la sociedad, que mantiene su confianza en estas instituciones, ha respondido razonablemente a la llamada) y han reorientado sus prioridades para dar cobertura a las demandas más básicas que les llegaban de los sectores más intensamente afectados por esta crisis social. La ciudadanía se ha movilizó también en la protesta y la denuncia social, en la calle, en los medios de comunicación, en el entorno inmediato. No se puede hablar de falta de sensibilidad o de despreocupación.

Esta constatación nos muestra un elemento de oportunidad: todavía se está a tiempo para una reacción colectiva que invierta estas tendencias hacia la fractura social en un nuevo marco en el que la respuesta a la crisis se construya de una forma más solidaria.

Pero es necesario tener presente que en determinados sectores de la exclusión social hay personas sin estas redes, más aisladas socialmente o donde las personas cercanas no pueden ayudarles, lo que supone un factor añadido de vulnerabilidad. Además, en amplios sectores precarizados son manifiestos los síntomas de extenuación que presenta ya la institución familiar para compensar las nuevas necesidades, lo que hace prever que se va a debilitar la capacidad de protección de esta en el futuro. Ambos hechos, la falta de apoyos en unos casos y el agotamiento de los existentes en otros, pone de manifiesto una vez más que las políticas públicas son insustituibles para preservar la cohesión social.

Y la cuestión esencial es que quienes no han estado a la altura de las circunstancias han sido justamente las políticas públicas, que han permanecido impermeables a la demanda ciudadana. Las

medidas puestas en marcha han sido insuficientes, ineficaces o inadecuadas. El sistema de garantía de rentas (especialmente las prestaciones por desempleo) en su lógica de estabilizador automático, ha reducido notablemente el impacto de la destrucción de empleo en el aumento de la pobreza y la exclusión social, especialmente en el corto plazo. También los pensionistas están aliviando, con su aportación al hogar, la situación de una parte ( $\frac{1}{3}$ ) de los hogares más afectados por desempleo. Pero las nuevas prestaciones (PRODI, Prepara...) han seguido demasiado pegadas a la inercia de lo que ya se hacía: prestaciones semicontributivas que dejan fuera una parte notable de las personas necesitadas; que siguen siendo prestaciones de duración determinada que se quedan cortas en una crisis prolongada como esta, y que, además, tienen una cuantía fija y reducida, claramente insuficiente para hogares de varios miembros sin otros recursos. En otros ámbitos, las medidas adoptadas han sido poco eficaces, como la nueva legislación antidesahucios, que no ha conseguido impedir que 38.961 familias perdieran su vivienda habitual en 2013, según el reciente informe sobre los procesos de ejecución hipotecaria del Banco de España. Y otras veces han ido claramente en contra de las necesidades sociales en educación y sanidad, donde los recortes, además, han tenido un impacto mayor en los grupos más vulnerables.

Es precisa pues una revisión del papel de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En esta línea, planteamos la necesidad de priorizar la atención a los fenómenos de exclusión y la pobreza severa, básicamente por

tres argumentos: en primer lugar, por «baremo», deben ir primero los que peor están; en segundo lugar, por una cuestión de derechos humanos, ya que estas situaciones de pobreza y exclusión social severa, más allá de la reducción de ciertas comodidades, implican un atentado directo a la dignidad de las personas, y finalmente por un criterio de interés colectivo general, ya que la expansión de estas situaciones puede poner en cuestión la convivencia y la seguridad del conjunto de la sociedad, en suma, la sostenibilidad social.

En este sentido, deberían ser atendidas las propuestas para reformar profundamente y ampliar la cobertura del sistema de garantía de ingresos mínimos que diversas entidades están realizando (Cáritas, CC. OO., la Red de Lucha contra la Pobreza, Círculo Cívico de Opinión...). Sobre esta base, tendrán que reforzarse las políticas activas, aportando a las personas más excluidas oportunidades vitales, de ocupación y empleo. Para ello, es precisa la implicación del sistema educación, de los servicios de empleo, incluida la formación ocupacional y de los servicios sociales. El ámbito de la vivienda y de la salud deberían ser también muy seriamente considerados dentro de un plan real, que no virtual, de lucha contra la exclusión. Las investigaciones realizadas nos cuentan también la importancia de las pequeñas ayudas puntuales, que resuelven necesidades inmediatas en los sectores más desfavorecidos. Esto es algo que permite la participación de múltiples agentes en esta estrategia colectiva de recuperar lo que hemos perdido y es algo que nos recuerda que construir una sociedad cohesionada es cosa de todos.

### 3.7. Bibliografía

ANAUT BRAVO, S., ÁLVAREZ, M.<sup>a</sup> J. *et al.* (2010): «El impacto de la crisis económica sobre los hogares con personas con discapacidad», en LAPARRA, M.;

NAVARRO, M. L. y Pérez ERANSUS, B. P.: *El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España*, Madrid: Fundación FOESSA; Cáritas Española.

- , ARZA PORRAS, J. y ÁLVAREZ, M.<sup>a</sup> J. (2014): *La incidencia de la exclusión social en los hogares con personas con discapacidad*, Documento de trabajo 3.3. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.
- BRUGUÉ, Q., GOMÀ, R. y SUBIRATS, J. (2002): «De la pobreza a la exclusión social. Nuevos retos para las políticas públicas». *Revista Internacional de Sociología*, n.º 33, pp. 7-45.
- CANTÓ SÁNCHEZ, O. (2010): «El impacto de la crisis económica sobre los hogares más desfavorecidos», *Revista española del Tercer Sector*, n.º 15, disponible en: [www.fundacionluisvives.org/rets/15/index.html](http://www.fundacionluisvives.org/rets/15/index.html)
- DAMONTI, P. (2014): *Una mirada de género a la exclusión social*, Documento de trabajo 3.1. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.
- y ARZA PORRAS, J. (2014): *Exclusión en la comunidad gitana: Una brecha social que persiste y se agrava*, Documento de trabajo 3.5. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.
- EMMENEGGER, P., HÄUSERMANN, S., PALIER, B. y SEELEIB-KAISER, M. (2012): *The Age of Dualization. The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies*, Oxford and New York: Oxford University Press.
- FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO (2013): *El alumnado gitano en secundaria: un estudio comparado*, Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- (2012): *Población gitana, empleo e inclusión social. Estudio comparado: población gitana española y del Este de Europa*.
- (2009): «Vivienda. Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España», 2007, *Gitanos. Pensamiento y cultura*, n.º 3.
- HUETE GARCÍA, A. (2013): «La exclusión de la población con discapacidad en España. Estudio específico a partir de la Encuesta Social Europea», *Revista Española de Discapacidad*, I n.º 2, pp. 7-24.
- FRAZER, H. y MARLIER, M. (2012): *Assessment of Social Inclusion Policy Developments in the EU. January 2012. Main Findings and Suggestions: on the Way Forward*. EU Network of Independent Experts on Social Inclusion Policy.
- LAPARRA NAVARRO, M. (2014): «La fractura social se ensancha. Avance de resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA 2013», *Análisis y Perspectivas*, Madrid: Fundación FOESSA; Cáritas Española.
- (coord.) (2012): *Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España*, Colección de Estudios Sociales, n.º 35, Barcelona: Obra social la Caixa.
- (coord.) (2010): *El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España*, Madrid: Fundación FOESSA; Cáritas Española.
- (2008): «La comunidad gitana: el grupo étnico más excluido en la sociedad española», en LAPARRA, M., y PÉREZ, B.: *Exclusión Social en España: Un espacio diverso y disperso en intensa transformación*, Madrid: Fundación FOESSA; Cáritas Española.
- (2007) (coord.): *La construcción del empleo precario. Dimensiones, causas y tendencias de la precariedad laboral*, Madrid: Fundación FOESSA; Cáritas Española.
- , FERNÁNDEZ DÍEZ, C., HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, M., et al. (2012): *Informe de la Sociedad Civil sobre la Implementación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana y el Plan de Acción de la Década para la Inclusión de los Gitanos en España en 2012*, Budapest: Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation.

- , GARCÍA GARCÍA, A. (2014): *Reflexiones metodológicas en el análisis de la exclusión social*, Documento de trabajo 3.11 para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.
- y — (2011): «Una comunidad gitana de tamaño y perfiles todavía imprecisos», en: LAPARRA, M. (coord.): *Diagnóstico social de la comunidad gitana en España. Un análisis contrastado de la Encuesta del CIS a Hogares de Población Gitana 2007*.
- y PÉREZ ERANSUS, B. (coord.) (2008): «Exclusión Social en España: Un espacio diverso y disperso en intensa transformación», en *VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2008*, Madrid: Fundación FOESSA; Cáritas Española.
- y — (coord.) (2012): *Crisis y fractura social en Europa: Causas y efectos en España*, Colección de Estudios Sociales, n.º 35, Barcelona: Obra social La Caixa.
- LASHERAS RUIZ, R., MARTÍNEZ VIRTO, L. (2013): «Crisis concatenadas: impactos de la recesión en las condiciones de vida», *Revista Inguruak*, n.º 53-54, pp. 682-693.
- , MARTÍNEZ VIRTO, L. y AZCONA, P. (2012): «Condiciones de vida, estrategias e itinerarios de exclusión de los hogares en Navarra», en: CORERA, C.; LAPARRA, M.; PÉREZ-ERANSUS, B. (coord.): *Informe sobre el impacto de la crisis en los hogares en situación de exclusión en Navarra. Traficantes de sueños*, Villatuerta: Gráficas Lizarra.
- , y PÉREZ ERANSUS, B. (2014): *Jóvenes, desigualdades y exclusión social*, Documento de trabajo 3.2. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.
- LA PARRA, D. (2009): *Hacia la equidad en salud. Estudio comparativo de las encuestas nacionales de salud a población gitana y población general de España, 2006*, Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo y Fundación Secretariado Gitano.
- MALGESINI, G. (coord.) (2013): *Informe de la vulnerabilidad social 2011-2012*, Madrid: Cruz Roja Española.
- MARBÁN GALLEGO, V., MONTSERRAT CODORNÍU, J., MORÁN ALÁEZ, E., y RODRÍGUEZ CABRERO, G. (2013): *El sector de la discapacidad: realidad, necesidades y retos futuros. Análisis de la situación de la población con discapacidad y de las entidades del movimiento asociativo y aproximación a sus retos y necesidades en el horizonte de 2020*, col. CERMI, n.º 59, Madrid: CINCA-CERMI, Fundación ONCE.
- MARTÍNEZ VIRTO, L. (2014): *Crisis en familia: Síntomas de agotamiento de la solidaridad familiar*. Documento de trabajo 3.7. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.
- (2014): *Sobreviviendo a la crisis: estrategias de los hogares en dificultad*, Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- , AZCONA SÁENZ, P., PÉREZ ERANSUS, B. (2014): *La erosión del efecto amortiguador de las políticas sociales en España*. Documento de trabajo 3.8. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.
- MEDINA, J. A., AGUILERA, J. C., DE LA FUENTE SANZ, L. et al. (2012): Trabajadores pobres y empobrecimiento en España, *Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria/Revista de servicios sociales*, n.º 52, pp. 119-128.
- MEIL, G. (2011): *Individualización y solidaridad familiar*. Colección de Estudios Sociales, n.º 32, Barcelona: Obra social La Caixa.
- MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: «El sistema público de Servicios Sociales». *Informe de Rentas Mínimas de Inserción 2011*.



- MORENO, L., y MARI-KLOSE, P. (2013): «Youth, family change and welfare arrangements Is the South still so different?», *European societies*, n.º 15 (4), pp. 493-513.
- PAUGAM, S. (1994): *La Disqualification sociale: essai sur la nouvelle pauvreté*. París: Presses universitaires de France.
- PÉREZ ERANSUS, B. (2010): «Articulación de los procesos de pobreza económica y exclusión social tras la crisis: implicaciones para la orientación de las políticas sociales de respuesta», en LAPARRA, M. y PÉREZ ERANSUS, B. (coord.): *El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España*, Madrid: Fundación FOESSA; Cáritas Española.
- RUIZ VILAFRANCA, R., RAMÍREZ DEL RÍO, A. y GÓMEZ GONZÁLEZ, E. (2014): *El perfil sociológico de la exclusión en España y su evolución*, Documento de trabajo 3.9. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.
- SÁNCHEZ RUBIO, B. y FERNÁNDEZ, A. (2011): «La situación laboral de la población gitana: conocimiento y reconocimiento», en: LAPARRA, M. (coord.): *Diagnóstico social de la comunidad gitana en España. Un análisis contrastado de la Encuesta del CIS a Hogares de Población Gitana 2007*.
- SARASA, S., y MORENO, L. (1995): «Los Estados de Bienestar en la Europa del Sur». *Politeya*, n.º 7.
- SUBIRATS, J. (dirs.) (2004): *Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea*, Colección Estudios Sociales, n.º 16, Barcelona: Fundación la Caixa.
- TRUJILLO CARMONA, M. (2014): *Diseño muestral de la Encuesta sobre integración social y necesidades sociales*. Documento de trabajo 3.10. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.
- ZUGASTI MUTILVA, N. (2014): *La expansión de la exclusión social por la extensión del desempleo y la ocupación precaria*, Documento de trabajo 3.6. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.
- (2013): *Transiciones laborales de la población inmigrante en época de crisis. Entre la integración y la exclusión en el mercado de trabajo*. Madrid: Fundación FOESSA; Cáritas Española.
- y AZCONA SÁENZ, P. (2014): *Retrocesos en la integración de la población inmigrante: Evidencias de las limitaciones del modelo español*, Documento de trabajo 3.4. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: [www.foessa.es/informe](http://www.foessa.es/informe) Capítulo 3.

## 3.8. Otras tablas

**TABLA 3.54. Distribución de la población entre los cuatro espacios de la integración a la exclusión según distintas características, 2007, 2009 y 2013**

	2007				2009				2013			
	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Integración precaria	Integración moderada	Exclusión severa	Integración precaria	Integración moderada	Exclusión severa	Integración precaria	Integración moderada	Exclusión severa
Varón	50,9	33,4	9,5	6,1	41,0	40,4	11,3	7,3	34,2	40,7	14,0	11,2
Mujer	49,4	33,8	10,5	6,3	42,2	39,0	11,0	7,7	34,4	40,5	14,4	10,7
Menos de 18 años	52,3	30,0	10,5	7,2	35,7	39,0	13,9	11,4	26,9	37,7	17,2	18,2
18-29 años	48,9	36,9	7,8	6,4	36,4	41,9	12,7	9,0	28,6	40,1	16,9	14,4
30-44 años	49,1	32,7	10,2	7,9	36,7	41,6	13,3	8,3	30,9	43,4	14,6	11,1
45-64 años	57,8	29,3	8,6	4,3	46,1	37,8	9,5	6,6	36,3	40,9	13,9	8,9
65-74 años	43,3	38,3	14,0	4,4	55,2	34,1	7,5	3,2	50,3	37,6	7,7	4,4
Más de 75 años	34,3	44,0	14,4	7,3	44,4	44,3	7,4	3,8	44,1	42,1	10,3	3,5
Analfabeto	5,4	58,9	25,0	10,7	0,0	57,1	26,3	16,7	1,4	52,5	19,9	26,1
Sin estudios obligatorios	41,2	39,3	10,7	8,8	39,1	40,2	12,3	8,4	31,5	41,3	13,7	13,5
Secundaria obligatoria	52,4	28,0	11,9	7,7	37,0	42,8	12,9	7,3	31,4	41,1	15,9	11,7
FP, bachiller	49,8	38,6	7,5	4,1	49,1	39,0	6,3	5,6	39,5	42,4	13,0	5,1
Universitarios	69,4	22,6	6,1	1,8	63,6	28,8	6,1	1,5	53,4	35,6	7,5	3,5
Trabajando	57,2	32,3	6,4	4,1	50,7	38,5	8,6	2,2	44,2	40,6	10,4	4,7
Desempleo	5,1	46,2	35,9	12,8	1,2	50,2	22,7	25,9	3,4	46,3	25,7	24,6
Estudiante	54,8	35,7	1,2	8,3	54,8	32,3	8,0	5,0	40,2	37,3	13,9	8,6
Pensionista	45,9	37,5	12,4	4,2	48,4	39,6	8,8	3,2	43,5	41,2	10,7	4,6
Labores del hogar	54,5	34,8	7,5	3,1	49,4	35,9	8,3	6,4	45,7	36,1	9,4	8,8
Otras	55,6	23,8	13,9	6,6	32,4	43,0	12,5	12,1	33,8	37,6	12,6	16,0
Espanoles (con UE15)	54,3	31,3	9,1	5,3	47,0	38,3	9,4	5,3	38,1	41,4	12,6	8,0
Gitanos españoles	5,3	18,8	49,3	26,6	6,8	18,4	13,7	61,1	5,8	21,9	17,9	54,4
Extranjeros	19,6	60,0	9,5	10,9	1,2	56,2	26,3	16,4	7,5	39,9	28,3	24,3
Barrio en buenas condiciones	53,5	32,6	9,0	4,9	43,4	40,4	10,4	5,8	39,0	40,3	13,3	7,3
Barrio degradado, marginal	29,4	40,5	15,6	14,5	22,1	31,9	19,0	26,9	15,7	41,5	17,8	25,0
Más de 100.000 habitantes	54,9	30,0	7,9	7,2	38,8	39,9	12,1	9,1	30,0	42,1	14,3	13,5
Entre 50.000 y 100.000	43,2	41,1	10,0	5,7	44,7	39,0	9,3	6,9	35,8	40,6	13,1	10,4
Entre 20.000 y 50.000	35,7	42,3	14,8	7,1	45,0	38,8	9,8	6,4	31,3	40,3	16,7	11,7
Entre 5.000 y 20.000	61,1	25,7	9,3	4,0	38,4	42,6	13,8	5,3	42,7	37,3	12,8	7,2
Menos de 5.000	47,5	37,0	10,5	5,1	49,9	38,0	7,2	4,9	41,9	39,4	13,3	5,4
<b>Total</b>	<b>50,1</b>	<b>33,6</b>	<b>10,0</b>	<b>6,2</b>	<b>41,6</b>	<b>39,7</b>	<b>11,2</b>	<b>7,5</b>	<b>34,3</b>	<b>40,6</b>	<b>14,2</b>	<b>10,9</b>

**TABLA 3.55. Distribución de los hogares entre los cuatro espacios de la integración a la exclusión según distintas características, 2007, 2009 y 2013**

	2007				2009				2013			
	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa
Sexo sustentador principal	49,7	35,2	9,6	5,5	45,9	38,9	9,4	5,9	39,8	39,2	12,3	8,8
Mujer	40,1	42,7	11,5	5,7	36,6	40,6	13,8	9,0	31,2	45,0	14,8	9,0
Grupos de edad principal	45,6	44,1	6,8	3,6	34,4	43,2	11,9	10,6	32,4	36,9	17,8	13,0
De 30 a 44	46,1	38,2	7,8	7,8	36,9	40,2	13,2	9,7	30,0	42,2	14,8	13,0
De 45 a 64	57,0	29,9	9,1	4,0	44,5	38,3	10,6	6,6	36,1	40,1	14,5	9,3
De 65 y más	34,8	44,0	15,3	5,9	49,6	39,0	8,0	3,5	44,7	42,6	8,9	3,8
Alfabeto	0,0	47,6	52,4	0,0	0,0	53,3	32,6	14,1	0,9	53,2	20,4	25,5
Sin estudios obligatorios	36,4	42,0	12,3	9,3	40,1	41,2	11,2	7,5	33,8	41,8	13,6	10,8
Secundaria obligatoria	51,4	31,0	11,3	6,2	39,9	41,2	11,7	7,2	32,9	41,2	14,7	11,3
FP, bachiller	50,5	39,0	7,7	2,9	50,0	37,5	6,4	6,0	41,0	41,6	12,8	4,6
Universitarios	65,3	28,1	4,9	1,7	62,5	27,5	8,3	1,6	52,8	36,0	7,3	4,0
Trabajando	54,8	34,6	7,1	3,4	48,7	40,4	8,7	2,2	41,4	43,9	9,6	5,1
Desempleo	0,0	24,0	54,0	22,0	0,0	32,0	24,9	43,1	0,4	24,0	38,6	37,0
Pensionista	47,9	39,9	9,0	3,2	54,0	36,3	7,0	2,7	47,4	40,7	8,1	3,7
Otras	33,4	46,5	11,6	8,5	34,9	45,8	13,6	5,7	30,7	46,1	14,1	9,1
Persona sola	23,9	62,2	10,6	3,3	35,5	44,3	12,1	8,2	33,2	46,2	13,6	7,0
De 2 a 4 miembros	53,7	30,2	10,3	5,9	47,5	37,5	9,5	5,6	39,8	40,0	12,3	7,9
5 y más miembros	44,1	39,2	7,7	9,0	25,9	44,6	16,4	13,1	17,5	39,3	20,2	23,0
Sin núcleo	25,1	57,8	12,7	4,5	34,5	44,4	12,6	8,5	32,8	46,1	13,5	7,6
Mononuclear	52,9	31,7	9,7	5,7	47,3	37,8	9,3	5,6	39,1	39,5	12,7	8,7
Polinuclear	44,1	38,2	7,8	9,8	13,6	43,2	24,8	18,4	18,8	43,6	18,5	19,1
Hay núcleo monoparental	47,6	40,4	7,7	4,4	30,2	37,6	20,0	12,1	28,9	41,1	17,7	12,3
Hay algún anciano	39,1	42,6	13,1	5,2	47,7	39,6	8,5	4,2	44,4	41,9	9,8	3,9
Hay algún menor	55,3	29,0	10,1	5,6	39,5	38,2	13,1	9,2	29,0	38,7	17,4	14,9
Hay algún joven	47,6	37,8	8,7	5,8	36,9	40,3	12,8	10,1	28,8	40,7	17,5	13,0
Hay algún ocupado	53,7	34,7	7,3	4,3	48,2	40,1	9,3	2,4	40,2	42,5	11,9	5,3
Hay algún parado	3,8	45,3	37,2	13,7	1,4	53,5	22,6	22,5	4,1	52,2	24,5	19,2
Hay personas con discapacidad	35,0	35,7	20,8	8,4	29,1	44,2	17,4	9,4	29,5	42,4	17,6	10,4

**TABLA 3.56. Incidencia de la exclusión social en distintos grupos de población: Índice Sintético de Exclusión Social (ISES), Tasa de Exclusión Social y de Exclusión Severa (%)**

	Índice Sintético de Exclusión Social				Tasa de Exclusión Social (porcentaje de cada grupo)				Tasa de Exclusión Severa (porcentaje de cada grupo)			
	2007	2009	2013		2007	2009	2013		2007	2009	2013	
Sexo	1,0277	1,2068	1,5279		15,6	18,6	25,2		6,1	7,3	11,2	
Mujer	1,0383	1,2050	1,4719		16,8	18,7	25,0		6,3	7,7	10,7	
Menos de 18 años	1,0681	1,5910	2,1019		17,7	25,3	35,4		7,2	11,4	18,2	
18-29 años	1,0786	1,3928	1,7526		14,2	21,7	31,3		6,4	9,0	14,4	
30-44 años	1,1130	1,3581	1,5854		18,2	21,7	25,7		7,9	8,3	11,1	
45-64 años	0,8296	1,0675	1,3598		12,9	16,1	22,8		4,3	6,6	8,9	
65-74 años	0,9861	0,7299	0,7935		18,4	10,7	12,1		4,4	3,2	4,4	
Más de 75 años	1,3246	0,8037	0,8645		21,7	11,2	13,8		7,3	3,8	3,5	
Analfabeto	1,7676	2,4944	2,8163		35,7	42,9	46,0		10,7	16,7	26,1	
Sin estudios obligatorios	1,3867	1,3429	1,7334		19,5	20,7	27,3		8,8	8,4	13,5	
Secundaria obligatoria	1,1074	1,3000	1,5870		19,6	20,2	27,5		7,7	7,3	11,7	
FP, bachiller	0,7963	0,8386	1,0297		11,6	11,9	18,1		4,1	5,6	5,1	
Universitarios	0,5234	0,4917	0,6994		7,9	7,5	11,0		1,8	1,5	3,5	
Trabajando	0,7339	0,7062	0,8956		10,5	10,8	15,1		4,1	2,2	4,7	
Desempleo	2,4028	3,0801	2,9137		48,7	48,6	50,3		12,8	25,9	24,6	
Estudiante	0,8374	0,8668	1,2485		9,5	13,0	22,5		8,3	5,0	8,6	
Pensionista	0,9915	0,8172	0,9694		16,6	12,0	15,3		4,2	3,2	4,6	
Labores del hogar	0,7101	0,9693	1,1578		10,6	14,7	18,2		3,1	6,4	8,8	
Españoles (con UE15)	0,8586	0,9550	1,2206		14,4	14,7	20,6		5,3	5,3	8,0	
Gitanos españoles	5,6937	5,6719	5,1766		75,8	74,7	72,3		26,6	61,1	54,4	
Extranjeros	1,6424	2,5481	2,9039		20,4	42,6	52,6		10,9	16,4	24,3	
Barrio en buenas condiciones	0,8556	1,0451	1,2048		13,9	16,2	20,6		4,9	5,8	7,3	
Barrio degradado, marginal	2,0935	2,9876	2,6549		30,1	46,0	42,8		14,5	26,9	25,0	
Más de 100.000 habitantes	1,0108	1,3852	1,7377		15,1	21,3	27,8		7,2	9,1	13,5	
Entre 50.000 y 100.000	1,2963	1,0462	1,4300		15,7	16,3	23,5		5,7	6,9	10,4	
Entre 20.000 y 50.000	1,2559	1,0109	1,6218		21,9	16,2	28,4		7,1	6,4	11,7	
Entre 5.000 y 20.000	0,6812	1,0981	1,1027		13,2	19,0	20,0		4,0	5,3	7,2	
Menos de 5.000	1,0001	0,9271	1,0257		15,5	12,1	18,7		5,1	4,9	5,4	
<b>Total población</b>	<b>1,0333</b>	<b>1,2058</b>	<b>1,5013</b>		<b>16,3</b>	<b>18,7</b>	<b>25,2</b>		<b>6,2</b>	<b>7,5</b>	<b>10,9</b>	

**TABLA 3.57. Incidencia de la exclusión social en distintos tipos de hogares: Índice Sintético de Exclusión Social (ISES), total de hogares excluidos y en exclusión severa (%) y hogares en exclusión severa (%)**

	Índice Sintético de Exclusión Social				Total Exclusión Social (porcentaje de cada grupo)				Exclusión Social Severa (porcentaje de cada grupo)					
	2007	2009	2013	2013	2007	2009	2013	2013	2007	2009	2013	2007	2009	2013
Sexo sustentador principal	0,95	1,03	1,29	1,29	15,1	15,2	21,0	21,0	5,5	5,9	8,8	5,5	5,9	8,8
Mujer	1,15	1,32	1,39	1,39	17,2	22,9	23,8	23,8	5,7	9,0	9,0	5,7	9,0	9,0
Hasta 29	0,78	1,47	1,73	1,73	10,3	22,5	30,8	30,8	3,6	10,6	13,0	3,6	10,6	13,0
Grupos de edad sustentador principal	1,02	1,43	1,65	1,65	15,8	22,9	27,8	27,8	7,8	9,7	13,0	7,8	9,7	13,0
De 45 a 64	0,92	1,11	1,41	1,41	13,1	17,2	23,8	23,8	4,0	6,6	9,3	4,0	6,6	9,3
De 65 y más	1,20	0,77	0,85	0,85	21,2	11,5	12,7	12,7	5,9	3,5	3,8	5,9	3,5	3,8
Analfabeto	1,93	2,55	2,89	2,89	50,0	46,7	45,8	45,8	0,0	14,1	25,5	0,0	14,1	25,5
Sin estudios obligatorios	1,47	1,23	1,51	1,51	21,6	18,8	24,4	24,4	9,3	7,5	10,8	9,3	7,5	10,8
Estudios sustentador principal	0,99	1,22	1,55	1,55	17,6	19,0	25,9	25,9	6,2	7,2	11,3	6,2	7,2	11,3
Secundaria obligatoria	0,69	0,85	0,99	0,99	10,4	12,5	17,4	17,4	2,9	6,0	4,6	2,9	6,0	4,6
FP, bachiller	0,46	0,56	0,71	0,71	6,5	10,0	11,3	11,3	1,7	1,6	4,0	1,7	1,6	4,0
Universitarios	0,76	0,72	0,93	0,93	10,5	10,9	14,7	14,7	3,4	2,2	5,1	3,4	2,2	5,1
Trabajando	3,49	4,23	4,10	4,10	76,0	68,1	75,6	75,6	22,0	43,1	37,0	22,0	43,1	37,0
Desempleo	0,82	0,67	0,83	0,83	12,2	9,7	11,9	11,9	3,2	2,7	3,7	3,2	2,7	3,7
Pensionista	1,43	1,20	1,40	1,40	20,1	19,3	23,3	23,3	8,5	5,7	9,1	8,5	5,7	9,1
Otras	1,14	1,25	1,27	1,27	14,0	20,3	20,6	20,6	3,3	8,2	7,0	3,3	8,2	7,0
Persona sola	0,89	0,99	1,22	1,22	16,1	15,0	20,2	20,2	5,9	5,6	7,9	5,9	5,6	7,9
De 2 a 4 miembros en el hogar	1,90	1,84	2,54	2,54	16,7	29,5	43,2	43,2	9,0	13,1	23,0	9,0	13,1	23,0
5 y más miembros	1,23	1,30	1,33	1,33	17,1	21,1	21,1	21,1	4,5	8,5	7,6	4,5	8,5	7,6
Sin núcleo	0,91	0,99	1,27	1,27	15,4	14,9	21,3	21,3	5,7	5,6	8,7	5,7	5,6	8,7
Mononuclear	2,09	2,53	2,19	2,19	17,6	43,2	37,4	37,4	9,8	18,4	19,1	9,8	18,4	19,1
Polinuclear	0,99	1,77	1,73	1,73	12,1	32,1	30,0	30,0	4,4	12,1	12,3	4,4	12,1	12,3
Hay núcleo monoparental	1,11	0,85	0,87	0,87	18,3	12,7	13,8	13,8	5,2	4,2	3,9	5,2	4,2	3,9
Hay algún anciano	0,89	1,36	1,84	1,84	15,7	22,3	32,3	32,3	5,6	9,2	14,9	5,6	9,2	14,9
Hay algún menor	1,24	1,45	1,67	1,67	14,6	22,8	30,5	30,5	5,8	10,1	13,0	5,8	10,1	13,0
Hay algún joven	0,83	0,75	0,99	0,99	11,6	11,7	17,3	17,3	4,3	2,4	5,3	4,3	2,4	5,3
Hay algún ocupado	2,52	2,75	2,48	2,48	51,1	45,1	43,6	43,6	13,7	22,5	19,2	13,7	22,5	19,2
Hay algún parado	1,64	1,57	1,66	1,66	29,2	26,8	28,1	28,1	8,4	9,4	10,4	8,4	9,4	10,4
Hay personas con discapacidad	1,00	1,11	1,32	1,32	15,8	17,2	21,9	21,9	5,6	6,7	8,9	5,6	6,7	8,9
<b>Total hogares</b>	<b>1,00</b>	<b>1,11</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>15,8</b>	<b>17,2</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>5,6</b>	<b>6,7</b>	<b>8,9</b>	<b>5,6</b>	<b>6,7</b>	<b>8,9</b>

**TABLA 3.58. Distribución de los hogares afectados por la exclusión y por la exclusión severa, según distintas características, 2007, 2009 y 2013**

	Total hogares excluidos			Hogares en exclusión severa		
	2007	2009	2013	2007	2009	2013
Sexo sustentador principal	71,7	64,9	63,9	73,9	64,3	66,2
Mujer	28,3	35,1	36,1	26,1	35,7	33,8
Hasta 29	6,3	8,2	9,2	6,0	10,0	9,7
De 30 a 44	30,3	35,7	30,8	42,2	39,0	35,8
De 45 a 64	30,5	34,9	42,7	26,1	34,4	41,6
De 65 y más	32,9	21,1	17,2	25,6	16,6	12,9
Analfabeto	2,2	7,2	5,2	0,0	5,7	7,1
Sin estudios obligatorios	42,9	37,0	29,6	51,9	38,4	32,6
Secundaria obligatoria	27,8	32,1	37,9	27,6	31,9	40,8
FP, bachiller	17,9	16,6	20,6	13,8	21,0	13,5
Universitarios	9,3	7,2	6,8	6,6	3,1	6,0
Trabajando	50,5	31,4	33,3	51,0	16,2	28,5
Desempleo	16,7	37,5	38,6	15,0	61,0	46,8
Pensionista	18,2	14,7	13,9	15,0	10,4	10,8
Otras	14,5	16,4	14,2	19,0	12,4	13,8
Persona sola	17,2	21,9	18,3	11,4	22,7	15,5
De 2 a 4 miembros	76,3	63,6	67,4	78,6	60,7	65,6
5 y más miembros	6,5	14,5	14,3	10,0	16,5	18,9
Sin núcleo	20,9	21,1	21,3	15,4	27,0	18,8
Mononuclear	75,9	65,4	72,1	79,6	63,5	72,6
Polinuclear	3,2	8,7	6,8	5,0	9,5	8,6
Hay núcleo monoparental	8,3	21,7	19,4	8,5	21,2	19,7
Hay algún anciano	36,1	27,7	21,8	28,9	23,6	15,5
Hay algún menor	29,4	35,6	42,4	29,7	37,8	48,5
Hay algún joven	17,9	23,3	28,9	20,4	26,6	30,7
Hay algún ocupado	51,6	40,9	49,4	53,7	21,6	37,9
Hay algún parado	21,1	50,7	59,8	15,9	65,1	65,3
Hay personas con discapacidad	22,0	22,5	22,5	17,9	20,3	20,8
Todos españoles o EU15	75,5	66,8	73,1	71,6	63,9	63,8
Algún extracomunitario o EU12 ampliación	15,8	28,0	19,5	21,9	25,7	23,2
Gitanos españoles	8,6	5,2	7,4	6,5	10,4	13,0
Barrio en buenas condiciones	75,5	83,1	67,8	71,0	75,1	57,0
Barrio degradado, marginal	24,5	16,9	32,2	29,0	24,9	43,0
Más de 100.000 hab.	38,7	48,3	48,9	46,3	52,7	54,3
Entre 50.000 y 100.000	9,7	11,5	10,9	9,0	10,9	10,7
Entre 20.000 y 50.000	27,5	14,9	17,2	25,4	12,1	16,3
Entre 5.000 y 20.000	16,0	17,0	13,4	11,4	14,2	11,7
Menos de 5.000	8,1	8,3	9,5	8,0	10,0	6,9
<b>Total hogares</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**TABLA 3.59. Distribución de la población afectada por la exclusión y por la exclusión severa, según distintas características, 2007, 2009 y 2013**

	Porcentaje sobre total excluidos			Porcentaje sobre total exclusión severa		
	2007	2009	2013	2007	2009	2013
Sexo						
Varón	45,8	48,0	48,4	46,9	46,7	49,5
Mujer	54,2	52,0	51,6	53,1	53,3	50,5
Grupos de edad						
Menos de 18 años	16,9	21,8	23,6	18,1	24,5	27,8
18-29 años	17,3	17,7	20,5	20,2	18,4	21,6
30-44 años	25,3	26,8	21,9	28,8	25,6	21,8
45-64 años	20,4	21,7	24,8	17,7	22,1	22,2
65-74 años	9,2	6,4	4,4	5,7	4,7	3,7
Más de 75 años	10,9	5,6	4,9	9,5	4,7	2,9
Estudios > 16 años						
Analfabeto	1,7	6,4	4,1	1,3	6,4	5,6
Sin estudios obligatorios	34,6	36,7	28,9	40,4	38,3	34,6
Secundaria obligatoria	32,8	36,5	40,5	33,3	34,0	41,3
FP, bachiller	20,8	15,6	20,8	18,9	18,9	14,1
Universitarios	10,3	4,7	5,7	6,0	2,3	4,4
Ocupación						
Trabajando	46,8	25,1	24,9	55,8	13,2	18,7
Desempleo	18,8	38,8	42,7	15,0	52,9	50,4
Estudiante	0,9	4,7	6,4	2,3	4,6	5,9
Pensionista	24,9	15,0	13,6	18,9	10,3	9,9
Labores del hogar	5,3	12,0	8,5	4,7	13,4	9,9
Otras	3,4	4,4	3,8	3,3	5,5	5,2
Tres grupos étnicos						
Españoles (con UE15)	78,8	69,5	71,8	75,3	62,4	63,8
Gitanos españoles	10,1	7,9	9,4	9,2	16,1	16,3
Extranjeros	11,2	22,6	18,8	15,6	21,5	20,0
Barrio						
Barrio en buenas condiciones	72,8	78,9	65,2	66,1	69,4	53,3
Barrio degradado, marginal	27,2	21,1	34,8	33,9	30,6	46,7
Hábitat						
Más de 100.000 habitantes	39,1	54,0	49,9	48,3	58,2	55,7
Entre 50.000 y 100.000	10,6	10,8	10,7	10,0	11,5	10,9
Entre 20.000 y 50.000	27,6	13,0	18,2	23,3	12,9	17,3
Entre 5.000 y 20.000	14,3	16,0	12,5	11,2	11,1	10,3
Menos de 5.000	8,5	6,3	8,7	7,2	6,4	5,8
<b>Total población</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

TABLA 3.60. Tasas de exclusión social para distintos grupos de edad, ocupación y estudios, desagregados por sexo (%)

	2007			2009			2013		
	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total
Grupos de edad	Menos de 18 años	13,2	21,4	17,7	26,1	25,3	34,0	36,5	35,2
	18-29 años	13,1	15,3	14,2	22,2	21,2	31,2	31,2	31,2
	30-44 años	18,9	17,6	18,2	21,2	22,0	26,2	25,2	25,7
	45-64 años	14,9	11,1	12,9	16,3	15,9	16,1	22,9	22,8
	65-74 años	17,2	19,6	18,4	8,6	12,6	10,7	11,1	12,9
	Más de 75 años	18,0	24,9	21,7	8,1	13,5	11,3	10,7	15,6
	Trabajando	10,7	10,2	10,5	9,9	12,0	10,8	13,4	17,2
Ocupación (>16)	Desempleo	61,0	34,8	48,7	52,3	44,2	48,6	53,8	46,4
	Estudiante	20,6	2,0	9,5	12,6	13,3	13,0	23,5	21,3
	Pensionista	11,4	24,0	16,6	9,9	14,8	12,0	13,8	17,0
	Labores del hogar	6,2	11,4	10,6	25,0	14,5	14,8	12,1	18,3
	Analfabeto	41,2	34,2	36,4	44,4	42,8	43,2	55,4	43,0
	Sin estudios obligatorios	18,9	20,1	19,5	21,5	20,0	20,7	29,7	25,4
	Secundaria obligatoria	18,9	20,1	19,6	21,9	18,5	20,2	28,3	26,7
Estudios (>16)	FP, bachiller	13,8	9,6	11,6	9,8	14,2	11,9	16,9	19,3
	Universitarios	6,9	9,0	7,9	6,9	8,3	7,7	9,9	12,0
	<b>Total población</b>	<b>15,6</b>	<b>16,9</b>	<b>16,3</b>	<b>18,6</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>25,2</b>	<b>25,0</b>
									<b>25,1</b>



**TABLA 3.61. Tasas de exclusión social según el nivel de estudios y la edad**

	2007					2009					2013				
	18-29 años	30-44 años	45-64 años	65-74 años	Más de 75 años	18-29 años	30-44 años	45-64 años	65-74 años	Más de 75 años	18-29 años	30-44 años	45-64 años	65-74 años	Más de 75 años
Analfabeto	0,0	50,0	72,7	16,7	43,8	100,0	87,5	72,7	37,0	27,2	33,3	66,7	75,9	43,8	32,1
Sin estudios obligatorios	29,2	32,8	16,0	18,6	16,5	56,3	48,6	19,1	9,3	10,3	53,8	53,1	33,0	12,4	11,9
Secundaria obligatoria	20,7	26,4	12,1	6,4	46,1	31,0	24,3	17,7	6,9	7,0	40,5	30,5	24,5	9,2	14,0
FP, bachiller	13,0	12,3	9,0	0,0	27,3	11,7	14,6	8,9	6,4	13,3	21,3	20,4	14,6	4,4	10,4
Universitarios	4,8	9,6	10,1	1,7	7,1	2,4	8,8	7,1	17,6	0,0	15,4	10,1	10,9	3,8	8,0
<b>Total población</b>	<b>14,2</b>	<b>18,2</b>	<b>12,9</b>	<b>18,4</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>	<b>16,1</b>	<b>10,7</b>	<b>11,2</b>	<b>31,3</b>	<b>25,7</b>	<b>22,8</b>	<b>12,1</b>	<b>13,8</b>

**TABLA 3.62. Distribución de la población excluida en cada grupo de edad, según el nivel de estudios**

	2007					2009					2013				
	18-29 años	30-44 años	45-64 años	65-74 años	Más de 75 años	18-29 años	30-44 años	45-64 años	65-74 años	Más de 75 años	18-29 años	30-44 años	45-64 años	65-74 años	Más de 75 años
Analfabeto	0,0	0,3	2,6	4,8	5,0	0,4	1,5	8,4	18,3	25,0	0,1	0,8	4,3	21,5	20,3
Sin estudios obligatorios	18,7	22,9	40,7	85,5	53,9	35,0	29,7	34,6	52,3	61,0	19,3	20,7	31,9	52,1	54,1
Secundaria obligatoria	33,2	39,1	29,1	8,4	33,3	48,2	37,4	40,6	15,6	10,0	47,1	41,6	41,3	21,1	19,7
FP, bachiller	39,9	24,2	13,6	0,0	4,3	15,2	24,7	11,5	5,5	4,0	27,1	30,1	16,3	3,4	3,8
Universitarios	8,2	13,5	13,9	1,2	3,5	1,2	6,7	5,0	8,3	0,0	6,4	6,8	6,2	1,9	2,1
<b>Total individuos excluidos</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>